

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ SEDE VERAGUAS

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN
EN DERECHO PROCESAL**

**“LA ETAPA CALIFICATORIA EN PROCESO PENAL DE
ADOLESCENTES”**

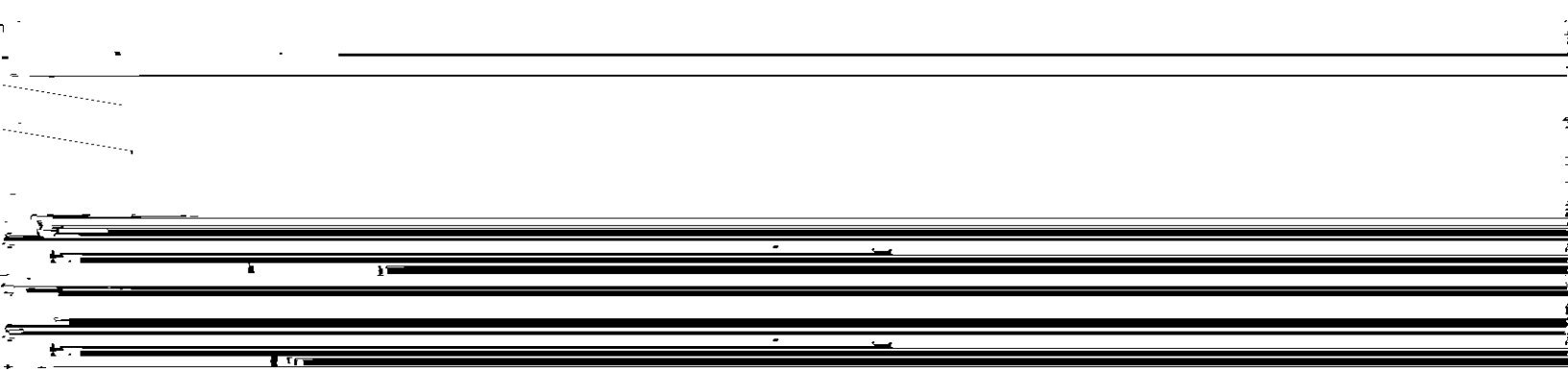
POR:

**FRANKLIN A. PINZÓN GONZÁLEZ
CEDULA No 2-100-529**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN DERECHO PROCESAL
--

2008

DEDICATORIA



AGRADECIMIENTO

Al profesor ÁNGEL MARTÍN GÓMEZ, por su desinteresada ayuda y orientación en la investigación necesaria para la preparación de esta tesis

A la Licenciada MARLEN MORALES DE PONCE Juez de Niñez y Adolescencia, por su orientación y apoyo con el material bibliográfico utilizado en la elaboración de la tesis.

A la Licenciada EDITH GUIZADO, por su apoyo con el material bibliográfico relativo a la investigación desarrollada.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	V
ÍNDICE.....	VI
INTRODUCCIÓN.....	X
CAPITULO 1: EL PROBLEMA	1
1. Antecedentes.....	2
1.1 Planteamiento del Problema	4
1.2 Justificación	5
1.3 Aportes.....	7
1.4 Objetivos de la investigación.....	7
1.4.1 Objetivo General.....	7
1.4.2 Objetivo Específicos.....	7
1.5 Alcance, Delimitación y Limitaciones de la investigación	8
1.5.1 Alcance.....	8
1.5.2 Delimitación	8
1.5.3 Limitaciones	8
1.6 Hipótesis.....	8
 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO.....	 9
2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES	10
2. 1.1 Antecedentes.....	10
2. 1.2 Concepto.....	15
2.1.3 Objeto.....	17
2. 1.4 Características del proceso penal de adolescentes.....	18
2.1.5 La acción penal.....	20
2.1.5.1 Características de la acción penal.....	22
2.1.5.2 La acción penal en el tiempo.....	24
2.1.6 La acusación	25
2.1.7 Los sujetos en el proceso penal de adolescentes.....	28
2.1.7. 1 El adolescente.....	29
2.1.7.2. El Juez	30
2.1.7.3 El Fiscal de adolescentes.....	32
2.1.7.4 El Defensor del adolescentes.....	34
2.1.7.5 La Víctima.....	36

2.2 PRINCIPIOS GENERALES Y RECTORES DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.....	38
2.2. 1 Principio de protección integral.....	39
2.2. 2 Principio de interés superior	40
2.2.3 Principio de respeto de los derechos humanos	44
2.2.4 Principio de la formación integral de la persona del menor.....	46
2.2.5 Principio de la reinserción en la familia y en la sociedad.....	49
2.3. Derechos y garantías fundamentales del proceso penal de adolescentes.	50
2.3. 1 Derechos y garantías procesales reconocidas en la ley No 40 de 1999.....	52
2.3.2 Derechos y garantías procesales reconocidas en los tratados y convenios internacionales aprobados por Panamá relacionados con el proceso penal de adolescentes.....	62
2.3.2.1 La Convención Internacional de los Derechos del Niño.....	63
2.3.2.2 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Juvenil(Reglas de Beijing).....	68
2.3.2.3 Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de libertad.....	75
2.3.2.4 Las Directrices de las Naciones Unidas la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD).....	76
2.4. OTROS CONVENIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.....	79
2.4.1 La Declaración de los Derechos Humanos.....	80
2.4.2 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos	82
2.4.3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).....	84
2. 5 DERECHOS Y GARANTÍAS DE ADULTOS RECONOCIDAS A LOS ADOLESCENTES.....	84
2.6 La Etapa Calificatoria en el Proceso Penal de Adolescentes.....	86
2.6.1 El despacho saneador.....	89
2.6.2 La audiencia de calificación	90
2.6.3 La valoración de las pruebas.....	93
2.6.4 Calificación	97
2.6.4.1 Sobreseimiento.....	97
2.6.4.2 Llamamiento a juicio.....	100
2.6.4.3 Declinación de competencia.....	103
2.6.4.4 La Conciliación	104

2.7 LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES DEL ADOLESCENTE INFRACITOR EN LA ETAPA CALIFICATORIA.....	108
2.7.1 La eficacia y validez de los derechos y las garantías procesales en el proceso penal de adolescentes en Panamá.....	116
 CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO.....	120
3 Tipo de investigación	121
3.1 Fuentes de información	121
3.1.1 Fuentes primarias.....	121
3.1.2 Fuentes secundarias.....	121
3.2 Población y Muestra.....	121
3.2.1 Sujetos.....	121
3.2.2 Muestra.....	121
3.3 Sistema de variables.....	122
3.3.1 Definición conceptual de la variables.....	122
3.3. 2 Definición operacional de las variables.....	122
3.4 Descripción del instrumento.....	123
3.4.1 Cuestionario.....	123
 CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	124
4- Presentación de resultados.....	125
5- CONCLUSIONES	165
6- RECOMENDACIONES	168
BIBLIOGRAFÍA	

INTRODUCCIÓN

En la primera mitad del siglo XX, en Panamá los adolescentes eran Juzgados por la Jurisdicción Penal Ordinaria donde no se le reconocieran derechos y garantías propias de su edad. Al entrar en vigencia la Ley No. 24 de marzo de 1951, los adolescentes son sustraídos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y la investigación y juzgamiento se le atribuye al TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, que tenía competencia en todo el territorio de la República de Panamá.

La adopción del modelo tutelar por la ley No 24 de marzo de 1951, lejos de beneficiar al adolescente, crea en su juzgamiento confusiones que le perjudican, al no establecerse un tratamiento diferenciado entre los que infringían la Ley penal con los que se encontraban en riesgo social por conducta irregular. Este modelo tutelar da como resultado la falta de garantías penales y procesales para el adolescente infractor, porque toda medida aplicada se entendía como un acto de protección del Estado en su beneficio.

La Constitución que entró en vigencia en 1972 se convierte en la primera Norma Fundamental que reconoció expresamente la jurisdicción especial de menores y estableció dos garantías fundamentales a favor de los menores en lo que respecta al acto infractor y la garantía de una jurisdicción especial distinta a la jurisdicción penal de adultos. Actualmente, el fundamento constitucional de la jurisdicción de menores se encuentra en el artículo 63 de la Constitución Política de 1972, el cual señala que la Ley organizará y determinará el funcionamiento de la jurisdicción especial de menores, la cual tendrá entre sus funciones conocer sobre la investigación de la paternidad, el abandono de familia y los problemas de conducta juvenil.

Panamá asume el nuevo derecho de la niñez y la adolescencia cuando firma y ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Posteriormente, firma acuerdos como Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Regla de Beijing), Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los jóvenes privados de libertad, Las Directivas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directivas de RIAD). Estos Instrumentos Internacionales aprobados por Panamá implican una consideración de los niños y adolescentes, como ciudadanos y sujeto de derechos, al igual que las demás personas.

El modelo de protección integral asumido por Panamá mediante la firma de acuerdos internacionales propiciados por la Naciones Unidas no se concretiza en la legislación positiva, sino hasta el 26 de agosto de 1999 cuando se aprueba la ley No 40. Este nuevo instrumento legal integra disposiciones sustantivas y procesales que logran configurar en definitiva una jurisdicción con un proceso especializado para los adolescentes en conflictos con la ley penal, estableciendo dentro de su articulado específicamente en el Capítulo II los Derechos y Garantías Penales de los adolescentes y le da un carácter de especialidad a la jurisdicción. Además establece que en cada etapa del proceso como la Calificatoria deben estar presentes estos derechos y garantías procesales.

En este contexto nuestra investigación está dirigida a identificar y conocer los derechos y garantías procesales que fueron adoptados por el proceso penal de adolescentes introducido por la ley No. 40 de 26 de agosto de 1999, su integración y eficacia en la etapa calificatoria del proceso, haciendo una descripción y evaluación de los mismos. Para lograr este fin, nuestra investigación estará integrada por cuatro capítulos, el primero de ellos ha de referirse al marco conceptual donde se describen el antecedente, planteamiento del problema, la justificación, objetivos de la investigación, alcance, delimitación y limitaciones de la investigación e hipótesis para determinar la necesidad de conocer los derechos y garantías procesales del adolescente infractor y su correcta aplicación en la etapa calificatoria del proceso.

En el segundo capítulo, el cual hemos denominado marco teórico, se abordan los aspectos generales del proceso penal de adolescentes, principios generales del nuevo proceso penal de adolescentes, la etapa calificatoria, la aplicación y eficacia de los derechos y garantías del adolescente infractor conforme a la Ley No. 40 y los instrumentos internacionales aprobado por Panamá; a fin de conocer los aspectos más relevantes del nuevo proceso penal de adolescentes implementado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la opinión de la doctrina dominante que aborda el tema y la jurisprudencia Nacional.

El capítulo tercero se refiere al marco metodológico y en él determinaremos el tipo de investigación a utilizar, fuentes de información, sistema de variables y las técnicas que hemos de implantar para el análisis de las mismas.

El cuarto capítulo, tiene la finalidad de evaluar y hacer el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la técnica utilizada, para medir las opiniones de las personas involucradas en la jurisdicción penal de adolescentes.

Finalmente, expondremos las conclusiones, recomendaciones y bibliografía relacionadas con el tema.

CAPÍTULO PRIMERO
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1- ANTECEDENTES

Desde sus inicios, el proceso penal es un producto cultural íntimamente determinado por las condiciones históricas-políticas imperantes en cada sociedad concreta. Históricamente, se ha conocido desde las civilizaciones Griegas y Romanas, que el proceso penal ha adoptado formas predominantes acusatorias, las cuales coexistieron y fueron precedidas por formaciones de tipo inquisitivo y luego por procesos penales mixtos.

La jurisdicción penal de adolescentes y el proceso penal de adolescentes tiene su inicio cuando el menor es sustraído del marco evolutivo del proceso penal ordinario de adulto, para darle un tratamiento diferenciado atendiendo las características particulares del derecho de menores.

El proceso penal de adolescentes como Institución especializada y autónoma tiene sus primeras manifestaciones legislativas a finales del siglo XIX cuando, en 1899 en Chicago (Illinois), se crea el primer Tribunal para niños. Esta iniciativa legislativa es seguida en Alemania en 1907; Gran Bretaña, Portugal y Francia en 1912.

En España, el proceso penal de adolescentes nace en 1918 cuando se aprueba la ley del Tribunal Tutelar de Menores y en 1920 se crea en Bilbao el primer Tribunal de Niños que tenía una naturaleza híbrida de tipo administrativo – judicial, porque su competencia era de protección, así como también el de reformar a los menores infractores.

En Panamá, la primera ley que habla sobre el juzgamiento a menores se concretiza en el Código Administrativo de 1917, el cual parte sobre la base que el menor de edad carece de capacidad legal y cuando infringe la ley le es aplicable represión. Posteriormente, se aprobó el Código Penal en el año de 1922, el cual permite que el adolescente desde que cumplía los doce años hasta la edad de 21 años, que era cuando alcanzaba su mayoría de edad, podía ser juzgado como adulto reconociéndole a su favor atenuantes de responsabilidad penal que se fundamentaban en su edad.

A nivel Constitucional, la primera norma fundamental que reconoció un régimen especial de menores fue la Constitución de 1946, que hace referencia a la

necesidad de que los menores se encuentren sometidos a una legislación especial incluyendo a los Infractores.

En el mes de marzo de 1951, se crea la ley No. 24 que organiza el denominado Tribunal Tutelar de Menores. Con esta ley se extrae de la jurisdicción penal ordinaria el proceso de menores para ubicarlo en una jurisdicción de tipo protectora, donde el Estado tiene a los menores infractores como pupilos sujetos a una protección sin límites, ni garantías procesales, adoptando características totalmente inquisitivas.

La constitución aprobada en 1972 fue la primera norma constitucional en estatuir realmente la jurisdicción especial de menores, porque consagra dos garantías fundamentales a favor de los menores en lo que respecta al acto infractor y la garantía de una jurisdicción especial distintas a la jurisdicción penal de adultos.

Después de la Ley 24 del 9 de marzo de 1951, no surge en Panamá con rango de ley, otra iniciativa para perfeccionar la jurisdicción penal de adolescentes y no fue hasta 44 años después que se aprobó en Panamá el Código de la Familia, en el año de 1995, donde se observa la problemática de los Menores Infractores; sin embargo, este cuerpo legal, aunque introduce ciertas garantías a favor del adolescente infractor mantiene a un Juez de Menores con amplias facultades inquisitivas en el proceso donde el Juez es el que investiga y juzga a la vez.

Bajo la problemática que representaba las limitaciones del Código de la Familia y la falta de derechos y garantías reales que velaran por un debido proceso para el adolescente infractor, surge la ley 40 de 26 de agosto 1999 con características penales acusatorias. Desde su promulgación, la ley No. 40 de 1999 ha tenido modificaciones; la primera de ellas se dio cuando es aprobada la Ley 46 del 6 de junio de 2003 que aumenta el plazo de la investigación y algunas sanciones. La segunda modificación surge con la aprobación de la Ley No. 48 del 30 de agosto de 2004, la cual afecta sólo la aplicación de las sanciones en centros de cumplimiento.

Las últimas reformas al proceso penal de adolescentes se realizó mediante la ley No 15 de 22 de mayo del 2007, en la cual se destaca la ampliación para el término de la investigación, se incrementan las penas , se reforman las medidas socioeducativas, y se le dan nuevas funciones al Juez de cumplimiento.

1-1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las primeras legislaciones de la República de Panamá consideraban al adolescente jurídicamente incapaz; sin la posibilidad que se le pudieran reconocer derechos y garantías penales así como procesales, porque sólo podían ser objeto de castigo y represión.

Durante la primera mitad del siglo XX, en Panamá los adolescentes eran Juzgados por la jurisdicción penal ordinaria sin que se le reconocieran derechos y garantías propias de su edad. Al entrar Panamá en la etapa tutelar del derecho de menores, se sustrae de la jurisdicción penal ordinaria la investigación y Juzgamiento de los adolescentes infractores que no habían cumplido los 18 años de edad y se les aplica un modelo tutelar donde son considerados pupilos del Estado sujeto a disciplina y protección.

Este carácter Tutelar, lejos de beneficiar al adolescente crea en su juzgamiento confusiones que le perjudican, pues no existía un tratamiento diferenciado entre los que infringían la Ley penal con los que se encontraban en riesgo social por conducta irregular, aplicándole a todos un mismo tratamiento procesal donde no existía garantías penales y procesales para el adolescente infractor, porque toda medida aplicada se entendía como un acto de protección del Estado en su beneficio.

Con la aprobación del Código de la Familia, se atenúa la etapa Tutelar y se introducen novedosas disposiciones en materia de derecho y procedimiento de menores, no obstante, este esfuerzo legislativo no satisfacía las corrientes y preceptos doctrinales que había adoptado Panamá mediante la suscripción de instrumentos internacionales que acogen la doctrina de la especialidad, la protección integral en procesos penales de adolescentes y lo consagrado el artículo 63 de la Constitución Panameña.

En Panamá se a prueba la Ley No. 40 de 26 de agosto de 1999 que buscaba establecer la especialidad de la jurisdicción de adolescentes y un proceso penal de adolescentes.

Este nuevo enfoque que asume el proceso penal de adolescentes en Panamá mira la situación de la niñez como un asunto de derechos humanos, lo cual requiere, en el campo del derecho, la reconstrucción de la condición jurídica de

esta población para darle categoría de sujetos con derechos y garantías cuando son Juzgados como infractores de la Ley Penal.

Esta investigación busca descubrir por medio del examen y análisis de las normas legales que regulan la materia, doctrina, jurisprudencia e informaciones las siguientes interrogantes: ¿Con qué tipo de proceso penal de adolescentes cuenta Panamá actualmente?; ¿Qué derechos y garantías procesales contempla la etapa calificadora del proceso penal de adolescentes?; ¿Están debidamente integradas y son eficaces los derechos y garantías procesales en la etapa calificadora?; ¿Responde esta integración y eficacia a un proceso garantista de corte acusatorio formulado bajo la doctrina de la protección integral que promueve las Naciones Unidas?

1-2 JUSTIFICACIÓN

En Panamá, se vive una grave crisis social que ha producido una desintegración familiar producto de la violencia doméstica, falta de oportunidades de empleo, drogas que están íntimamente vinculadas a la difícil situación socioeconómica que atraviesa el país. Aunado a esto, está también la pérdida de valores sociales como lo son la solidaridad y el respeto que han dejado secuelas en el incremento de la delincuencia, pues en muchas ocasiones están involucradas personas menores de 18 años.

Ante esta panorámica actual la justicia de adolescentes es hoy día una área prioritaria no sólo en el ámbito nacional, sino también internacional; porque en la mayoría de las ocasiones las mismas condiciones socioeconómicas que producen la delincuencia juvenil en Panamá se dan en los países iberoamericanos que confrontan el mismo problema. Por ello, es permanente el proceso de revisión y actualización de las legislaciones nacionales en función de normativas innovadoras orientadas por las Naciones Unidas. Panamá no es la excepción en esta revisión y actualización; razón por la cual ha tratado de modernizar su legislación penal para adolescentes con la aprobación de la Ley No. 40 del 26 de agosto de 1999.

Este nuevo instrumento que surge en el año 1999 debía responder a la Doctrina

de la Protección Integral delineada por las Naciones Unidas, y adoptada por la mayoría de los países Iberoamericanos conforme a instrumentos internacionales tales como:

- 1- La Convención Internacional de los Derechos del Niño
- 2- Las Reglas Mínimas de las naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Regla de Beijing).
- 3- Las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes. Privado de Libertad.
- 4- Las Directivas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (directivas de RIAD).

Estos instrumentos internacionales aprobados por Panamá implican una consideración de los niños y adolescentes, como ciudadanos y sujeto de derechos, al igual que las demás personas. Este nuevo enfoque en el ámbito del derecho penal de adolescentes llegó a nosotros con la Ley No. 40 del 26 de agosto de 1999, que debe contener todas las garantías procesales establecidas en el proceso penal ordinario de adulto y también, aquellos derechos y garantías específicas para la niñez y adolescencia, a fin de mantener el carácter de especialidad de esta jurisdicción y a la vez busca que nuestro país cumpla con las normas internacionales adoptadas por Panamá.

En este contexto, se hace necesario un estudio sobre estos derechos y garantías para determinar si están realmente consagrados y son efectivos en el proceso penal para adolescentes instituido en Panamá mediante la Ley 40 del 26 de agosto de 1999, especialmente en su etapa calificatoria, porque es en esta etapa donde se hace realmente una valoración jurídica del proceso que se adelanta contra un adolescente Infractor por el funcionario de instrucción y las pruebas puedan adquirir validez o no, para abrir la causa penal a un adolescente acusado de haber infringido la Ley penal.

Esto es necesario, pues la justicia penal de adolescentes no goza de claras referencias en la opinión Pública en Panamá y existen sectores sociales, que se han hecho sentir bajo la opinión de un tratamiento más severo de los adolescentes que transgredían la ley penal.

1-3 APORTES:

Una vez identificados correctamente los derechos y garantías procesales que tiene el adolescente infractor en la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes implementado en Panamá, pretendemos que nuestro trabajo sirva como marco de referencia para futuras modificaciones de la ley No. 40 de 1999, la cual permita perfeccionar el actual proceso penal de adolescentes y lo convierta en un proceso acusatorio de corte garantista donde las facultades del que juzga estén debidamente separadas con el que investiga el acto infractor.

EL análisis e interpretación de la jurisprudencia y doctrina que realizaremos de los fallos adoptados por los Tribunales que administran la justicia penal de adolescente en Panamá, servirán de guía a los profesionales del derecho para una correcta aplicación de la ley No. 40 de 1999.

1- 4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Conocer los derechos y garantías procesales que fueron adoptados por el proceso penal de adolescentes introducido por la ley No. 40 de 26 de agosto de 1999, su integración y eficacia en la etapa calificatoria del proceso para hacer una descripción y evaluación que nos permita realizar las conclusiones y recomendaciones de la problemática existente.

1.4.2 Objetivos Específicos

- ♦ Identificar los derechos y garantías procesales del adolescente infractor en los instrumentos internacionales sobre niñez y adolescencia adoptados por Panamá y en la ley No 40 de 26 agosto de 1999.
- ♦ Determinar como han sido integrados estos derechos y garantías procesales en la etapa calificatoria.
- ♦ Identificar los fines y objetivos de la etapa calificatoria en el proceso penal de adolescentes y su procedimiento.
- ♦ Establecer si la integración de los derechos y garantías procesales del

adolescente infractor, en la etapa calificatoria, responde a un modelo Garantista de Corte Acusatorio o si sólo es un proceso penal de tipo mixto con ciertos elementos de corte acusatorio.

♦ Aportar conclusiones y recomendaciones que orienten futuras reformas legales sobre el proceso penal de adolescentes en Panamá.

1-5 ALCANCE, DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Alcance:

La investigación a realizar se ubicará, principalmente, dentro del contexto que establece la Constitución de Panamá, la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 y sus modificaciones realizadas mediante la ley No 46 de 6 de junio de 2003, la ley No 48 de 30 de agosto de 2004 y los instrumentos internacionales ratificados por Panamá sobre la niñez y adolescencia. Se analizarán criterios doctrinales y jurisprudencia que definen y fijan el alcance y contenido de los derechos y garantías procesales del adolescente infractor.

1.5.2 Delimitación:

El área de delimitación de esta investigación se centra en las provincias de Veraguas.

1.5.3 Limitaciones:

Dentro de las limitaciones en la investigación a realizar, se prevé el tiempo disponible para el desarrollo de la misma, así como la obtención de bibliografía actualizada sobre el tema y el acceso a la información, entre otros.

~~1-6~~ HIPÓTESIS

~~La~~ Etapa Calificatoria en el proceso penal de adolescentes constituye un medio eficaz y oportuno para el cumplimiento de los derechos y garantías procesales del adolescente infractor.

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO

2- ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES:

2.1.1 Antecedentes:

El Derecho de menores y el proceso penal de adolescentes es de reciente creación, su historia se circunscribe a más o menos 100 años de existencia que es cuando alcanza su autonomía como Institución especializada.

En el proceso penal de adolescentes dentro de su evolución histórica se distinguen dos fases: La primera fase abarca desde el inicio de esta disciplina jurídica hasta la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el año de 1989, manteniendo su influencia, incluso, durante la pasada década. La segunda fase se inicia con la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que impulsó la gran mayoría de las nuevas legislaciones internas que se dieron en la década de los 90, generando importantes procesos de cambio no sólo en lo político-económico, sino también en lo jurídico.

La primera fase de la evolución histórica del proceso penal de adolescentes es influenciada por el Modelo Tutelar que se fundamenta en la llamada "Doctrina de la Situación Irregular", según la cual el menor de edad es considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, objeto y no sujeto de derecho. La figura del juez es una figura "paternalista" que debe buscar una solución para ese menor objeto de protección, el cual se encuentra en situación irregular. Los menores en esta fase evolutiva del proceso eran considerados no imputables por la comisión de delitos y por tanto no susceptible de sanciones penales, sino merecedores de medidas tutelares, que se les aplican en su beneficio, por encontrarse en situaciones irregulares sea por haber cometido un delito, o por encontrarse en

situaciones de peligro moral o material. Esta doctrina generaba según Carlos Tiffer “un proceso con un sistema inquisitorial donde la figura central es el juez: la participación del abogado defensor es posible, pero no necesaria; el proceso es escrito, secreto y privado; existe una gran limitación de recursos legales; se le da preponderancia a la intervención de los trabajadores sociales; y el objeto del proceso es la investigación de la personalidad y peligrosidad de la persona del menor de edad “ (TIFFER SOTOMAYOR, Carlos: Justicia juvenil y policía, Editorial Ilanud, UNICEF, San José Costa Rica, 2001, Pág. 10).

Este modelo tutelar constituyó el fundamento de las legislaciones de menores antes de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene sus primeras manifestaciones legislativas a finales del siglo XIX cuando, en 1899 en Chicago (Illinois), se crea el primer Tribunal para niños. Esta iniciativa legislativa es seguida en Alemania en 1907, Gran Bretaña, Portugal y Francia en 1912. En España, el proceso penal de adolescentes nace en 1918 cuando al aprobarse la ley del Tribunal Tutelar de Menores y en 1920 se crea en Bilbao el primer Tribunal de Niños que conocía casos de protección y de reforma a los Menores Infractores. A nivel Latino Americano, la etapa tutelar comienza con la ley de Agote aprobada por Argentina en 1919 y posteriormente es adoptada por el resto de los países Latino Americanos.

La segunda etapa evolutiva del proceso penal de adolescentes nace con la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y asume como fundamento ideológico la “Doctrina de la Protección Integral”, la cual considera

que el adolescente debe estar sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo sea éste social, psíquico o jurídico. Esta doctrina es definida por Alessandro Baratta como “ el conjunto de principios que otorga al niño o adolescente la categoría jurídica de sujeto pleno de derechos, establece una nueva dimensión en la calificación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia sobre la base de preferencia y prevalecía del interés superior del niño y adolescente, obligando a un esfuerzo colectivo de la familia, la sociedad y el Estado para la vigencia, defensa y efectividad de estos derechos en forma integral” (BARATTA, Alessandro: La Situación de protección del niño en América Latina, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1992, Pág. 89.

Esta nueva concepción ve la conducta infractora del adolescente desde una perspectiva punitivo-garantista, debido a que se le atribuye al menor de edad una mayor responsabilidad, pero, a su vez, le son reconocidas una serie de garantías sustantivas y procesales que no eran siquiera pensadas dentro de la concepción tutelar.

Bajo esta nueva perspectiva se busca un panorama que tienda a sustituir los procedimientos inquisitivos con sus características de ser escritos y con una prolongada etapa secreta de instrucción sumarial, por procedimientos acusatorios, orales y públicos con un afianzamiento de las garantías, e introduciendo mecanismos para derivar algunos conflictos a las vías de resolución no penales y con una tendencia también, en materia de derecho penal de fondo, a reformar los códigos o a sustituirlos, introduciendo sanciones no

privativas de libertad para delitos a los que hasta ahora sólo se respondía con prisión.

En Panamá, la primera ley que habla sobre el juzgamiento a menores se concretiza en el Código Administrativo de 1917, el cual parte sobre la base que el menor de edad carece de capacidad legal y cuando infringe la ley le es aplicable represión. Posteriormente, se aprobó el Código Penal en el año de 1922, que permite al adolescente desde los doce años hasta la edad de 21 años, que era cuando alcanzaba su mayoría de edad ser juzgado como adulto, reconociéndole a su favor atenuantes de responsabilidad penal que se fundamentaban en su edad.

A nivel Constitucional, la primera norma fundamental que reconoció un régimen especial de menores fue la Constitución de 1946, la cual hace referencia a la necesidad de que los menores se encuentren sometidos a una legislación especial, incluyendo a los infractores, acogiendo de esta manera la base de la doctrina tutelar que orientaba las legislaciones de menores de la época.

En el mes de marzo de 1951, se crea la ley No 24 que organiza el denominado Tribunal Tutelar de Menores. Con esta ley se extrae de la jurisdicción penal ordinaria el proceso de menores para ubicarlo en una jurisdicción de tipo protectora, donde no existía un procedimiento en el juzgamiento del adolescente infractor, pues la investigación, la decisión y la aplicación de las medidas de protección estaban concentradas únicamente en el Tribunal Tutelar de Menores, institución esta que era la llamada a proteger al adolescente en su integridad física y emocional. Esta ley 24 respondía a la doctrina de la Situación Irregular del

menor.

La Constitución aprobada en 1972, actualmente vigente, estableció la jurisdicción especial de menores con dos garantías fundamentales a favor de los menores en lo que respecta al acto infractor y la garantía de una jurisdicción especial distinta a la jurisdicción penal de adultos.

Panamá integra a su ordenamiento legal la Convención Sobre Los Derechos del Niño mediante la ley No 15 de 16 noviembre de 1990. Posteriormente, se creó el Código de la Familia en el año de 1995 donde se observa la problemática de los menores infractores; sin embargo, este cuerpo legal, aunque introduce ciertas garantías a favor del adolescente infractor no asume totalmente la "Doctrina de la Protección Integral" adoptada por la Convención de los Derechos del Niño y mantiene a un Juez de Menores con amplias facultades inquisitivas en el proceso, donde el Juez es el que investiga y juzga. Estas facultades son similares a las que tenía el Juez en el Modelo Tutelar.

Bajo la problemática que representaba las limitaciones del Código de la Familia y la falta de derechos y garantías reales que velaran por un debido proceso para el adolescente infractor surge la ley No 40 de 26 de agosto 1999, la cual crea un proceso de tipo garantista que respondía a la "Doctrina de la Protección Integral". Desde su promulgación, la ley No. 40 ha tenido modificaciones; la primera de ellas se dio cuando es aprobada la Ley 46 del 6 de junio de 2003 que aumenta el plazo de la investigación y algunas sanciones. La segunda modificación surge con la aprobación de la Ley 48 del 30 de agosto de 2,004, la cual afecta sólo la aplicación de las sanciones en centros de cumplimiento y la última modificación surge mediante la Ley No 15 de 22 de mayo del 2007 que extiende los plazos

para investigación, aumenta las penas en delitos graves, y le asigna nuevas funciones a los Jueces de cumplimiento.

2.1.2 Concepto:

La actividad jurisdiccional de las autoridades competentes para la investigación y especialmente para el enjuiciamiento y sanción del delito, cuando está involucrado un adolescente, requiere de la existencia de un proceso.

Para algunos autores como Wilfredo Sáenz cuando definen el ejercicio de esa actividad jurisdiccional que tiene principios, normas y formalidades y que es conocido como proceso penal de adolescentes, lo hacen señalando que es "El conjunto de actos seguidos ante la autoridad competente, para determinar si ha sido llevado a cabo un acto infractor debidamente tipificado en la ley penal como delito, que persona o personas tienen conocimiento del hecho y quien o quienes están vinculados con el mismo, con el fin de calificar la fase respectiva, ya sea con un sobreseimiento, enjuiciamiento, reconocer la existencia de cualesquiera de los medios excepcionales de terminación del proceso, prescripción o extinción de la acción penal o de la pena, absolver o declarar la culpabilidad con la correspondiente aplicación de la sanción respectiva y posible reconocimiento del beneficio de la desprisonalización" (SAENZ, Wilfredo: Las Perspectiva de Actualización de las Fases del Proceso Penal Panameño, Ediciones El Canal, Pág. 47).

Otros autores como JULIO HERNANDEZ PLIEGO define el proceso penal como "un conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno en tanto regula las relaciones entre el Estado y los particulares como destinatarios de ellas que hacen posible la aplicación del derecho penal sustantivo a los casos

concretos con el propósito de preservar el orden social" (HERNANDEZ PLIEGO, Julio: Programa de Derecho Procesal Penal Segunda edición, Editorial Temis, Bogotá Colombia, Pág. 3), por su parte ARMANDO FUENTES RODRIGUEZ define el proceso penal " un conjunto de actos conforme a los cuales el juez aplicando la ley resuelve el conflicto de intereses sometido a su conocimiento por el Ministerio Público" (FUENTES RODRIGUEZ, Armando: Manual de derecho procesal penal panameño, Editorial Portobelo, Panamá, 2007, Pág. 28.).

De estas definiciones conceptuales del proceso penal que nos da la doctrina, podemos decir que existe un consenso en señalar que el proceso en materia de los adolescentes es un conjunto de normas jurídicas que establecen las formalidades que deben cumplirse para la investigación sobre la comisión de un delito y el juzgamiento al adolescente infractor, con el fin de que previo el juicio de responsabilidad penal se impongan las sanciones correspondientes, porque el proceso penal de adolescentes es el instrumento jurídico que regula los principios, normas y formalidades para perseguir y sancionar el acto infractor.

En este sentido, nos permitimos definir el proceso penal de adolescentes, influenciado bajo la Doctrina de la Protección Integral adoptada por Panamá, como el Instrumento legal que contiene una serie sucesiva de actos jurídicamente regulados que llevan al juzgamiento con las debidas garantías penales y procesales y el respeto de la dignidad humana de una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad y ha sido señalado como autor o partícipe de una conducta social que es tipificada como delito por el ordenamiento positivo penal vigente, para hacer una declaratoria de responsabilidad penal e imponer una pena en caso de resultar culpable buscando su reinserción familiar y social.

2.1.3 Objeto

El objeto del proceso penal de adolescentes al igual que el proceso penal de adultos tiene como objeto general las acciones y omisiones tipificadas por la ley penal y sometida a enjuiciamiento. La ley 40 de 26 de agosto al definir el objeto del proceso penal de adolescentes creado en Panamá, en su artículo 42 dispone:

Artículo 42: El proceso penal de adolescentes tendrá como objetivo establecer la comisión del acto infractor, determinar quién es su autor y el grado de participación al que hubiere lugar, y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes.

Este artículo establece tres objetivos fundamentales del proceso: el primero de ellos es establecer la comisión del acto infractor, pues no se concibe la consecución de un proceso sino se ha producido una conducta que violente el ordenamiento positivo, lo cual según el artículo 2 de la ley 40 deben ser hechos que sean descritos como delito en la ley penal quedando expresamente fuera de esa posibilidad las falta y contravenciones establecidas en el Código Administrativo y otras leyes especiales de las que se ocuparían los Juzgados de niñez y adolescencia; el segundo objeto del proceso penal de adolescentes es determinar quién es el autor del hecho investigado y el grado de participación al que hubiere lugar, esta finalidad u objeto es consecuencia directa del nuevo modelo garantista de justicia juvenil que ha asumido Panamá que le atribuye a los jóvenes delincuentes una responsabilidad con relación a sus actos, pero a la vez les reconoce las garantías de juzgamiento de los adultos, así como otras consideradas especiales por su condición de menores de edad.

El tercer objeto del proceso penal de adolescentes es el de sancionar al adolescente infractor, pero esta sanción no está orientada bajo los parámetros

tradicionales de sanción en los procesos penales de adultos que busca comúnmente una privación o restricción de bienes jurídicos o derechos y la prevención de la comisión de nuevos delitos, pues el fin de la sanción penal juvenil es eminentemente pedagógico y el objetivo fundamental del amplio marco sancionatorio es el de fijar y fomentar las acciones que le permitan al menor de edad su permanente desarrollo personal, la reinserción en su familia y a la sociedad. Sin embargo, también se toma en cuenta que la sanción contiene además un carácter negativo, ya que limita derechos del individuo y en este sentido responde también a los criterios de la prevención general.

También, cabe destacar que en todo proceso penal es frecuente que aparezcan acumulados otros objetos de naturaleza civil, ya que de todo delito emana la responsabilidad de resarcir los daños y perjuicios causados con el ilícito cometido. No obstante, el proceso penal de adolescentes de Panamá en su artículo 53 indica que toda reclamación civil debe promoverse ante la jurisdicción civil y bajo las reglas del proceso civil, a menos que el Juez penal de adolescentes haya establecido a solicitud de la víctima o afectada la cuantía de los daños y perjuicios causados. Esta regulación a nuestro juicio es sana, puesto que muchas veces cuando se mezclan procesos de distinta naturaleza el objeto principal se pierde y la finalidad primordial del proceso se desvirtúa en detrimento de la función educativa y resocializadora que el proceso penal de adolescentes debe cumplir cuando juzga a un adolescente infractor.

2.1.4 Características del Proceso Penal de Adolescentes

La nueva Doctrina de Protección Integral que surge con la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención Sobre los Derechos del Niño, trae al ámbito

jurídico a nivel mundial la consecución de un proceso penal de adolescentes de corte garantista y acusatorio que ha sido adoptado por la mayoría de los países Latinoamericanos dentro de los que se encuentran la República de Panamá. La protección integral del adolescente ha establecido características reconocidas por la doctrina jurídico-penal dentro de la que se destacan:

- ◆ Reconoce que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho en etapa de desarrollo, lo que significa admitir que van adquiriendo paulatinamente responsabilidades de tipo jurídico y que, por lo tanto, a partir de determinada edad (la adolescencia) se hacen responsables frente al sistema penal, de distinta manera que los adultos, mediante una normativa específica.
- ◆ Distingue, claramente, los casos de delito o infracción a la ley penal de otros casos y situaciones sociales no penales a los que las legislaciones del modelo tutelar daban la misma respuesta o similar.
- ◆ Establece ~~para los~~ para los adolescentes las garantías del debido proceso sustancial y formal de los adultos, más las garantías específicas que les ~~corresponden~~ corresponden en razón de su edad.
- ◆ Procura evitar el enjuiciamiento de los adolescentes previendo opciones para no iniciarlo, suspenderlo o finalizarlo anticipadamente.
- ◆ Establece una gama de sanciones, entre las cuales la privativa de libertad adquiere el carácter de excepcional, reservada para los delitos más graves, y siempre que no sea posible aplicar una sanción diferente.
- ◆ Crea una nueva justicia especializada en la materia.
- ◆ Permite la participación de la víctima en el proceso.

Otro sector de la doctrina establece que el proceso penal de adolescentes tal como ha sido estructurado por la protección integral, presenta como características un mayor acercamiento a la justicia penal de adultos en lo que se refiere a derechos y garantías individuales, se da un refuerzo de la posición legal de los jóvenes y adolescentes y una mayor responsabilidad por sus actos delictivos. Se limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal.

Por otra parte, se le da mayor atención a la víctima bajo la concepción de la necesidad de reparación del daño a la misma, al igual que se busca la desjudicialización, al máximo posible por, medio de controles formales como el principio de oportunidad, la conciliación entre el autor y la víctima, la suspensión del proceso a prueba y la condena de ejecución condicional sin limitaciones.

2.1.5 La Acción Penal

La acción penal tradicionalmente es considerada una función pública a cargo del Estado que se ejerce a través de la rama jurisdiccional del Poder Público. Esta función puede decirse que es un derecho subjetivo de la actividad jurisdiccional, en virtud de la cual el Estado ante la "notitia criminis" debe iniciar la investigación penal donde una vez acreditado la existencia de un hecho punible ejerce una pretensión punitiva ("jus puniendi").

Modernamente, se ha desarrollado un concepto más operativo, el cual entiende a la acción penal como un poder jurídico capaz de reclamar la prestación de la función jurisdiccional, o bien, como un derecho subjetivo procesal (autónomo e instrumental) para solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial, y obtener un pronunciamiento.

En este sentido, según HERNANDO LONDOÑO JIMÉNEZ la doctrina ha

entendido que “la acción penal no nace exclusivamente del delito, ya que también se origina en la hipótesis del hecho punible. Tanto es así que dentro del objeto de la investigación lo primero que debe proponerse el instructor es establecer si se ha infringido la ley penal por lo que puede llegar a resultar y con frecuencia resulta en la práctica que hubo el ejercicio de la acción penal, sin que realmente hubiere existido un delito que justificara plenamente el compromiso legal de investigarlo.” (LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando: Tratado de derecho procesal penal, tomo I, Editorial Temis, Bogotá Colombia, 1989, Pág. 109).

Resulta entonces que la acción penal es un derecho subjetivo y un derecho potestativo ejercido por su titular; como derecho subjetivo, la acción estaría encaminada a hacer funcionar la máquina del Estado en búsqueda de tutela jurisdiccional, y como derecho potestativo, la acción estaría dirigida a someter al imputado a los fines del proceso. Esto trae un matiz adicional, y es que su ejercicio está regulado dando titularidad sólo al indicado por la ley, significando ello una garantía para aquellos que puedan ser imputados por la presunta comisión de un delito. Así pues, la acción penal es la manifestación del poder concedido a un órgano oficial (Ministerio Público) o titular particular (en casos excepcionales), a fin de que lo ejerza solicitando una declaración judicial tras la hipótesis de la comisión de delito.

El Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes que ha sido implementado en Panamá por la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 asume esta moderna concepción de la acción penal al reconocerle el ejercicio exclusivo de la misma a un ente especializado. En su artículo 26, la ley No 40 indica que la acción penal especial será ejercida por el Ministerio Público a través de los

Fiscales de Adolescentes, quienes tienen la potestad exclusiva de promover oficiosamente las acciones necesarias para la determinación de la responsabilidad penal de los adolescentes en la comisión de infracciones a la ley penal.

Por su parte, el artículo 79 de la ley No 40 señala que "El Ministerio Público ejerce la función de persecución del acto infractor exclusivamente por medio de los Fiscales de adolescentes quienes serán lo encargados de realizar la investigación y de formular la acusación cuando exista merito para hacerlo". Estas normas ubican la acción penal de adolescente como una potestad exclusiva del Estado y la obligatoriedad de especialidad de la agencia de instrucción que adelanta la investigación del acto infractor.

La ley No 40 reconoce también el derecho subjetivo de las personas afectadas por delitos de instancia privada, haciendo funcionar la máquina del Estado en búsqueda de tutela jurisdiccional al establecer el artículo 77 de la ley No 40 que en los delitos de acción privada, la investigación sólo se iniciará a solicitud de la persona ofendida, manteniendo así la condición de procedibilidad de la acción penal en manos de las víctimas cuando se tratan de actos infractores de carácter privado donde la facultad jurisdiccional del Ministerio Público de investigar el actor infractor se activa si existe la autorización de la víctima a través de la querella penal para que se investigue el ilícito, tal como ocurre en la acción penal de adultos.

2.1.5.1 Características de la acción penal de Adolescente:

La acción penal en el proceso penal de adolescentes al igual que la acción penal en los procesos penales de adultos tiene características especiales que la

diferencian de otras acciones. Entre estas tenemos:

1- Publicidad: La acción penal está dirigida a los órganos del Estado y tiene además importancia social, puesto que está orientada a restablecer el orden social perturbado por la comisión de un acto infractor.

2- Oficialidad: Tiene un carácter público, su ejercicio se halla monopolizado por el Estado a través del Ministerio Público, titular de la acción penal y que actúa de oficio, a instancia de la parte agraviada, por acción popular o por noticia policial (con excepción de los delitos perseguibles por acción privada). El Ministerio Público tiene la facultad de perseguir de oficio (oficiosidad) el acto infractor sin necesidad de denuncia previa o por noticia de la comisión de un hecho delictivo. La oficialidad y oficiosidad son características que tienen un mismo origen: el monopolio del Estado en la persecución del acto infractor.

3- Indivisibilidad: La acción penal es única, si bien en el proceso aparecen actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única y tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han participado en la comisión del acto infractor. No existen distintas acciones que correspondan a cada agente, sino una acción indivisible.

4- Obligatoriedad: La obligación por parte del Ministerio Público de ejercitar la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho ilícito.

5- Irrevocabilidad: Una vez promovida la acción penal sólo puede concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria, con un auto que declara el sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o declara fundada una excepción. No hay posibilidad de desistimiento o transacción como ocurre en el caso de los procesos iniciados por acción privada o en los casos en los que se aplican los

Criterios de Oportunidad. Esta característica es la que distingue la acción pública de la privada

6- Intransferible: la ley sólo autoriza al que tiene el derecho de ejercer la acción penal, por tanto, es un derecho indelegable. En el caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público y en caso de la acción penal privada, corresponde al agraviado o a su sustituto legal. En ambos casos estamos frente a acciones que están dirigidas contra adolescentes, determinados y naturales, pues las personas jurídicas no cometen delitos como tales y la acción penal no puede estar dirigida tampoco a personas inexistentes o indeterminadas.

7- Discrecional: Esta característica es propia en la Jurisdicción penal de adolescentes al incluirse el criterio de oportunidad, El Fiscal de Adolescentes tiene la potestad de ejercer la acción penal o no continuar la investigación cuando el hecho investigado se encuentra los supuestos que contempla el artículo 67 de la ley No 40.

2.1.5.2 La acción penal en el tiempo:

En la acción penal especial su ejercicio no es ilimitado en el tiempo, pues la ley No 40 establece un término en el cual el Ministerio Público puede ejercer el “jus puniendi” a fin de que el acto infractor no solo sea investigado, sino también sancionado en caso de resultar culpable. Este término es un lapso de tiempo perentorio y se conoce una prescripción extintiva, porque el sólo transcurso del mismo priva al Estado de ejercer su facultad punitiva ante un adolescente que ha infringido la ley penal.

Con arreglo a la regulación contenida en el artículo 121 de la ley No 40, la acción

penal en un proceso penal de adolescentes puede prescribir a los siete años en los delitos de homicidio doloso, a los cinco años cuando se trata de delitos graves como la violación sexual, secuestros, robos, tráfico ilícitos de drogas, lesiones personales con resultado muerte y el resto de las conductas punibles tipificadas por la ley penal en tres años. El término empieza a contabilizarse desde el día que se cometió el ilícito, o desde el día que se interrumpe la prescripción según lo dispuesto en el artículo 123 de la ley No 40, el cual establece la interrupción de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos:

- ◆ La declaración de rebeldía
- ◆ El acuerdo conciliatorio
- ◆ La resolución que ordena la apertura a juicio
- ◆ La resolución que decreta la suspensión condicional del proceso
- ◆ La resolución que ordena la reposición del expediente.

2.1.6 La Acusación:

EL Ministerio Público es el destinatario para cumplir con el deber jurídico de la persecución penal como una obligación funcional conferida por el Estado, mediante la cual tiene la obligatoriedad de prevenir, dirigir y promover la investigación preprocesal y procesal penal. Este deber jurídico se ejerce cuando en la investigación dentro de un "moderno proceso garantista y de corte acusatorio que propugna la doctrina de la "Protección Integral "se le encomienda o concede al Ministerio Público sin perjuicio del control que sobre la legalidad de su actuación que le corresponde al Juez, especialmente cuando se trata de afectar derechos fundamentales de los adolescentes, la facultad de formular y

sostener la acusación.

En este sentido, tenemos que la acusación no es más que el cargo que se formula ante autoridad competente contra persona o personas determinadas por considerarlas responsables de un delito, con el objeto de que se le aplique la sanción prevista y reviste una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal (Ministerio Público), por la cual haciendo mérito de las piezas de convicción allegadas al sumario formula un juicio de culpabilidad en contra del adolescente procesado que hubiese sido indagado sobre el objeto de reproche. La acusación debe ser concreta, precisa y terminante en cuanto a todos y cada uno de los hechos delictuosos motivo del proceso, y en cuanto a la imputabilidad y responsabilidad de los adolescentes procesados, y si no existe, su omisión anula la sentencia.

En el nuevo proceso penal de adolescentes que se implementó con la Ley No 40, se establece la necesidad de una acusación por parte del Fiscal de Adolescentes para adelantar en la etapa intermedia un proceso penal contra un adolescente. Esto lo señala el párrafo final de artículo 89 cuando nos dice "Si no hay acusación, el Juez no puede llamar a juicio ". Este requerimiento es uno de los logros significativos de la Doctrina de Protección integral, pues en la Etapa Tutelar del derecho de adolescentes el Juez de Menores sin una acusación de haber cometido un delito se sometía a un adolescente a proceso inquisitivo, escrito y se le aplicaba medidas cautelares bajo el pretexto de protección.

La ley No 40 también permite a la parte ofendida en los delitos de instancia privada formular la querrela penal para que se investiguen, sin embargo esto no significa que el querellante se convierte en parte acusatoria, pues la ley No 40 en

su artículo 46 indica claramente que las víctimas, aunque tienen derecho a participar no son parte del proceso, por lo tanto, a nuestro juicio no puede tenerse como parte acusadora al querellante, porque la querella que formula sólo es una condición de procedibilidad de la acción penal en los delitos de instancia privada en proceso penal de adolescentes y no lo convierte en parte del mismo como ocurre en el proceso penal ordinario según lo dispuesto artículo 15 de la ley No 31 de 28 de mayo de 1998.

La acusación conforme ha sido regulada en la Ley No 40 exige que el Fiscal de Adolescentes, una vez haya terminado la fase de instrucción, le presente al Juez de la causa junto con la investigación realizada, un escrito de acusación formal que debe contener según el artículo 86 de la Ley No 40 lo siguiente:

2. Las condiciones personales del adolescente o de la adolescente, o si se ignoran, las señales o los datos que le pueden identificar;
3. La edad y el domicilio del adolescente o de la adolescente, si se cuenta con esa información;
4. La relación de los hechos, con indicación si es posible del tiempo y el modo de ejecución, así como la indicación y el aporte de todas las pruebas evaluadas durante la investigación;
5. La calificación provisional y específica del presunto acto infractor cometido;
6. Cualquiera otra información que se considere conveniente y sustente la acusación.

Como puede observarse, el escrito de acusación en un proceso penal de adolescente establece que el agente de instrucción indique claramente el nombre del adolescente al que se le formulan los cargos, el ilícito cometido y las pruebas

con que cuenta el Fiscal para solicitar su llamamiento a juicio. Esta regulación responde a un proceso penal garantista de corte acusatorio, porque el adolescente conoce el delito que se le imputa y las pruebas que existen en su contra, lo que le da la oportunidad de contradecirlas.

Por último, es necesario señalar que el artículo 95 de la ley No 40 sólo le permite al Juzgador solicitarle al Ministerio Público que corrija aspectos formales del escrito de acusación, la cual implica que en el proceso penal de adolescentes el Juez de la causa no puede ordenar una ampliación del sumario, lo que a nuestro juicio es saludable, porque el Juzgador no se contaminaría participando de la instrucción sumarial al solicitar que se realicen diligencias o acopien pruebas que él posteriormente, valoraría al calificar el hecho, esto garantiza la imparcialidad del Juez.

2.1.7 Los Sujetos en el Proceso Penal de Adolescentes:

El concepto de partes no coincide necesariamente con el de sujetos procesales: el juez, por ejemplo, no es parte y tampoco tiene el mismo valor en el proceso civil que en el penal. El Ministerio Público se considera parte pública en contraposición a las partes privadas; así tenemos que se considera parte el sujeto jurídico que pretende o frente a quien se pretende la tutela jurisdiccional concreta y que afectado por el pronunciamiento judicial correspondiente asume plenamente derechos, cargas y responsabilidades inherentes al proceso. Por ello, cuando en el proceso actúan representantes, la parte procesal verdadera es siempre el representado, porque en el proceso penal se deduce una relación de derecho sustantivo que reviste de las facultades procesales necesarias para hacer valer los derechos, o respectivamente para oponerse al objeto debatido.

En el proceso penal de adolescentes es parte, El Ministerio Público y el Acusado.

2.1.7.1 El Adolescente:

Desde el punto de vista jurídico doctrinario minoril, la parte imputada en el proceso penal de adolescentes, es aquella persona menor de edad a quien se le endilga o carga, en cualquier grado legal, la participación penal en un hecho delictuoso que se investiga en un proceso, mientras que en el ámbito de la normativa procesal general la "calidad de imputado" es la que señala a cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como participe de un delito. Al referirnos al "imputado" esto de ninguna manera da lugar a interpretar que estamos ya ante el culpable o responsable del hecho que se le atribuye. Y es así, porque esa calidad puede desvanecerse o agravarse a lo largo del proceso.

En el nuevo proceso penal de adolescentes, la calidad de imputado que se le da a un adolescente vinculado de cualquier forma a la comisión de ilícito, se basa en un principio de responsabilidad penal de los adolescentes que no está relacionado con su capacidad de culpabilidad o imputabilidad, ya que a los adolescentes que se encuentran dentro del margen las edades establecidas entre los 14 a menos de 18 años, se le atribuye en forma diferenciada respecto de los adultos, las consecuencias de sus actos que siendo típicos, antijurídicos y culpables significan la realización de un delito, el cual se encuentran contenidos en la ley penal y que es de obligatorio cumplimiento tanto para adultos y menores de 18 años.

Estas circunstancias conllevan que los destinatarios del proceso penal de adolescentes según la Ley No 40 sean las personas mayores de 14 años y menores de 18 años a quienes se le atribuye la comisión o participación en un

hecho de carácter delictivo, así como aquellos que siendo mayores de edad se les involucra en la comisión de un ilícito penal cuando eran menores de edad. Esto lo determina explícitamente el artículo 7 de la Ley No 40 cuando nos dice:

Artículo 7: Esta ley es aplicable a todas las personas que hayan cumplido los catorce y no hayan cumplido los dieciocho años de edad al momento de cometer el acto infractor que se le imputa. Igualmente se aplica a los procesados que cumplan los dieciocho años durante el trámite del proceso, así como las personas mayores de edad acusadas por actos cometidos luego de haber cumplido los catorce y antes de cumplir los dieciocho años.

El adolescente que infringe la ley penal ya sea como autor o participe de hechos delictivos, al igual que el proceso penal de adultos, asume una posición de sujeto activo del delito, a quien se le atribuye el quebrantamiento de un bien jurídico tutelado en una conducta tipificada por el Código Penal como delito y debe comunicársele los cargos y permitirle el derecho de defensa en toda su extensión mientras que la iniciación de la instrucción formal sólo es posible luego que se pueda identificar al imputado y la conducta investigada se adecue a las tipificadas en el Código Penal como lo indica el artículo 2 de la ley No 40.

2.1.7.2 El Juez:

El Juez ejerce funciones que son de derecho público, mediante una labor de conjunto destinada a hacer efectiva la finalidad del proceso. La principal facultad del juez es de carácter jurisdiccional, la cual ejerce durante la tramitación del proceso y esencialmente en la sentencia. Además, tiene facultades disciplinarias respecto a las partes, sus auxiliares y terceros. El Juez en el desempeño de su función debe ser imparcial, por lo cual si se produce alguna circunstancia que podría generar duda sobre su imparcialidad debe excusarse y si no lo hace, las

partes tienen el derecho de recusarlos.

En el proceso penal de adolescentes se jerarquiza la función jurisdiccional del Juez, ya que su función primordial es resolver los conflictos conforme al procedimiento establecido en el nuevo proceso penal de adolescentes que se implementó mediante la ley No 40, apartándose de esta manera de la función Tutelar protectora similar a la función de un buen padre de familia que caracterizaba el “Modelo Tutelar”.

El Juez Penal de Adolescentes se constituye en un funcionario especializado que conoce de conductas tipificadas por la ley penal donde se encuentren vinculados de una u otra maneras adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años, ejerciendo el poder de controlador de las garantías procesales y los derechos fundamentales de los adolescentes en el proceso, así como también garantizar el pleno respeto de la legalidad en un Estado de derecho.

Por su especialidad, el Juez de Adolescentes dentro del proceso tiene facultades de dirección y disciplina con los sujetos que intervienen en el proceso y juega un papel preponderante en las formas de especiales de conclusión del proceso.

Según el artículo 20 de la ley No 40, el Juez Penal de Adolescentes tiene competencia dentro del proceso para conocer de los siguientes asuntos:

- Denuncias y querellas interpuestas contra personas que habiendo cumplido los catorce años no hayan alcanzado todavía los dieciocho, por infracción a la ley penal o participación en ella.
- Decidir sobre cualquiera medida que restrinja un derecho fundamental de la persona adolescente, a quien se le atribuya un acto infractor cometido.
- Promover las audiencias de conciliación y aprobar los acuerdos a que

lleguen las partes.

- Confirmar, revocar o modificar la detención provisional decretada por el Fiscal de Adolescentes.
- Decretar el sobreseimiento provisional o definitivo.
- Decidir, sobre la base de los criterios de responsabilidad proporcionalidad y racionalidad, la sanción que corresponda a cada caso.
- Decretar la suspensión condicional del proceso, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.
- Remitir a los jueces de niñez y adolescencia los casos de adolescentes cuando, por razones que señala la ley, no procede un proceso penal especial y requieren de protección de sus derechos.

2.1.7.3 El Fiscal de Adolescentes:

El Ministerio Público es el destinatario para cumplir con el deber jurídico de la persecución penal como una obligación funcional conferida por el Estado, mediante la cual tiene la obligatoriedad de prevenir, dirigir y promover la investigación preprocesal y procesal penal.

En el proceso penal de adolescentes la acción especial para perseguir e investigar el acto infractor la ejerce el Ministerio Público, mediante los Fiscales de Adolescentes, única y exclusivamente, quienes deben garantizar una investigación eficiente y eficaz. Esta función pública que ejerce el agente de instrucción penal debe ajustarse a las finalidades establecidas en el artículo 4 de la ley No 40 que establece que “El Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la adolescencia tiene en su conjunto tres finalidades primordiales: la de

educación del individuo en los principios de justicia, la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y la resocialización de los infractores". De estas finalidades se encuentra que la función pública que ejerce el Fiscal de Adolescentes está orientada a la búsqueda de la verdad de los hechos, la existencia del sujeto que cometió el acto infractor identificando al autor o autores y participe su grado de responsabilidad, garantizando que dan en todo momento los derechos y garantías procesales que tienen los adolescentes.

La ley No 40 de 26 de agosto de 1999 en su artículo 27 le asignó al Fiscal de Adolescentes en su labor de investigación y acusación las siguientes funciones:

- ➔ Ejercer la acción penal especial respecto a la comisión del acto infractor.
- ➔ Solicitar la práctica de un estudio psicosocial en los casos prescritos por ley No 40 o cuando lo estime necesario.
- ➔ Instruir las sumarias del proceso penal de adolescentes
- ➔ Facilitar la comunicación entre el abogado defensor y el adolescente que se encuentra en detención provisional.
- ➔ Decretar las medidas cautelares, en general, y la detención provisional, en particular, en los casos taxativamente previstos en la ley
- ➔ Cesar, modificar o sustituir las medidas cautelares decretadas.
- ➔ Velar, porque las autoridades policiales se cñan a la ley en el cumplimiento de sus funciones.
- ➔ Brindar orientación legal a la persona ofendida antes y durante la

conciliación, cuando ella así lo solicite.

➔ Denunciar ante las autoridades competentes, las violaciones que se cometan contra la ley No 40 en perjuicio del derecho de los adolescentes.

Cabe destacar que el Fiscal de Adolescentes en la ley No 40 asume un papel distinto al fiscal del proceso penal ordinario, pues no sólo persigue el acto infractor que comete un adolescente, sino que también se le atribuye otras funciones no tradicionales como la de brindarle orientación legal a la parte ofendida y procurar que el proceso cumpla con el fin pedagógico en la reinserción social del adolescente infractor en la comunidad y procurar conciliar a las partes.

2.1.7.4 El Defensor del Adolescente:

El nuevo proceso penal de adolescentes que adopta Panamá, mediante la ley No 40 de 1999, establece en el artículo 37 el derecho de defensa que cumple un papel particular al asegurar la garantía de un debido proceso.

El Derecho de defensa guarda una estrecha relación con otros derechos como el derecho a la prueba, a ser informado, el derecho a abstenerse de declarar y su inobservancia es de significativa trascendencia en el proceso de adolescentes, porque produce efectos procesales como la nulidad del acto o hasta del proceso mismo.

Conceptualmente, el derecho de defensa ha sido definido como “un derecho individual, objetivamente, es un derecho público que emana del ordenamiento jurídico en su conjunto, axiológicamente, es el derecho del sujeto pasivo de la

acción penal de oponerse a la pretensión punitiva, desde el inicio del procedimiento dirigido en su contra y hasta la terminación del proceso en ejercicio de todas las garantías establecidas para su defensa” (BARRIOS, GONZALEZ, Boris: Estudios de Derecho Procesal Penal Panameño. Editorial Jurídica Bolivariana, Panamá, 1996, Pág. 139.)

El derecho material de defensa, de que es titular exclusivo el adolescente vinculado a la comisión de un acto infractor, se materializa en el proceso cuando el adolescente es representado por un profesional del derecho que sume la defensa técnica, la cual comprende funciones en el asesoramiento del justiciable, la adecuada información sobre las particularidades y desarrollo de la causa, la asistencia del defensor a actos investigativos y audiencias, el control de la legalidad y regularidad de los procedimientos, las indicaciones probatorias, las instancias pertinentes a la libertad del imputado, la operatividad de sus derechos, la contestación técnica de los requerimientos Fiscales y las alegaciones, el ofrecimiento de pruebas en los momentos oportunos y las impugnaciones a las resoluciones que causen gravamen a su defendido.

La Ley No 40 de 26 de agosto de 1999 establece la obligación de la asistencia de un letrado en derecho para al adolescente investigado desde que se inicia la investigación en su contra y se extiende hasta el momento en que termine el proceso y si hubiere sanción hasta el total cumplimiento de la misma. Esta defensa técnica no es renunciable, porque constituye la máxima expresión del derecho de defensa y guarda relación con la eficacia que supone el ejercicio de la defensa letrada cuyos conocimientos jurídicos y experiencia forense evitarían

manifestación de indefensión en cuanto al adolescente.

2.1.7.5 La Víctima:

La víctima es definida por las Naciones Unidas *“aquellas personas que de forma individual o colectiva han sufrido un perjuicio, especialmente, un ataque a su integridad física o mental; un sufrimiento moral o una pérdida material, o un ataque grave de sus derechos fundamentales, en acciones u omisiones que infringen las leyes penales vigentes de un estado”*.

La participación de la víctima en el proceso es un tema relativamente nuevo en el derecho procesal penal de adolescentes. Las nuevas legislaciones de menores infractores latinoamericanas incorporan mecanismos de desjudicialización donde la participación de la víctima tiene un carácter esencial no sólo en el tema de la conciliación, sino también como parte en las decisiones judiciales que implican poner fin anticipado al proceso.

La víctima es la persona directamente afectada, o bien el representante de quien sufrió el daño y su participación según la nueva orientación doctrinal que nos da la “Protección Integral”, está garantizada en casi todas las etapas del proceso ya sea como testigo, como parte necesaria en la conciliación, en el desistimiento, además puede estar presente en la etapa de juicio y puede utilizar los recursos necesarios para salvaguardar sus intereses.

No obstante, aunque en el proceso penal de adolescentes, la víctima es considerada sujeto de derecho, su actuación está condicionada y sometida a limitaciones en función del interés predominante del menor. Por ello, siguiendo la

corriente doctrinal moderna, el proceso penal de adolescentes que se adopta en Panamá mediante la ley No 40 no considera a la víctima como parte del proceso según lo establece el artículo 46 del mencionado texto legal, sin embargo si se le reconocen amplios posibilidades de intervención como:

- ✓ Derecho a nombrar apoderado judicial que represente sus intereses durante el proceso y colabore con el Ministerio Público.
- ✓ Tiene un término de diez días, contados a partir de la fecha en que el Fiscal de Adolescentes emite resolución que decide no continuar con la investigación, a fin de presentar incidente de controversia ante el Juez Penal de Adolescentes por el intermedio de su apoderado judicial.
- ✓ Puede ser llamado a declarar como testigo en el proceso.
- ✓ En el juicio tiene derecho a emitir una manifestación sobre lo acontecido en la audiencia oral.
- ✓ Dar su consentimiento cuando se imponga sanción de reparación de daños.
- ✓ Promover recurso de apelación contra la resolución que le pone fin al proceso y para recurrir en casación.

La no consideración de la víctima como parte del proceso ha traído críticas a la jurisdicción penal de adolescentes dentro de cual se destaca que la actuación de la víctima en este tipo de procedimientos está muy condicionada y sometida a limitaciones en función del interés predominante del adolescente. Este interés

tan hiperprotegido o mejor dicho mal protegido, lo que está provocando en la práctica no pocas disfunciones, además de una alarma social importante, que ven como en aras de ese celo y exacerbada defensa del menor a veces no tan menor, el olvido del legislador de otros factores, principios y personas como la víctima del delito que producen situaciones de verdadera impunidad.

Esta crítica a la situación procesal de la víctima en el proceso penal de adolescentes a nuestro juicio no tiene razones de peso, ya que la víctima no está dentro de un grado de indefensión, pues tiene la oportunidad de intervenir con la asistencia de un profesional del derecho que le va garantizar la defensa de sus intereses, siempre supeditado a la finalidad del proceso como la búsqueda de la verdad, la rehabilitación y reinserción social del adolescente infractor.

2.2 PRINCIPIOS GENERALES Y RECTORES DEL PROCESO PENAL DEL ADOLESCENTES:

Con la aprobación y puesta en vigencia de la ley No 40 del 26 de agosto de 1999, el proceso penal de adolescentes en Panamá deja el modelo Tutelar que produjo un proceso escrito, lento e inquisitivo para el juzgamiento del adolescente vinculado a un acto infractor.

El nuevo proceso adoptado asume en toda su extensión la “Doctrina de la Protección Integral” que propugna un nuevo modelo de justicia penal para la adolescencia de tipo pedagógico- responsabilizador, punitivo-garantista, en el que efectivamente se les someta a los adolescentes a un proceso penal investido de todos los derechos y garantías. Este nuevo proceso está orientado con principios generales o rectores que son considerados, por la doctrina, la normativa nacional e internacional como de contenido fundamental para la

obtención de un proceso garantista e imparcial en materia penal de adolescentes. Estos principios generales o rectores son los siguientes:

2.2.1 Principio de la Protección Integral:

El nuevo ordenamiento jurídico aplicable, según la Ley No 40 y el complejo mundo de las relaciones que surgen, desarrolla la categoría de infancia-adolescencia en otra dimensión. Esto hace que se formule un nuevo marco jurídico y social del proceso penal de adolescentes que conduce a la protección integral del adolescente en conflicto con la ley penal, reconociéndole para esta categoría de personas la de sujetos de derechos con capacidad para ejercerlos, atendiendo el nivel de desarrollo evolutivo de su personalidad e integrándose como miembro de la sociedad y participando en las relaciones sociales. Esta nueva situación compromete al Estado a garantizar los derechos de los adolescentes y a la formulación de políticas públicas que impacten en el mejoramiento de las condiciones jurídicas en la vida de la infancia.

En este contexto, el principio de la protección integral dentro del proceso penal de adolescentes que adopta Panamá puede definirse como “aquel que le reconoce al adolescente la categoría de sujeto de pleno derecho y establece una nueva dimensión en la calificación de sus derechos humanos, obligando a un esfuerzo colectivo de familia, sociedad y Estado para vigencia defensa y efectividad de los derechos reconocidos a la infancia, como fórmula de repuesta garantista ante el acto infractor.” (MONTENEGRO, Marianela:: Fundamentos y Principio del Derecho Penal de Adolescentes, Escuela Judicial, UNICEF, Panamá, 1999, Pág. 31).

Cabe señalar que el principio de protección integral crea un deber jurídico de la sociedad, del Estado y comprende tanto la protección jurídica como la protección social del adolescente en conflicto con la ley penal y conlleva la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de los derechos fundamentales, así como la creación de mecanismos efectivos dentro del proceso penal de adolescentes que tengan la exigibilidad necesaria para el aseguramiento de derechos o para la determinación de la responsabilidad e imposición de sanciones para los adolescentes a quienes se le imputa la comisión de un acto infractor.

Este principio de protección integral está implícitamente recogido en el artículo 3 de la ley No 40 de agosto de 1999 que reconoce la vigencia los principios consagrados en la Convención del Niño, la reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de Justicia Juvenil, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, instrumentos internacionales estos que son los fundamentos ideológicos que nutren el principio de la protección integral.

2.2.2 El Principio del interés Superior:

El Principio del Interés Superior del Niño no es nuevo, pues su aparición está unido a la evolución y reconocimiento de los derechos del niño en los diferentes sistemas jurídicos como el Anglosajón o Continental. En la primera etapa de evolución, estos derechos fueron prácticamente ignorados por el ordenamiento positivo, porque sólo se protegían jurídicamente las facultades generalmente muy

discrecionales de los padres, ya que los intereses de los niños eran un asunto privado que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos.

Posteriormente, se observa una mayor preocupación por los niños y se reconoce que ellos pueden tener intereses jurídicamente protegidos diversos al de sus padres y se avanza al considerar que el Estado debía adoptar mecanismos para proteger el interés de los niños.

Este principio probablemente es uno de los principios más complejos y difíciles de explicar, porque atiende de manera integral toda la actividad pública y privada y en consecuencia también la jurisdiccional relacionada con los menores. Esto ha traído como consecuencia, inicialmente que se creyera que el interés superior del niño es una directriz vaga indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones tanto de carácter jurídico como psicosocial que constituiría una excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés extra jurídico, motivando a que diversos autores pusieran de relieve que el carácter indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme, lo cual permite que las decisiones que se adopten basadas en este interés no satisfagan debidamente la exigencias de seguridad jurídica.

Actualmente, esta conceptualización del principio del interés superior del niño ha sido superado porque la convención de los Derechos del Niño en su artículo 3 establece "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Así tenemos que

las corrientes doctrinales dominantes ven este principio como garantista, especialmente, en el proceso penal de adolescentes , porque la Convención de los Derechos de los Niños enfoca el principio del interés superior del niño como una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de ellos; es decir el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derechos) y que las autoridades se encuentran limitados por esos derechos. El principio le recuerda al Juez que no puede dictar una decisión desde la nada, sino en estricta sujeción no sólo en la forma sino en el contenido a los derechos de los niños sancionados legalmente.

Al respecto, autores como Emilio García Méndez – Mary Beloff nos dicen que el interés superior del niño debe ser interpretado sistemáticamente al señalar “En su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, la supervivencia y desarrollo del niño. Durante la infancia, adolescencia, la interdependencia de los derechos se hace mas evidente que en otras etapas de la vida. La noción de interés superior refiere ese conjunto sistemático y apoya una interpretación holística de la Convención.

En segundo término permite la resolución de conflictos entre derechos contemplados en la misma Convención. El principio supone que los derechos del niño se ejercen en el contexto de una vida social en la que todos los niños y adolescentes tienen derechos y en la que también, se puede producir situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos consagrados en la Convención para un mismo niño o adolescente.” (GARCÍA MENDEZ, Emilio

– BELOFF Mary: *Infancia, Ley y Democracia en América Latina*, Tomo I, 2ª edición, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1999, Pág. 81).

De esta conceptualización doctrinal podemos entender que el interés superior del niño es un principio que busca exaltar la protección e importancia de los derechos de la niños y la adolescencia, para asegurar su desarrollo integral tutelando todos los derechos que le correspondan a los niños y adolescentes con prioridad sobre los otros intereses que puedan estar en juego y su naturaleza es jurídico formal como material. Es formal, porque al haberse consagrado en el derecho positivo resulta no solamente jurídico o legítimo, sino también general o impersonal coercible y obligatorio para los operadores de justicia, autoridades administrativas y el Estado; y material, porque descansa en un adolescente que como individuo y ser social tiene un interés en lo psicológico, familiar y moral que el interés colectivo debe respetar.

El principio del interés superior es un principio rector de la Doctrina de la Protección Integral y ha sido incorporado por al proceso penal de adolescentes de Panamá, mediante el artículo 5 de la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999 que textualmente nos dice:

Artículo 5: Es deber del Estado, en las distintas instancia de la sociedad y de la familia prioritariamente la realización de los derechos y las garantías que establece la Convención de los Derechos del Niño y la presente ley.

La prioridad aquí consagrada implica que las autoridades públicas se comprometan a realizar las asignaciones presupuestarias necesarias para que los Adolescentes puedan ser juzgados y puedan defender sus intereses, y que solo sean sancionados en la forma, con los procedimientos y de acuerdo a los fines establecidos en la presente ley.

No podrá argumentarse la insuficiencias de recursos humanos y financieros para desproteger, abusar o violentar en forma alguna los derechos de la niñez y la adolescencia.

Como se puede observar, el principio del interés superior del menor tiene una especial referencia en la situación de la adolescencia en conflicto con la ley penal, es decir, su aplicación en el ámbito del proceso penal de adolescentes constituye un imperativo para la satisfacción de todos los derechos reconocidos a la adolescencia. En este contexto se encuentra que la Corte Suprema no sólo le ha reconocido vigencia legal a este principio, sino que también a través de fallos jurisprudenciales lo ha integrado al Bloque de la Constitucionalidad cuando el fallo de 20 de marzo de 1996 al resolver un Amparo de Garantías Constitucionales nos dice:

“La protección constitucional de los derechos de los menores, los cuales forman parte de los derechos humanos de segunda generación, en nuestra Carta Fundamental se mencionan de manera general en el artículo 52, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los derechos del niño representa un complemento al texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridad o tribunales concerniente a los niños, debe prevalecer el interés superior del menor “

De lo expuesto, nos permitimos señalar que el interés superior para la doctrina y nuestro ordenamiento jurídico, en materia penal de adolescentes consiste en que el caso de un adolescente sujeto a un proceso penal, su interés superior constituye el efectivo respeto a sus derechos y garantías fundamentales que le garanticen el desarrollo de un justo y debido proceso.

2.2.3 Principio del respeto de los derechos humanos:

El principio del respeto a los derechos humanos que debe informar al proceso

penal de adolescentes se fundamenta en un sistema político social basado en la promoción y garantía de las personas sin discriminación, porque todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede desconocer ni el Estado arrebatar lícitamente, porque estos derechos no son concesión de la sociedad o del Estado. Se trata de derechos inherentes y de acuerdo con esta noción todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En consecuencia, también a los niños y adolescentes les corresponden estos derechos y la posibilidad de hacerlos valer en la búsqueda de su pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.

La sociedad actual acepta la idea que toda persona tiene derechos frente al Estado lo que corresponde con “la noción de derechos humanos como afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. “El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, el Estado tiene el deber de respetar y garantizar a todos los ciudadanos sus derechos.”

Para este principio, los derechos humanos son de contenido esencial, la sustancia del sistema democrático, porque son el límite infranqueable para cualquier forma de arbitrariedad, y por otro lado son los que orientan el contenido de todo proceso penal para hacer efectivo la convivencia social.

Esta conceptualización del principio de los derechos humanos lo hace aplicable a todas las personas con independencia de cualquier particularidad, así lo establece la Convención de los Derechos del Niño que fundamenta la “Doctrina de la Protección Integral” al señalar que los derechos de los niños no dependen de ninguna condición especial y se aplican a todos por igual; constituyendo los

derechos humanos un conjunto de derechos-garantías frente a la acción del Estado y por otra parte representa un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contemplan.

Por ello, las personas menores de edad son considerados sujetos de derecho y titulares de derechos, garantías y libertades inherentes a su condición minoril, además se le reconoce los derechos y garantías procesales de las personas adultas, compatibles con los derechos humanos y libertades fundamentales de los niños, por lo cual la administración de justicia penal de adolescentes deberá tomar en cuenta estos objetivos sociales, las exigencias del bien común, los derechos individuales y colectivos y la condición particular de esa población, en un marco de respeto de las garantías fundamentales y los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la legislación procesal penal.

EL principio de respeto de los derechos humanos está recogido en el artículo 12 de la ley No 40 de 1999 al señalar dicha norma que la ley penal de adolescente debe ser interpretada y aplicada de forma que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, los tratados, pactos y demás instrumentos internacionales suscritos por Panamá.

2.2.4 Principio de la formación integral de la persona menor de edad:

Este principio busca el pleno desarrollo físico, la educación y la socialización del menor de edad en conflicto con la ley penal. El Estado reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, lo cual

contrasta con los efectos perjudiciales de todo tipo de detención provisional y además fomenta la integración en la sociedad del adolescente infractor a través de otras medidas alternativas al internamiento, a fin de procurar la socialización del adolescente dentro de la vida familiar y social.

El principio de formación integral ha transformado radicalmente la concepción que sobre la niñez y la adolescencia aún se sigue teniendo en nuestra sociedad contemporánea, pues este principio es el que de alguna manera viene a desarrollar los artículos 56 y 63 de nuestra Constitución que señala la necesidad de brindarle a los menores de edad una protección especial, porque con él se pretende asegurar a los niños y adolescentes su protección en todos los ámbitos de su desarrollo, con el objetivo de brindarles todas las oportunidades necesarias para la satisfacción de sus necesidades.

La consecución del desarrollo integral corresponde en primera instancia a la familia, en aquellos niños o adolescentes que tienen la posibilidad de tener una familia y en segunda instancia al Estado que le corresponde el deber correlativo de asegurar, en sustitución de la familia, que todos los niños y adolescentes tengan la oportunidad para desarrollar sus potencialidades de manera satisfactoria basado en un sistema de tres niveles:

1- Prevención: Busca darle al adolescente todas las oportunidades de desarrollo pleno satisfaciendo sus necesidades básicas y protegiendo, en general y eficazmente, todos los derechos que éstos poseen para prevenir conductas desviadas contra el ordenamiento penal positivo vigente.

2- Protección: Con la protección se busca que todo niño o adolescente al que se

le estén vulnerando sus derechos fundamentales, restablecerle estos derechos cuando carezcan de condiciones para su desarrollo integral.

3- Responsabilidad: Tiene el objetivo de asegurar que todo adolescente que cometa un delito, contravención o falta o cualquiera otra violación de intereses ajenos se le responsabilice por la trasgresor al derecho de los demás. Estableciendo para ello un sistema de responsabilidad penal especial y diferente al de los adultos.

Mediante estos tres niveles se busca, en la formación integral, asegurar que los adolescentes involucrados en un acto infractor posean todas las condiciones necesarias para desarrollarse integral y plenamente brindándole una protección especial que establece nuestra Constitución Política y el artículo 4 de la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 cuando nos dice:

Artículo 4: El Régimen Especial de Responsabilidad penal para los adolescentes tiene, en su conjunto tres finalidades primordiales:

.....
.....

Su finalidad educativa consiste en introducir a los adolescentes y a las adolescentes en el proceso pedagógico de la responsabilidad, y se extiende desde el inicio de la investigación hasta la terminación de la sanción, si a ello hubiere lugar.

Como puede observarse, el principio de la formación integral del menor en el nuevo proceso penal de adolescentes adoptado por Panamá se extiende a todas las fases del proceso hasta la sanción si hubiera lugar a ello. Bajo los postulados de este principio, la sanción penal juvenil es eminentemente pedagógica, y el objetivo fundamental del amplio marco sancionatorio es el de fijar y fomentar las

acciones que le permitan al menor de edad su permanente desarrollo personal y formación para la re inserción en su familia y la sociedad.

2.2.5 Principio de Reinserción en la Familia y en la Sociedad del menor:

La ley No 40 de 1999 responde a una conceptualización garantista que busca equilibrar el ejercicio del poder punitivo del Estado y el respeto de los derechos fundamentales de los adolescentes.

En este sentido, el proceso penal de adolescentes adoptado por Panamá reconoce una nueva condición jurídica a este grupo de población que se fundamenta en un principio de re inserción familiar o social, el cual busca que a todo adolescente a quien se le imputa que ha infringido las leyes penales o a quien se le acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del adolescente por los derechos humanos y la libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad de infractor y la importancia de promover su reintegración social y familiar para que asuma una conducta constructiva en la vida social.

Este principio tiene fines educativos y es rector de la naturaleza y finalidad de la justicia especializada formando al adolescente en su conciencia de responsabilidad ciudadana por el hecho de vivir y formar parte de la sociedad, sin embargo este principio no debe servir de justificación para restringir las garantías penales y procesales a los adolescentes, porque muchas veces se confunde la vigencia del fin educativo del principio de reinserción social y familiar para

extenderle, indiscriminadamente, el control social a los adolescentes con la aplicación de medidas no privativas de libertad.

La ley No 40 de 26 de agosto de 1999 recoge el principio de reinserción familiar y social del proceso penal de adolescentes en su artículo 4 y su objetivo debe ser cumplido dentro de la fase de ejecución de la sanción impuesta, es decir con posterioridad a la comprobación de culpabilidad. A contrario cencsu este principio no es, ni debe ser aplicable en la fase judicial o sea antes de la comprobación de la culpabilidad, porque este principio esta íntimamente relacionado con la ejecución de las sanciones, al punto de señalar el artículo 4 como uno de los objetivos de la sanción la búsqueda de una conducta constructiva del adolescente infractor dentro de la sociedad.

Esta regulación responde a los nuevos paradigmas del proceso penal de adolescentes que busca que el adolescente no este expuesto a estigmatización y agresiones de formantes que pueden constituir un obstáculo para su reinserción social, pues en este proceso debe existir una vigilancia constante de las distintas fases y actos de procedimiento, a fin de no acentuar la situación adversa por la que atraviesa la persona imputada y así evitar la estigmatización y victimización, fomentando su educación y desarrollo humano.

2.3 DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES:

La nueva conceptualización punitiva-garantista del proceso penal de adolescentes moderno le concede a las personas menores de edad involucradas en un acto infractor derechos y garantías que le corresponden por su condición

personas y por su condición especial de menores de edad. Panamá al igual que las legislaciones más avanzadas de América Latina reconoce también a las personas menores de edad toda clase de derechos y garantías de orden sustantivo, procesal y de ejecución de sanciones.

Estos derechos y garantías procesales tienen una innegable naturaleza pedagógica en la persona del adolescente bajo la forma de un conjunto de prácticas y vivencias a la que el adolescente es sometido en las diferentes etapas del proceso, las cuales le dan la oportunidad de enterarse de la extensión y de la gravedad de sus actos. Por ello, son de riguroso cumplimiento estos derechos y garantías en términos de plazos, ritos y etapas, porque la ley debe estar nítidamente por encima de todos los involucrados en el proceso. Si esto está claro el adolescente tendrá la sensación de que no está sometido a un proceso opaco y arbitrario, sino a la severidad de una justa reacción de la sociedad a un hecho delictivo.

Una experiencia de esta naturaleza en la persona del adolescente es determinante en su vida y si es bien manejada puede ser verdaderamente educativa, porque el acto infractor se ubicaría en la psiquis del adolescente en un grado distinto a las faltas cometidas en la familia o la escuela, de allí que el proceso a través del respeto de los derechos y la garantías expresa la dimensión, severidad y justicia requerida por la trasgresión de las normas de convivencia social.

La ley No 40 en su artículo 6 reconoce los derechos y garantías básicas y en los artículos 15, 16 y 17 establece cuales son estos derechos y garantías procesales.

También, la ley No 40 en su artículos 3 y 12 hace referencia que son aplicables los principios y normas especiales que consagra la Convención de los Derechos del Niño ,Las Reglas Mínimas de La Naciones Unidas para la Administración de Justicia , Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y Las Directrices de Las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Además, hace remisión a los derechos y las garantías penales de los adultos que son aplicables a la jurisdicción penal de adolescentes, de allí que se hace necesario ver estos instrumentos en detalles en lo que respecta a derechos y garantías procesales aplicables a la etapa calificatoria.

2.3.1 Derechos y garantías procesales reconocidos en la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999.

El nuevo proceso penal de adolescentes que se configura con la aprobación de la ley No 40 de 26 de agosto de 1999, ha sido influenciado por la "Doctrina de la Protección Integral" la cual consagra derechos y garantías mínimas a favor de un adolescente que es sometido a un proceso por la ejecución de una conducta determinada como ilícita.

Estos derechos y garantías que consagra la mencionada doctrina han sido concretizados en el artículo 16 y 17 de la ley No 40, los cuales contienen una serie de derechos y garantías que son aplicables desde el inicio del proceso hasta la ejecución de la sentencia en caso de resultar culpable el adolescente sumariado.

- **El derecho a la dignidad Humana:** Este derecho tiene su fundamento en que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos

fundamentales que la sociedad no puede desconocer ni el Estado arrebatarse lícitamente, porque estos derechos no son concesión de la sociedad o del Estado. Se trata de derechos inherentes y de acuerdo con esta noción “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La sociedad actual acepta la idea que toda persona tiene derechos frente al Estado lo que corresponde con “la noción de derechos humanos como afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado y el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. En este sentido a los adolescentes procesados por la comisión de un hecho ilícito le asisten todos los derechos y garantías penales y procesales que le asisten a las personas mayores de edad, más aquellas especiales por su condición especial de personas menores de edad de manera compatible con los derechos humanos y libertades fundamentales.

➤ **El Derecho a la Igualdad y la no discriminación:** Este derecho contenido en el artículo 16 numeral 2 de la ley No 40 condiciona estructuralmente el proceso a que tanto la acusación como la defensa actúen en igualdad de condiciones, es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente. Desde el punto de vista procesal, este derecho instituido garantiza que ambas partes procesales gocen de los medios de ataque, defensa y de igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba cuya vulneración produce indefensión. También, este derecho se expresa en el régimen de los recursos

y en el ámbito de la prueba tiene trascendental importancia, de suerte que sólo pueden tener condición de pruebas y de servir de base a la sentencia, las diligencias probatorias que se han actuado con la plena intervención de las partes, lo que opera esencialmente en el juicio oral.

➤ **Principio de Legalidad de las infracciones a la ley penal:** El artículo 16 numeral 3 de la ley No 40 contiene el principio de legalidad que no es más que el derecho que tiene todo adolescente a que sólo se investigue, procese o sancione por hechos contemplados en la ley penal como delitos . Con este principio de “Nullen Crimine Nulla poena sine lege” se establece que ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socio educativa que no esté prevista en la ley.

El Juez en base a la legalidad está obligado a observar una triple exigencia:

1) La de *lex praevia* implica la prohibición de aplicar retroactivamente leyes desfavorables al adolescente infractor; La de *lex scripta* excluyente de la posibilidad de que el Juez acuda a la costumbre como fuente de derecho para la creación de delitos (en este caso infracciones) y de penas (medidas socioeducativas), y 3) La de *lex stricta* señala que al demandar precisión en la redacción del tipo penal, en el señalamiento de la pena (medida socio educativa) y en la fijación de la competencia, impide al Juez la aplicación de la ley por analogía.

➤ **El principio de la especialidad de la jurisdicción:** La especialidad de la

jurisdicción penal de adolescentes la contempla la ley No 40 en el numeral 6 del artículo 16. Este derecho del adolescente en conflicto con la ley penal contempla la existencia de una justicia especializada a cargo de los juzgados penales de adolescentes y dentro de las funciones del Juez Penal de Adolescentes están: el juzgar a los adolescentes infractores, decidir la procedencia de la acusación, la aplicación de medidas provisionales, y resolver la situación jurídica del adolescente aplicando una medida socio-educativa o absolviéndolo. Esta especialización también es para los Fiscales de Adolescentes, ya que en los procesos seguidos a los adolescentes infractores, el Fiscal se constituye por mandato legal en el titular de la acción teniendo la carga de la prueba y conociendo de manera exclusiva los asuntos relacionados a los adolescentes. Esta especialización se extiende a los Abogados de Oficio. y en la parte administrativa, se han conformado órganos auxiliares como el Equipo Multidisciplinario y la Policía Especializada de menores.

La especialidad de la jurisdicción dispone también como requisito de la existencia de un Juez natural o competente. Esta competencia está fijada a través de dos factores: 1) Por la naturaleza de la infracción. Según el grado de la infracción se señala el destino que seguirá el juzgamiento del adolescente: 2) Por el lugar en que se cometió la infracción. Se respeta aquí la división territorial fijada en desarrollo del principio del Juez natural, permitiendo que se pueda recusar a un Juez cuando se duda de su imparcialidad, con la finalidad de que el juez actúe realmente en función de tercero respecto al sujeto que formula la imputación y a los destinatarios de

ésta.

➤ **La presunción de inocencia:** Esta garantía está contenida en el numeral 7 del artículo 16 de la ley No 40. Mediante esta garantía se reconoce el derecho del adolescente que viene siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerado y tratado como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no exista un pronunciamiento judicial firme. El derecho a la presunción de inocencia no sólo es una garantía que impone la consideración al adolescente imputado como inocente, sino que su efecto más importante lo produce en cuanto exige que el menor que viene afrontando un procedimiento penal sea tratado, en los diversos sectores del ordenamiento jurídico y la vida social, como una persona de la que aún no se ha comprobado responsabilidad penal alguna. En cuanto a la consideración como inocente, uno de los sectores más importantes en los que debe actuar esta garantía lo encontramos en la información que se debe proporcionar sobre el estado del imputado en el proceso.

La doctrina ha puesto en evidencia que la presunción de inocencia posee una naturaleza *iuris tantum* (que admite prueba en contrario), pudiendo quedar desvirtuada como resultado de un proceso penal. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario que se haya realizado una mínima actividad probatoria de cargo que pueda deducirse la culpabilidad del procesado con estricta observancia de las garantías y normas procesales. En caso de que esto no ocurra, el sujeto conservará su condición de inocente.

➤ **El principio de la prohibición de ser juzgado más de una sola vez por la misma causa:** Este derecho está contenido en numeral 8 del artículo 16 de la ley No 40. Desde su perspectiva sustancial, la garantía del *ne bis in idem* se expresa en dos exigencias. La primera exigencia consiste en que no es posible aplicar una doble sanción, siempre que se presente la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, esto es, cuando existe una misma ilicitud, de suerte que en el campo administrativo donde se presentan los mayores problemas en su relación con la jurisdicción penal- estará vedada imponer al funcionario o servidor una sanción adicional a la penal cuando el interés jurídicamente protegido sea el mismo que el protegido por el tipo penal, no siendo suficiente al respecto la sola invocación de las relaciones de especial sujeción con la administración.

La segunda exigencia se aplica en el concurso aparente de leyes, en cuya virtud se impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas criminales. Esta garantía afecta a la aplicación de varias normas que se refieran a la identidad de sujeto, hecho y fundamento, pues como consecuencia de la realización de una misma conducta y de la producción de un mismo resultado, no se le pueden aplicar dos normas distintas cuya fundamentación sea la misma tutela del mismo bien jurídico. Desde la perspectiva procesal, el *ne bis in idem* es un derecho constitucional a no ser enjuiciado dos veces por el mismo delito y su fundamento se halla en las exigencias particulares de libertad y seguridad del individuo.

➤ **Principio de la legalidad de las restricciones de derechos:** Este derecho es recogido en el numeral 10 del artículo 16 de la ley No 40. Esta garantía establece que toda restricción de derechos como la libertad, tránsito etc., debe ser ordenado por las autoridades competentes conforme al procedimiento previamente establecido en la ley. Este principio tiene como complemento el principio de seguridad jurídica donde las partes conocen de ante mano las formas y requisitos procesales que requieren cada acto en el desarrollo del proceso.

➤ **Derecho al contradictorio penal:** El derecho a la contradicción del adolescente lo establece el artículo 17 numeral 1° de la ley No 40. Este derecho comporta la exigencia de que ambas partes, acusadora y acusada o imputada, tengan la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las fundamenten y su correspondiente práctica de la prueba, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter previo a la imposición de una pena. La contradicción exige: 1. la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de audiencia. Para que el adolescente pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un delito formulado por el Ministerio Público. Esta imputación debe ser conocida por el procesado -que es lo que se denomina intimación, quien además debe tener el derecho de audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el proceso penal es que nadie sea condenado sin ser oído y vencido en juicio.

➤ **El derecho a ser defendido por un abogado y el derecho de defensa:**

Estos derechos están contenidos en los numerales 2 y 4 del artículo 17 de la ley No 40. El primero de ellos implica que todo adolescente tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste desde que es citado o detenido por cualquier autoridad y a contar con abogado defensor, un profesional en derecho que coadyuve a su defensa. Cuando el adolescente no cuenta con medios para sufragar los honorarios de un defensor técnico, la variante de este derecho establece la obligación al Estado de dotar de un defensor de oficio a los sujetos que no se encuentren en condiciones de asumir el pago del profesional que se ocupará de su defensa técnica. Se ha denominado a este supuesto: derecho a contar con un abogado de oficio, pues la defensa material del adolescente no es permitida, porque toda actuación donde no interviene el abogado defensor está revestida de nulidad absoluta.

Cabe destacar que el abogado del adolescente debe ser un profesional especializado con capacitación no sólo en el área de los derechos de niños, niñas y adolescentes; sino también con formación en otras disciplinas no jurídicas, que le permitan una comprensión integral de las problemáticas por las que atraviesan los adolescentes en los conflictos que los involucran. Sin perjuicio de ello, dado que le corresponde evaluar en cada caso concreto el interés superior del niño cuyos derechos le incumbe defender; debe trabajar con un equipo interdisciplinario que lo asesore al respecto.

El derecho de defensa: es el que le asiste a todo imputado y a su abogado

defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, postulación e impugnación necesarios para hacer prevalecer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano. Este derecho en la justicia penal de adolescentes, en atención al interés del adolescente, tiene una connotación funcional diferente para el defensor con respecto a lo que sería su función en la defensa de un adulto, pues siempre sugiere conceptos distintos limitados al interés del menor que en algún momento pueden entrar en conflictos con las funciones del defensor, porque puede existir una paradoja, en la cual el aspecto más importante para el adolescente es la educación o readaptación social, mientras que para la defensa es su libertad que debe privar.

➤ **Derecho a ser informado y a la confidencialidad:** Estos derechos se encuentran consignados en los numerales 3 y 6 del artículo 17 de la ley No 40. El primero de ellos, es decir el derecho a ser informado no es más que el derecho que tiene todo adolescente a recibir información clara y precisa de manera que le sea comprensible de todas las actuaciones judiciales que se desarrollen en proceso, así como también el significado y las razones que motivan estas actuaciones. Esto se debe a que el proceso no sólo tiene finalidad sancionadora, sino también pedagógica y de reinserción social, pues en caso de los adolescentes la doctrina penal moderna exige la comprensión del hecho antijurídico y la capacidad de ajustar su conducta a esa comprensión. Comprender el hecho requiere que lo captado por el

adolescente sea no sólo el sentido de las cosas, sino también el valor negativo de su acto y por consiguiente, la posibilidad de motivarse en la norma, porque lo que está en juego es la capacidad del menor de captar las consecuencias de su acción en el ámbito normativo.

El derecho de confidencialidad o reserva del sumario indica que los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a proceso son confidenciales, debiendo respetarse en todo momento el derecho a la imagen e identidad del adolescente. Este derecho busca la total prohibición de publicar o revelar cualquier información como consecuencia del deber de protección moral o intelectual, que respecto a los menores de edad se impone el Estado.

➤ **Derecho de abstenerse a declarar:** Este derecho se encuentra contenido en el numeral 5 del artículo 17 y 82 de la ley No 40 y tiene su importancia en que de obligarse a un adolescente que se le imputa un acto infractor a rendir declaración indagatoria, o exigírsele una declaración en calidad de testigo en un proceso en el que el imputado es su cónyuge o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sin que se le haya puesto presente el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o pariente una u otra declaración será nula al infringirse lo previsto en el numeral 5 del artículo 17.

➤ **Derecho a la prohibición de juicio en ausencia:** Este derecho está contenido en numeral 9 del artículo 17 de la ley No 40 y establece la importancia que a la persona menor de edad se le respeten todos los derechos

y garantías procesales básicos, por lo cual se refleja en la suspensión del proceso como parte de la prohibición de juzgamiento en ausencia; no obstante hay que resaltar que el proceso sí continúa para los adolescentes que se encuentren presentes. Cabe destacar de que transcurrido tres años en actos infractores no graves, cinco años en actos infractores graves y siete años en delito de homicidio, se produce la prescripción de la acción y el archivo del proceso. Esto se da por motivos de seguridad jurídica y no existe procesos pendientes en forma indefinida.

➤ **Derecho de impugnación:** Este derecho lo establece el numeral 10 del artículo 17 de la ley No 40. El derecho de impugnación es un desarrollo que hace el procedimiento legal en guarda del derecho de defensa, y está ligado estrechamente con el acto de la notificación. Su desconocimiento, entonces, no afecta solamente el derecho de defensa, sino principalmente el derecho fundamental del debido proceso. Debe tenerse en cuenta que la impugnación sea debidamente sustentada, es decir, a que se exprese breve, pero claramente cuál es la inconformidad con lo decidido, y qué es lo que quiere la parte inconforme que el superior inmediato de su Juez natural revise. De manera que la omisión de este deber deja sin efecto la impugnación, sin que sea válido afirmar abstractamente en este evento un desconocimiento del derecho de defensa, y menos aún, quebranto al debido proceso.

2.3.2 Derechos y Garantías procesales reconocidos en los Tratados y Convenios Internacionales aprobados por Panamá relacionados con el Proceso Penal de Adolescentes:

La ley No 40 de 26 de agosto de 1999 adopta como doctrina inspiradora para el proceso penal de adolescentes en Panamá “la Doctrina de la Protección Integral del adolescente”. Esta doctrina tiene como fundamento cuatro instrumentos internacionales como lo son: La Convención Internacional de los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia juvenil (Reglas de Beijing), Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad y Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD).

Estos Convenios Internacionales los recoge expresamente la ley No 40 en su artículo 3, que señala de manera obligatoria a las autoridades e Instituciones regirse por los principios y normas que contienen los mencionados Convenios Internacionales.

2.3.2.1 La Convención Internacional de los Derechos del Niño

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 y Ratificada por Panamá mediante ley No 15 de 16 de diciembre de 1990. La Convención constituye el instrumento más importante, en la medida que proporciona el marco general de interpretación de toda la normativa del derecho de menores. Pero no son sólo razones de carácter estrictamente jurídicas las que explican la importancia de la Convención. Además, ha sido precisamente este instrumento el que ha tenido el mérito de llamar la atención, tanto de los movimientos sociales como el sector más avanzado de las políticas públicas, acerca de la importancia de la dimensión jurídica en el proceso de lucha por

mejorar las condiciones de vida de la infancia.

La Convención constituye, sin lugar a dudas, un cambio fundamental determinando una percepción radicalmente nueva de la condición de la infancia. El menor como objeto de la compasión-represión, a la infancia-adolescencia como sujeto pleno de derechos, es la expresión que mejor podría sintetizar sus transformaciones.

En esta transformación que se realiza a través de este Instrumento Internacional se establece dos ámbitos de protección: a) de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en general, y b) el de los niños que han cometido un delito. En este último campo, los niños no sólo deben recibir las mismas garantías que los adultos, sino una protección especial, por lo cual en la Convención de los derechos de los Niños se establecieron los derechos y garantías procesales que detallamos a continuación.

◆ Artículo 1° : Para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.

Este artículo reafirma el reconocimiento de los niños como persona humana y por ello con justa razón puede denominarsele un instrumento contra la discriminación y a favor del igual respeto y protección de sus derechos que permiten desde una perspectiva diferente, las políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en sociedad como sujetos de derechos.

◆ Artículo 3 numeral 1° : En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o probadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

El principio de interés superior del niño en materia de derechos y garantías procesales busca que el ejercicio de la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, se oriente y limite por los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce al niño o adolescente, considerando los principios de autonomía progresiva del niño en ejercicio de sus derechos y participación en todos los asuntos que le afecten. Así se puede afirmar que el interés superior del niño puede ser concebido como un límite al paternalismo estatal.

◆ Artículo 12 numeral 2 : Con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de otro órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

El derecho a ser escuchado en el proceso es reconocido en este artículo de la Convención, permitiendo expresar su opinión en todos los asuntos en que tenga interés bien sea estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo o recreacional y especialmente en todo procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que afecte sus derechos y garantías, pero no basta con escuchar sus opiniones, ya que en segundo lugar exige que sus opiniones sean tomadas en cuenta siempre, por supuesto, teniendo presente el grado de desarrollo del niño y del adolescente al momento de ser valoradas. El objetivo de la Convención es abrir un espacio para que los niños y adolescentes ayuden a crear las condiciones más adecuadas para su bienestar y desarrollo integral.

◆ Artículo 40:

1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido la leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de sentido de la dignidad humana y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales los Estados Partes garantizarán en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes por actos u omisiones que no están prohibidas por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron.

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos lo siguiente:

i) Que se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en al preparación y presentación de su defensa.

iii) Que la causa penal será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme con la ley en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considere que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales.

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interroguen a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargos en condiciones de igualdad.

v) Si se considera que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contara con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o habla el idioma utilizado;

vii) A que se respetara plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes en particular.

Este artículo 40 de la Convención de los Derechos de los Niños reconoce derechos y garantías fundamentales para un proceso de corte garantista como son: el principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a ser informado de los cargos en su contra, derecho a no declararse culpable, derecho a la doble instancia, derecho a la defensa, derecho a una autoridad competente independiente e imparcial, principio de especialización. Estos derechos y garantías son idénticos a los que recoge la ley No 40.

2.3.2.2 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing)

Las Reglas de Beijing fueron aprobadas mediante Resolución No 40/30 de 28 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y Panamá la ha incorporado al proceso penal de adolescentes por vías de la remisión. Este instrumento internacional constituye una herramienta jurídica con orientaciones y reglas específicas dirigidas a los Estados miembros de las Naciones Unidas con el fin de fortalecer el sistema de protección y promoción de los derechos humanos de la adolescencia.

Se trata de reglas mínimas que deben ser interpretadas con arreglo a otros convenios de carácter internacional normativo, porque reafirman la vigencia de los derechos humanos reconocidos universalmente por mandato de la Carta de las Naciones Unidas. Las Reglas de Beijing se dividen en seis partes acompañadas de sus comentarios explicativos como son:

- Principios Generales.
- Investigación y Procesamiento.
- De la sentencia y la Resolución.

- Tratamiento fuera de los establecimientos penitenciarios.
- Tratamiento en establecimientos penitenciarios.
- Investigación, planificación, formulación y evaluación de políticas.

Para efectos de este Trabajo sólo haremos referencia en las Reglas de Beijing a la parte de principios generales y la investigación procesamiento, porque es en esta parte del contenido de La Reglas de Beijing donde se encuentran los derechos y garantías procesales que orienta el proceso garantista que asume la “Doctrina de la Protección Integral”. También, cabe señalar que se hará una cita textual de estas reglas con los comentarios expresados por las Naciones Unidas, sin ningún comentario adicional, pues éstas se explican por sí misma y además dan un claro panorama del alcance y contenido de los derechos y garantías procesales que consagra este instrumento internacional a favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Así tenemos que las Reglas de Beijing en cuanto a los derechos y garantías procesales del adolescente a quien se le imputa una conducta infractora nos dice:

2. Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas

2.1. Las Reglas Mínimas que se enuncian a continuación se aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.2. Para los fines de las presentes Reglas, los Estados Miembros aplicarán las definiciones siguientes en forma compatible con sus respectivos sistemas y conceptos jurídicos:

La regla 2.2 define "menor" y "delito" como componentes del concepto de "menor delincuente", que es el objeto principal de las presentes Reglas Mínimas (no obstante, véase también las reglas 3 y 4). Cabe señalar que las reglas disponen expresamente que corresponderá a cada sistema jurídico nacional fijar las edades mínima y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas económico, social, político, cultural y jurídico de los Estados Miembros. Ello significa que la noción de "menor" se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 años hasta los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad de sistemas jurídicos nacionales, tanto más cuanto que no restringe los efectos de las Reglas Mínimas. La regla 2.3 responde a la necesidad de leyes nacionales que tengan expresamente por objeto la aplicación óptima de las Reglas Mínimas, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico.

Objetivos de la justicia de menores

5.1. El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.

Comentarios de las Naciones Unidas:

La regla 5 se refiere a dos de los más importantes objetivos de la justicia de menores. El primer objetivo es el fomento del bienestar del menor. Este es el enfoque principal de los sistemas jurídicos en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de familia o autoridades administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el bienestar de los menores en los sistemas judiciales que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo así a evitar las sanciones

meramente penales.

El segundo objetivo es el "principio de la proporcionalidad". Este principio es conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción (por ejemplo, teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima o su buena disposición para comenzar una vida sana y útil).

Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el bienestar del joven delincuente pueden sobrepasar lo necesario y, por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven como ha ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores. En este aspecto, también corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con las circunstancias del delincuente y del delito, incluida la víctima.

En definitiva, la regla 5 sólo exige que la respuesta en los casos concretos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecuada, ni más ni menos. Los temas que las reglas vinculan entre sí pueden contribuir a estimular adelantos en ambos sentidos: los tipos de respuesta nuevos e innovadores son tan necesarios como las precauciones para evitar cualquier ampliación indebida de la red de control social oficial sobre los menores.

6. Alcance de las facultades discrecionales

6.1. Tomando en cuenta las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones.

6.2. Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las fases y niveles en el ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales.

6.3. Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas funciones y mandatos.

Comentarios de las Naciones Unidas:

Las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 tratan varios aspectos importantes de una administración de Justicia de menores eficaz, justa y humanitaria: la necesidad de permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas en cada caso particular, y la necesidad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier abuso de las facultades discrecionales y salvaguardar los derechos del joven delincuente. La competencia y el profesionalismo son los instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio excesivo de dichas facultades. Por ello, se hace especial hincapié en la idoneidad profesional y en la capacitación de los expertos como un medio valioso para asegurar el ejercicio prudente de las facultades discrecionales

en materia de delincuencia de menores. (Véase también las reglas 1.6 y 2.2.) En este contexto, se pone de relieve la formulación de directrices concretas acerca del ejercicio de dichas facultades y el establecimiento de un sistema de revisión y de apelación u otro sistema análogo a fin de permitir el examen minucioso de las decisiones y la competencia. Esos mecanismos no se concretan, pues no se prestan fácilmente para incorporarlos en reglas mínimas internacionales, que probablemente no podrán abarcar todas las diferencias que existen en los sistemas judiciales.

7. Derechos de los menores

7.1. En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.

Comentarios de las Naciones Unidas:

La regla 7.1 hace hincapié en algunos aspectos importantes que representan elementos fundamentales de todo juicio imparcial y justo que son internacionalmente reconocidos en los instrumentos, también la regla 14. La presunción de inocencia, por ejemplo, también figura en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La regla 14 y siguientes de las presentes Reglas Mínimas precisan cuestiones que son importantes con respecto al procedimiento en los asuntos de menores

en particular, mientras que la regla 7.1 ratifica en forma general las garantías procesales más fundamentales.

2.3.2.3 Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de Libertad.

Este instrumento jurídico internacional forma parte de los convenios internacionales que dieron origen a la formulación de la Doctrina de la Protección Integral y fue aprobado en el 8vo. Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente mediante la Resolución No A5/113.

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de Libertad tiene por objeto orientar al sistema de justicia en el respeto de los derechos y seguridad de los adolescentes contribuyendo a fomentar su bienestar físico y mental ante una sanción privativa de libertad y es aplicable a todos los menores de 18 que se encuentren sufriendo una detención preventiva.

Esta regla al estar dirigida a la protección de los adolescentes privados de libertad no contiene muchas normas que establezcan derechos y garantías procesales, de allí que sólo podamos encontrar los siguientes artículos que contiene de manera dispersa normas que influyen en desarrollo del proceso como son:

Artículo 11 acápites b: Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permite privar un niño de su libertad debe ser fijada por la ley.

Este artículo define al niño como una persona humana, lo cual hace de obligatorio cumplimiento todos los derechos y garantías inherentes a su condición

humana.

Artículo 17: Se presume que el menor detenido bajo arresto o en espera de juicio es inocente y deberán ser tratados como tales.

Este artículo consagra el principio de presunción de inocencia que es un derecho fundamental en todo proceso garantista.

Artículo 18 acápites a: Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, cuando exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones.

Artículo 60: Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, en principio una vez por semana y por lo menos una vez al mes, en condiciones que respeten la necesidad de intimidad del menor, el contacto y la comunicación sin restricciones con la familia y el abogado defensor.

Estos dos últimos artículos citados consagran el derecho a la defensa, a la información, a la asistencia legal y la intimidad que reafirman estos derechos que contiene el proceso penal de adolescentes en Panamá.

2.3.2.4 Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD).

Las Directrices de RIAD fueron aprobadas en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento a los delincuentes, realizado en La Habana Cuba en el año de 1990, mediante la Resolución No 45/112.

Estas Directrices constituyen uno de los documentos más modernos que existen en el marco del derecho penal, son la expresión de los últimos enfoques y

avances judiciales y sociales del problema de los niños y adolescentes considerados ya no como objetos, sino como personas de pleno derecho con sus propias capacidades que deben ser valoradas y protegidas.

Las Directrices de RIAD hacen referencia a la prevención general , la cual exige de la participación gubernamental , no gubernamental, comunitaria y de los propios adolescentes, extendiéndose las medidas a los tres principales entornos del proceso de socialización (familia, escuela, comunidad); a los medios de comunicación; la legislación y administración de justicia. Este último punto es el que tiene relación directa con el objeto de nuestro estudio, porque se consagran derechos y garantías procesales a favor del adolescente como las que contiene el punto ***VI de Legislación y administración de la justicia de menores***, las cuales son del contenido siguiente:

52. Los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes.

53. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes, así como su utilización para actividades delictivas.

54. Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigos severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución.

56. A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven.

57. Debería considerarse la posibilidad de establecer un puesto de mediador o un órgano análogo independiente para los jóvenes que garantice el respeto de su condición jurídica, sus derechos y sus intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los servicios disponibles. El mediador u otro órgano designado supervisarían además la aplicación de las Directrices de RIAD, las Reglas de Beijing y las Reglas para la protección de los menores privados de libertad. El mediador u otro órgano publicarían periódicamente un informe sobre los progresos alcanzados y las dificultades encontradas en el proceso de aplicación. Se deberían establecer también servicios de defensa jurídica del niño.

Estos puntos que contiene la sección VI de Las Directrices de RIAD establecen principios que constituyen derechos fundamentales para el fortalecimiento de un proceso garantista para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Estos derechos y garantías procesales son la de un derecho a una jurisdicción especializada, derecho a la dignidad humana, el derecho a la legalidad bajo el principio "nullem crimen nulla poena sine lege", el derecho a ser Juzgado por un Juez independiente e imparcial y el derecho a la defensa.

2.4 OTROS CONVENIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS:

La Ley No 40 de 26 de agosto de 1999 dentro de los elementos que sirven para su interpretación, incluye en su artículo 12 los tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales normativos suscritos por Panamá . De igual manera, dicho cuerpo normativo indica en su artículo 15 que dentro de todas las fases del procedimiento los adolescentes gozarán de todos los derechos y garantías y para esto se tomará en cuenta los instrumentos internacionales que consagren derechos y garantías a favor de los menores procesados.

Dentro de estos tratados, convenios y demás instrumentos internacionales normativos suscritos por Panamá se destacan: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos ,Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También, el artículo 12 de la ley No 40 señala expresamente que esta ley debe ser interpretada y aplicada con fundamento en la Convención de los Derechos del Niño y la normativa internacional en materia de menores, por lo cual se hace necesario un examen de estos instrumentos internacionales para establecer que derechos y garantías procesales contienen, pues estos instrumentos internacionales adquieren expresión de derecho positivo interno una vez que la Asamblea de Diputados cumplió con el procedimiento para adoptarlos como ley de la República, por lo cual se han integrado al derecho positivo nacional como leyes ordinarias.

Estos instrumentos también contienen artículos como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el debido proceso y el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño que contiene el Interés Superior, que la Jurisprudencia de la Corte Suprema a través del fallo emitido el 23 de mayo de 1991 los ha incorporados al llamado bloque de la Constitucionalidad, el cual sirve para emitir juicio de valor sobre la Constitucionalidad de las leyes y actos realizados por funcionarios públicos sujetos al control de Constitucionalidad.

De esta manera, procederemos a examinar en detalle cada uno de los referidos instrumentos en relación a derechos y garantías que le reconocen a los adolescentes dentro de un proceso que se lleva por la realización de un acto infractor de la ley penal, haciendo la salvedad que como la remisión que hace la ley No 40 en lo que respecta a estos instrumentos es muy amplia, tomando en consideración los aspectos puntuales de nuestro trabajo, sólo veremos cuatro de estos convenios, los que contienen a nuestro juicio derechos y garantías directamente aplicables al proceso penal de adolescentes, especialmente, en su etapa calificatoria.

2.4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948, busca como ideal común que todas los pueblos y naciones que se promuevan mediante la enseñanza y aplicación, el respeto a los derechos y libertades de lo individuos y se asegure por medio de instrumentos de carácter nacional e internacional su reconocimiento

y aplicación efectiva. En atención a este postulado que sirvió de fundamento para su aprobación, vemos como disposiciones directamente aplicables al tema objeto de estudio los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

- Artículo 2: Toda las personas tienen los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión opinión pública o de cualquiera otra índole origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.

Este artículo contiene el derecho a la igualdad procesal que es vital para el desarrollo de otros derechos del adolescente en todo proceso penal.

- Artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona.

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles inhumanos o degradantes.

Estos dos últimos artículos citados le reconocen la condición de persona humana a todo procesado, por lo tanto le asisten todos sus derechos y garantías procesales.

- Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

El artículo 8 presupone la posibilidad de recurrir ante un órgano superior, confiriéndole a la parte afectada el derecho de impugnar el fallo que considera que le perjudica, a fin de que sea revisado por una instancia superior.

- Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquiera acusación contra ella en materia penal.

Este artículo contiene un cúmulo de derechos y garantías procesales como el derecho a la igualdad procesal, el derecho a ser oído, y además consagra la necesidad de tribunales independientes y jueces imparciales que engloba la garantía de un debido proceso.

■ Artículo 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrán penas más graves que la aplicable al momento de la comisión del delito.

El artículo 11 contiene derechos fundamentales que consagran un proceso garantista como el derecho a la presunción de inocencia que tiene todo adolescente sumariado, el derecho a una defensa y la garantía de que no puede haber delito sin una ley previa.

2.4.2 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos.

Este instrumento de derechos humanos internacional fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigencia a partir del 23 de marzo de 1976. Panamá ratifica el Pacto Internacional de los Derechos

Económicos, Sociales y Políticos mediante ley No 14 de octubre de 1976.

Según su preámbulo busca el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Para el proceso penal de adolescentes que adopta Panamá, este instrumento jurídico, contiene normas aplicables como son:

Artículo 10: b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y debieran ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

Este literal del artículo 10 contiene la garantía procesal de la especialidad de la jurisdicción de menores, la cual permite el desarrollo de un proceso distinto al proceso penal de adultos.

Artículo 14: Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos u obligación de carácter civil.

Este artículo contempla la garantía del debido proceso y en sus literales reconoce derecho que se integran a esta garantía procesal como el derecho de presunción de inocencia, celeridad procesal, igualdad de partes, derechos de defensa y asistencia gratuita, contradicción, derecho de información, derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a una doble instancia.

Artículo 15: Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.

Según este artículo se reconoce el derecho a que ninguna persona sea

sancionada por un hecho, sino está previamente tipificado como delito.

2.4.3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Esta Convención fue firmada el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia el día 18 de julio de 1978. Panamá la ratificó mediante la ley No 15 de 28 de octubre de 1977.

En este instrumento internacional todos los Estados Parte se comprometen a respetar y garantizar los derechos, libertades protegidas y su libre y ejercicio pleno por las personas que resten sometidas a su jurisdicción si ningún tipo de restricciones.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) como un instrumento de derechos humanos, contiene el artículo 8 que hace referencia a las garantías judiciales que también son aplicables al proceso penal de adolescentes adoptado por Panamá. Este artículo 8 contempla la garantía del debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa y gratuidad de la misma, derecho de contradicción, derecho a no declarar contra sí mismo, derecho a la doble instancia, derecho a no ser juzgado por el mismo delito dos veces, derecho a la publicidad del proceso.

En su artículo 9, el Pacto de San José reconoce como principio válido el principio de legalidad, el cual establece que "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable".

2.5 DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES DE ADULTOS RECONOCIDOS A LOS ADOLESCENTES.

El artículo 15 de la ley No 40 de 23 agosto de 1999 establece que durante la

investigación de los hechos, así como durante todas las fases del procedimiento los adolescentes gozarán de todos los derechos que consagra la Constitución Política y las leyes de la jurisdicción penal ordinaria.

La Constitución en su artículo 63 indica que la ley organizará y determinará el funcionamiento de la jurisdicción especial de menores que atenderá los problemas de conducta juvenil, lo cual establece la necesidad de crear unos órganos jurisdiccionales especializados y diferenciados de aquellos otros que se ocupan de los adultos, para conocer de los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que crea una garantía procesal de la especialidad de la jurisdicción con Jueces, Fiscales y Abogados defensores especializados.

El artículo 14 de la ley No 40 también señala que todas las materias afines que no se encuentren expresamente reguladas en el proceso penal de adolescentes implementado en Panamá, serán tratadas conforme a lo establece el Código Penal y el Código Judicial, siempre que sus disposiciones no sean violatorias de derechos y garantías de la adolescencia.

El Código Penal en su articulado también consagra derechos y garantías básicas aplicables a favor del adolescente en la etapa calificatoria como: el principio de legalidad, el Juez Natural, la prohibición del doble juzgamiento y el de retroactividad de la ley penal. Esta garantía permite en materia penal que la ley que favorece al reo tenga siempre preferencia y retroactividad, aún cuando esté frente a un caso donde haya sentencia ejecutoriada, pues este derecho a su vez contiene dos principios como: la alternativa de aplicar leyes vigentes y distintas a un adolescente acusado de un delito determinado, porque el Órgano Judicial está obligado, por un lado a aplicar la nueva ley, aunque el delito se haya ejecutado

con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando le favorezca al adolescente; por otro lado, entre las leyes vigentes y distintas aplicables al caso de que se trate, deberá aplicársele al adolescente la ley que le sea más favorable.

El Código Judicial al ser el mismo una referencia adjetiva fundamental en todas aquellas cuestiones no previstas en la ley No 40, también contiene dentro de su articulado derechos y garantías aplicables al adolescente en conflicto con la ley penal, tales como: el derecho a la dignidad humana, la oficialidad del proceso, legalidad, prohibición de doble juzgamiento y el derecho a la defensa y a la asistencia legal gratuita del sumariado.

2.6 LA ETAPA CALIFICATORIA EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES:

La Etapa Calificatoria tiene una valiosa aplicación en el Proceso Penal de Adolescentes, porque a través de ella el Juez de la causa escucha los cargos que la Fiscalía le hace al Imputado, escucha los argumentos de la defensa, y decide ordenar o no la apertura a juicio. Según la doctrina general, la etapa calificatoria “ está pensada para filtrar la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, de modo que sea revisada la acusación o la querella, a fin de determinar si el asunto tiene mérito para ser llevado a juicio o si, por el contrario, no es procedente, porque no se está frente a un delito, y la acción penal se ha extinguido o se requiera mayor investigación. Otra de las finalidades de esta etapa, en la que en muchos casos podría significar la primera intervención del Juez en el proceso, es procurar una solución al conflicto a través de la aplicación de alguna de las medidas alternas” (SÁNCHEZ FALLAS, Francisco: La tramitación de los procesos penales Poder judicial, Escuela Judicial, San José

Costa RICA, 2001, Pág. 124.).

En el proceso penal de adolescentes en Panamá, la etapa calificatoria tiene su inicio una vez de finalizada la etapa de investigación, y corresponderá al Juez la facultad exclusiva de calificar el mérito legal del sumario. Para esto, en primer lugar, el Juez debe hacer un análisis del contenido del escrito de acusación, formulado por el Fiscal de Adolescentes, en sus aspectos formales y de encontrar vicios deberá devolverlos al Agente de Instrucción a fin de que corrija los errores, en cuanto a la forma, en un plazo perentorio de 24 horas.

Cuando el Fiscal de Adolescentes al culminar la investigación estima que lo que procede es un sobreseimiento definitivo o provisional, el Juez Penal de Adolescentes sin necesidad de realizar una audiencia en esta etapa calificatoria puede pronunciarse al respecto; esto se debe a que el procedimiento penal de adolescentes utiliza como normas supletoria el artículo 2198 del Código Judicial, porque se trata de una norma que no implica violaciones a los derechos y garantías de los adolescentes y regula esta situación procesal, cosa que no hace el proceso penal de adolescentes en esta materia.

En la etapa calificatoria, si no hay una acusación por parte del Fiscal de Adolescentes no puede existir un llamamiento a juicio, pues la titularidad del ejercicio de la acción penal le corresponde única y exclusivamente al Fiscal y en caso de sobreseimiento provisional queda abierta la posibilidad de que el Ministerio Público a través del Fiscal de Adolescentes pueda solicitar la re apertura de la causa si no ha transcurrido un año desde que se emitió el sobreseimiento provisional. También en esta etapa, el Juez de Adolescentes

puede acoger o modificar la petición del Fiscal conforme a las constancias del sumario y determinar la categoría del sobreseimiento, esta decisión es irrecurrible conforme lo señala el artículo 91 de la Ley No 40.

En la fase intermedia o etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes adoptado por Panamá mediante la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999, además de la decisión de la apertura a juicio, el Juez Penal de Adolescentes tiene la oportunidad procesal de pronunciarse sobre la existencia o no de causales de nulidad contempladas en los artículos 16 y 17 de la Ley No 40 y al verificar la existencia de alguna de estas causales puede decretar la nulidad absoluta de lo actuado y ordenar el archivo del proceso.

De igual forma, en la etapa calificatoria puede decidirse lo relativo al desistimiento de la pretensión punitiva presentada por la víctima u ofendido cuando ello se viable procesalmente y decretar la prescripción de la acción penal, toda vez que el artículo 1960 del Código Judicial establece que todo proceso penal cesa cuando exista alguna causa que extinga la acción penal y la pena.

En esta etapa cuando es recibido el escrito de acusación con las formalidades exigidas por la ley, le corresponde al Juzgador en base a su facultad de dirección del proceso determinar si el hecho punible investigado es susceptible de conciliación y en caso de ser procedente, la conciliación debe convocar a una audiencia de conciliación dentro de los 5 primeros días hábiles luego de presentada la acusación.

En el evento que el delito investigado no sea susceptible de conciliar, se fijará

audiencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito de acusación y se debe notificar a las partes personalmente, utilizando como norma supletoria las que regulan el correo certificado en el Código Judicial para notificar a los abogados defensores.

2.6.1 Despacho Saneador:

El despacho saneador es una institución procesal civil que surge en el procedimiento civil portugués y posteriormente fue introducido en América Latina en el código aprobado en Brasil en el año de 1939.

El despacho saneador es el instrumento procesal idóneo para que el Juez pueda exigir de las partes e inclusive enmendar de oficio todos aquellos defectos que impidan el adecuado trámite procesal de la causa, para así lograr la estabilidad de los juicios y procurar una sana y recta administración de justicia.

Es preciso distinguir entre el despacho saneador de la demanda y el despacho saneador del proceso. Este último es el que le permite al Juez corregir oficiosamente los vicios y deficiencias procesales y es el que ha asumido la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 en su artículo 75 que textualmente nos dice:

Artículo 95: Si el Juez Penal de Adolescentes estima que la apertura a juicio no procede porque hay errores de forma en el escrito de acusación, se lo devolverá al fiscal para que éste lo corrija.

Esta norma faculta al Juez en el proceso penal de adolescentes para que de manera oficiosa pueda corregir errores de forma del escrito acusatorio, depurando el proceso de cualquier vicio que pueda producir una nulidad o una

sentencia inhibitoria por la mala formulación de los cargos en el escrito de acusación. Esta regulación se ajusta a la búsqueda de la economía procesal tal como señala el Doctor JORGE FÁBREGA cuando nos dice “La finalidad de este Instituto es la de economía procesal, ya que un proceso que al momento de dictar sentencia y sea anulado ocasiona perjuicios a las partes, a terceros y al propio Estado. Lo mismo ocurre con las sentencias inhibitorias, en las cuales advierte el juez que la relación procesal es defectuosa, se ve precisado a la absolutio ab instancia, sin proferir fallo de fondo, obligando a las partes a proponer un nuevo proceso o abdicar a sus derechos “(FÁBREGA Jorge P: Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Jurídica Panameña, Panamá, 1998, Pág. 545).

Además de la finalidad que señala la doctrina del despacho saneador como es la economía procesal, consideramos que en el proceso penal de adolescentes este instituto procesal cumple otra finalidad como la de garantizar que los derechos y garantías procesales se cumplan, pues en base al artículo 95 de la ley 40 el Juez puede señalarle al Fiscal que indique expresamente los cargos que le formula al adolescente investigado permitiendo la contradicción y una defensa efectiva, porque se conoce de antemano cuales son los verdaderos cargos del que tiene que defenderse el adolescente y a la vez permite que se aplique en toda su extensión el principio acusatorio que informa al proceso penal de adolescentes adoptado por la Ley No 40.

2.6.2 La Audiencia de Calificación

La audiencia calificatoria en el proceso penal de adolescentes se efectúa una vez que el Ministerio Público remite la investigación con la correspondiente vista

fiscal al Juez de la causa, quien debe fijar la fecha de audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo del sumario. La fecha de la audiencia calificatoria debe ser notificada personalmente a todas las partes incluyendo a los padres, imputado, fiscal, el defensor y a la víctima del delito, aunque no es considerada como parte del proceso.

El acto de la audiencia calificatoria tiene que ser oral y en ella participan el juez, el fiscal, el querellante, el defensor y el adolescente quien debe estar presente para poder que se realice la audiencia en virtud de la exigencia de la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 17 de la ley No 40 que prohíbe la apertura de juicio en ausencia.

Al iniciarse la audiencia es deber del Juez de la causa explicarle al adolescente el objeto de la diligencia judicial que se va a realizar. Esta actuación es necesaria y su inobservancia puede viciar el proceso, pues el proceso penal de adolescentes tiene un fin pedagógico de la responsabilidad que se inicia desde la investigación hasta la terminación del mismo donde se busca que el adolescente se recite ante la propia conducta infractora y comprenda que la misma ha atentado contra normas sociales básicas y ha alterado la convivencia dentro de la sociedad. Además, la explicación de los cargos formulados en su contra al adolescente hace de manera efectiva su derecho a ser informado acerca de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia cumpliendo así con una de las garantías a su favor que consagra el artículo 17 numeral 3 de la Ley No 40.

Luego de habersele explicado los cargos y preguntado al adolescente si

comprendió los mismos, el Juez debe en la audiencia escuchar los alegatos del Fiscal, el Querellante en el caso de que esté constituido, y el Defensor del Adolescente, quienes harán uso de la palabra por un máximo de 30 minutos. Cabe destacar que los alegatos de las partes deben circunscribirse a la existencia o no de los elementos indispensables para la apertura a juicio, como lo son la comprobación o no de la existencia del hecho punible y la concurrencia de pruebas o graves indicios de responsabilidad penal que vinculen al sumariado con el ilícito investigado.

Una vez finalizado el alegato de las partes, el Juez en la audiencia calificatoria debe pronunciarse si estima que es menester sobreseer y deberá dejar consignado en el acto de audiencia la cesación de las medidas cautelares impuestas. En caso que el Juzgador estime que existen méritos para llamar a juicio, porque concurren los requisitos indispensables que exige el artículo 2219 del Código Judicial que se aplica supletoriamente al momento de calificar, porque la ley No 40 no regula esta materia expresamente, el Juez previa del señalamiento del antecedente del caso y pruebas decretará la formulación de cargos de manera genérica del delito que se le endilga al adolescente conforme a los tipos penales establecidos en el Código Penal.

La resolución de llamamiento a juicio que dicte el Juez de Adolescentes debe ser notificada personalmente y es irrecurrible. Cabe destacar que la Ley No 40 dentro de su articulado no contempla ninguna norma que indique el término que tienen las partes luego de ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio para aducir pruebas, no obstante a ello consideramos que no existe ningún vacío, pues el

artículo 2222 del Código Judicial permite que las partes puedan aducir pruebas dentro del término de 5 días a partir de la notificación del auto encausatorio. Este citado artículo es perfectamente aplicable en este aspecto, porque refuerza el derecho de defensa y al contradictorio que contiene el proceso penal de adolescentes en Panamá.

2.6.3 Valoración de las pruebas

En el proceso penal de adolescentes, al igual que el proceso penal de adultos, las pruebas tienen por objeto determinar la culpabilidad del imputado y su condena, en el caso en que quede acreditada su participación en los hechos constitutivos del delito enjuiciado, o bien su absolución cuando no quede acreditada dicha participación. Para ello es necesario que el Juzgador haga una valoración de las pruebas practicadas.

En este sentido, tenemos que la valoración de la prueba desde la perspectiva general del proceso penal viene a ser la operación mental de carácter intelectual que realiza el Juez para determinar la eficacia de las pruebas en relación a los hechos sustanciales motivos de la investigación, a fin de examinar si el medio probatorio cumple con las formalidades legales respectivas, no es contrario a la moral o al orden público ni violenta derechos humanos. Esta valorización se realiza en todas las etapas del proceso en la sumarial, intermedio o calificatoria y plenaria.

La valoración de las pruebas en la etapa calificatoria va dirigida primordialmente a determinar que el hecho investigado efectivamente se cometió y si el mismo constituye una conducta punible contenida en el Código Penal según lo indica el

artículo 2 de la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999. Otro aspecto de valoración de pruebas que se dan en la etapa calificatoria es la valoración de la existencia de pruebas o graves indicios que vinculen de una manera real y efectiva con el ilícito investigado al adolescente para que pueda existir la apertura a juicio en su contra.

Cabe señalar que atendiendo los principios que orientan el proceso penal de adolescentes y los derechos y garantías dentro del que se destaca el principio acusatorio, la prueba en esta etapa del proceso a nuestro juicio no está siendo valorada correctamente, pues el legislador patrio cuando aprobó la ley No 40 no estableció criterios de valoración orientados bajo la doctrina de Protección Integral, sino que por disposición del artículo 14 de la Ley No 40 se determinó que "todas la materias que no se encuentren reguladas serán tratadas conforme lo establece el Código Penal y el Código Judicial."

Esta remisión al Código Judicial que realiza el legislador, a nuestro juicio, afecta los derechos y la garantías procesales que tienen los adolescentes, puesto que en materia de valoración de pruebas el Juez penal de adolescentes tiene que asumir los parámetros de valoración de un proceso penal de adultos con marcados rasgos inquisitivos como es el proceso penal que actualmente tiene Panamá en materia de adultos, cuando la prueba en el proceso penal acusatorio está constituida y es valorada por aquella actividad que han de desarrollar las partes acusadoras en colaboración con el Tribunal a objeto de desvirtuar el estado de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye o derecho a la presunción de inocencia, el cual es el punto de partida de toda consideración

probatoria en un proceso penal que se inicia con la verdad provisional o interina de que el imputado es inocente. Esta orientación que tiene la prueba en el proceso acusatorio hace que adquiera dimensiones más trascendentes y caracteres básicos que recaen en derechos de especial importancia del imputado.

Los caracteres básicos de la prueba en el proceso penal acusatorio son los siguientes:

- La carga material de la prueba corresponde a la parte acusadora.
- Sólo tiene el carácter de prueba las practicadas en el juicio oral, bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad e igualdad.
- Las pruebas deben de haber sido obtenidas por medios lícitos.
- Las pruebas requieren de cierta entidad, no bastando las conjeturas o las meras sospechas.
- Existe libertad en los medios de prueba
- Existe libre valoración de la prueba.

De esta caracterización y connotación que se le da en la doctrina a las pruebas en el proceso acusatorio, podemos afirmar que al momento de valorar la prueba el Juez Penal de Adolescentes en primer lugar valora pruebas que han sido incorporadas en la etapa de instrucción del sumario donde no existe la contradicción de las partes y la inmediación del Juez en su práctica, pues no existe en la Ley No 40 ninguna disposición de carácter obligatorio como lo hay en los procesos penales acusatorios que obligue a la reproducción de las pruebas ante el Juzgado de la causa que conoce de la calificación, lo que permitiría una inmediación sobre las mismas que hagan más acertada la operación mental de

carácter intelectual que realiza el Juez al momento valorar la prueba y de decidir la apertura o no a juicio.

Esta situación nos lleva a afirmar que se hace necesario una reforma a la Ley No 40, de manera que la audiencia calificatoria no sólo tenga la finalidad de verificar la comprobación genérica del delito y la vinculación del adolescente al hecho investigado, sino que también se permita en la etapa de calificación la inmediación del Juez con las pruebas que sirven de sustento al Ministerio Público para pedir la apertura a juicio.

Esto es fácilmente sustentable bajo la premisa de un debido proceso donde se controle judicialmente, de alguna manera, la reproducción de los elementos de prueba buscando así la igualdad de partes, la contradicción y la inmediación que no opera actualmente en la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes, porque el Juzgador en la etapa calificatoria sólo se limita a examinar las pruebas acopiadas en las sumarias y hacer una valoración probatoria bajo las tres reglas de la sana crítica como lo son: 1) los principios de la lógica, 2) las máximas de experiencias y 3) los conocimientos científicamente afianzados.

Estas reglas antes señaladas limitan la valoración de las pruebas y dejan de un lado el concepto moderno de la prueba que inspira la Doctrina de la Protección Integral, la cual establece un sistema de valoración de pruebas fundamentado en el sistema de libre valoración de la prueba que es intrínseco al proceso penal acusatorio y una exigencia del mismo, partiendo de la base que en tal sistema se trata de apreciar la actividad probatoria de los intervinientes sin que el Juez, como ha señalado la jurisprudencia alemana, "se encuentre vinculado a reglas probatorias, es decir, a disposiciones legales acerca de la eficacia de las pruebas ni a disposiciones que establezcan los presupuestos bajo los cuales un hecho debe considerarse acreditado". En este sistema el juez tiene libertad para alcanzar o no la convicción de un hecho en tanto no se cuestione máximas de

experiencias generalmente reconocidas o se trate de decisiones absurdas o arbitrarias.

Por último en este aspecto de valoración de pruebas, debemos resaltar que en el procedimiento penal de adolescentes se puede decretar pruebas de oficio según lo dispone el artículo 109 de la Ley No 40 . Este artículo a nuestro juicio, aunque no es aplicable a fase de calificación debemos resaltar su incongruencia con todo el proceso, porque vulnera la esencia del proceso de corte acusatorio que tiene el proceso penal de adolescentes, ya que en este sistema son las partes quienes traen al proceso los elementos de pruebas para absolver o condenar y además se vulnera el principio de presunción de inocencia y de imparcialidad del Juez.

2.6.4 Calificación

La calificación legal es un acto o facultad que le compete única y exclusivamente al Juez de la causa y es un juicio de valor que hace para verificar la concordancia de los hechos materiales investigados en la causa seguida contra un adolescente con el delito imputado y el contenido del escrito de Acusación que formula el Fiscal de Adolescente. Esto permite una evaluación tanto formal como sustancial de lo acontecido durante la instrucción sumarial. Este juicio de valor que realiza el Juez penal de adolescente tiene como finalidad exclusiva determinar si existen méritos en la sumarias de dictar un sobreseimiento, ordenar la apertura a juicio, o declinar la competencia hacia la esfera correspondiente, o si existen nulidades procesales que vicien el proceso.

2.6.4.1 Sobreseimiento

En el proceso penal de adolescentes puede existir una resolución judicial que en

forma de auto dicta el Juez después de la fase de instrucción, produciendo la terminación o suspensión del proceso por falta de los elementos que permitirían la aplicación de la norma penal al caso, de modo que no tiene sentido entrar a la etapa plenaria de juicio.

El sobreseimiento (que proviene del latín *supercedere*, "desistir de la pretensión que se tenía") es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un Tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Habitualmente, es una institución del derecho procesal penal.

En el sobreseimiento, el Juez al ver la falta de pruebas o ciertos presupuestos no entra a conocer del fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo, pudiendo terminar el proceso antes de dictar sentencia. Por ese motivo, el sobreseimiento no provoca normalmente la situación de cosa juzgada y el proceso se podría reabrir más adelante.

Existen dos tipos de sobreseimiento; el sobreseimiento definitivo mediante el cual se dicta una resolución judicial que pone término al procedimiento; y el sobreseimiento temporal o provisional que suspende o paraliza el proceso cuando existen dudas sobre la comisión del hecho o sobre su autoría dando lugar a una mera suspensión del proceso, sin efecto de Cosa Juzgada material.

Según la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999, en la etapa calicatoria del proceso penal de adolescentes, el Juez está facultado para dictar Sobreseimientos definitivos conforme a lo señalado en el artículo 93 de la ley No 40, cuando concurren las condiciones que transcribimos a continuación:

- Cuando resulte con evidencia que el hecho que motiva la investigación no ha sido ejecutado
- Cuando el hecho investigado no constituya delito, o cuando ha sido materia de otro proceso que terminó con una decisión final y definitiva que afecta al mismo adolescente.
- Cuando el adolescente se encuentre exento de responsabilidad penal, ya sea por no hallarse en capacidad de comprender la ilicitud del hecho cometido, o no poder determinarse de acuerdo a esa comprensión, o porque se encuentre en alguno de los supuestos de las causas de justificación o de exclusión de la culpabilidad.

Este sobreseimiento definitivo que se contempla en la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes que adopta Panamá, implica que los hechos que fueron objeto de la investigación no tienen la virtud de hacer pasar el proceso a la siguiente etapa y a la vez permite que desde el momento que quede ejecutoriada la resolución que dicte el sobreseimiento definitivo, ésta asume los efectos de una sentencia absolutoria que hace tránsito a la Cosa Juzgada.

El artículo 94 de la Ley No 40 también contempla el sobreseimiento provisional cuando nos dice:

Artículo 94 El sobreseimiento provisional procede cuando no corresponde el sobreseimiento definitivo los elementos probatorios no son suficientes para solicitar la apertura del juicio.....

Como se puede observar, esta norma faculta al Juez a dictar sobreseimientos de tipo provisional en la etapa calificatoria, pero a nuestro juicio deja un vacío al no indicar los supuestos que debe valorar el Juzgador al momento de dictar un sobreseimiento provisional, vacío este que se puede llenar recurriendo al artículo 2208 del Código Judicial que es una norma que no entra en contradicción con los derechos y garantías del adolescente y le da seguridad y certeza jurídica al establecer los supuestos necesarios para dictar un sobreseimiento provisional como son; cuando los medios de justificación acumulados en el proceso no sean suficientes para comprobar el hecho punible; y cuando comprobado el hecho punible no exista imputado debidamente vinculado.

Por último, cabe señalar que el sobreseimiento provisional dictado en la etapa calificatoria, según el párrafo final del artículo 94 de la Ley No 40, permite que el Juez Penal de Adolescentes pueda declarar la prescripción de la acción penal, si el Fiscal de Adolescentes dentro del plazo de un año después de dictado el sobreseimiento no solicita la apertura del juicio.

2.6.4.2 Llamamiento a juicio

El llamamiento a juicio o la apertura de causa penal en la etapa calificatoria se produce cuando el Juez al realizar un juicio de valor sobre la investigación realizada por el Fiscal de Adolescentes, luego de terminado los alegatos en la audiencia calificatoria, encuentra que en los hechos investigados existe plena prueba de la existencia de una conducta tipificada como delito y además en la investigación concurre un medio probatorio que ofrece serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o grave indicio de

responsabilidad contra el adolescente sumariado puede disponer la apertura a juicio en su contra. Estos elementos indispensables para la apertura a juicio no están contenidos en la ley No 40 de 26 agosto de 1999, pero por remisión del artículo 14 de dicha ley se acude al procedimiento penal ordinario que en el artículo 2219 del Código Judicial tiene como exigencias indispensables para la apertura a juicio que en el proceso esté acreditado plenamente la existencia del delito, que exista un medio probatorio o graves indicios de responsabilidad que vinculen al sumariado con el hecho investigado.

La apertura a juicio o llamamiento a juicio de un adolescente según el artículo 92 de la ley No 40 debe hacerse a través de una resolución judicial denominada auto de enjuiciamiento, el cual debe respetar la estructura que señala el artículo 2221 del Código Judicial como norma supletoria aplicable, la cual nos dice lo siguiente:

El auto de enjuiciamiento constará de una parte motiva y otra resolutive, la parte motiva debe contener:

- Una narración sucinta y fiel de los hechos que hubiesen dado lugar a la investigación, con la expresión de la forma o modo como el hecho llegó a conocimiento del funcionario de instrucción.
- El nombre completo del imputado, los apodos y sobrenombres con los cuales es conocido en el proceso, así como los datos que permitan su clara identificación; y.
- El análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aquellos en

que se funda la imputación del hecho, así como la competencia del juzgador

La parte resolutive contendrá:

- La apertura de causa o llamamiento a juicio con imputación por el delito que corresponda , designándolo con la denominación genérica que le da el Código Penal en el respectivo capítulo o en el correspondiente título. Cuando no se divide en capítulos, sin expresar dentro género, la especie del delito a que pertenece con expresión del capítulo o título que se consideran aplicables;
- En la parte resolutive expresará también el nombre del defensor si lo tuviere y si el imputado está detenido o en libertad, la causa y motivo de esta. Si el imputado no tuviere defensor, el Tribunal le nombrará uno de oficio que podrá ser removido por designación de nuevo defensor hecha por el propio imputado.

Sobre este último punto que contiene el artículo 2221 del Código Judicial, creemos que no es aplicable al proceso penal de adolescentes, puesto que el derecho de defensa que tiene todo adolescente se da desde el inicio de la investigación en su contra, por lo tanto todas la actuaciones o diligencias donde no haya intervenido su defensor son nulas, por ende al momento de realizarse la audiencia calificatoria el adolescente debió contar con un defensor particular o un defensor de oficio asignado que cuente con la especialidad en materia de adolescentes infractores.

También, consideramos y así lo demuestra la práctica Tribunalicia en los

Juzgados penales de adolescentes que en el auto de enjuiciamiento se puede abrir el proceso a pruebas por un término común de cinco días, esto es viable aplicando supletoriamente el artículo 2222 del Código Judicial, el cual señala “En el auto de enjuiciamiento se señalará un término común de cinco días improrrogables, que comenzara al día siguiente al que se tenga por notificada dicha resolución”. Esta disposición garantiza el derecho de aportar pruebas, la contradicción e inmediación en el proceso, porque estas pruebas tienen que ser practicadas necesariamente por el Juez de la causa en la audiencia de fondo.

2.6.4.3 Declinación de competencia

La competencia no es más que “La exigencia de la distribución de la jurisdicción entre los diferentes jueces que forman la denominada magistratura juzgadora, se resuelve en el límite de la potestad atribuida a cada uno, el cual toma el nombre de competencia. Por eso la competencia no es un poder, sino un límite del poder y por tanto, una *ratio legitimationis*” (CARNELUTTI, Francesco : Derecho procesal penal, Volumen 2, Editorial Oxford México, 1999, Pág. 44).

Esta facultad o poder de conocer el hecho investigado puede perderse al momento de calificar el mérito de la investigación cuando el Juez en el proceso penal de adolescentes advierte, en primer lugar, que el sujeto activo al cual se le imputa el delito había cumplido la mayoría de edad al momento en que se realizó la conducta calificada como punible o aún no había alcanzado la edad de 14 cuando realizó el ilícito penal. En el primer caso tendría que remitirse la actuación a las autoridades de la jurisdicción penal ordinaria y en el segundo caso la infracción penal tendría que remitirse a los Juzgados de Niñez y

Adolescencia, tal como lo establece el artículo 48 de la ley No 40 cuando dice que el Juez penal de adolescentes tiene que declararse incompetente en estos supuestos.

También, en la Etapa Calificatoria puede existir una declinación de competencia en atención al hecho investigado, puesto que puede ocurrir que el mismo no constituya una conducta tipificada en el Código Penal, sino una falta de tipo administrativa tipificada en el Código Administrativo u otras leyes especiales. En este caso por disposición del artículo 2 de la ley No 40, el Juez Penal de Adolescentes debe remitir la causa al Juez de Niñez y Adolescencia, donde a nuestro juicio se le vulneran derechos fundamentales a los adolescentes, pues el Juez de Niñez y Adolescencia es quien investiga y juzga sin ningún procedimiento previamente establecido que garantice el debido proceso, lo cual retrotrae la situación del adolescente que comete una falta a la situación que se encontraban los adolescentes en la "doctrina de la situación irregular" actualmente superada.

2.6.4.4 Conciliación

El modelo de justicia juvenil educativo y de responsabilidad, el cual supone que los procesos de conciliación -reparación tengan un interés central, ya que los mismos se basan en el principio de responsabilidad penal.

El tratamiento de las infracciones que cometen los menores de edad, en el modelo de justicia educativa y de responsabilidad, se aboga por facilitar que el adolescente se recite ante la propia conducta infractora y comprenda que la misma ha atentado contra normas sociales básicas y ha alterado la convivencia

dentro de la sociedad, perjudicando con ello a otras personas para lo cual la conciliación- reparación son procedimientos idóneos.

En la conciliación se concibe al adolescente como un sujeto activo y responsable, con capacidad para asumir las propias acciones y las consecuencias que de ella se derivan. Tiene, por lo tanto, una elevada importancia que el adolescente cognitiva y emocionalmente se haga cargo del daño generado, al tiempo que se le facilite ayuda para lograr la conciliación- reparación con la víctima o el perjudicado por estimarse este como el proceso educativo más idóneo. De esta forma, en base al principio penal de la intervención mínima, el proceso de adolescentes puede abordar un procedimiento no judicializado, en el cual puede llegarse al sobreseimiento del expediente cuando se logra la conciliación o reparación entre el adolescente y la víctima. Lo fundamental para que la conciliación exista es que las partes lleguen a un acuerdo de poner fin al conflicto existente. Ese acuerdo puede ser de naturaleza no patrimonial o mixta.

Para el proceso penal de adolescentes implementado mediante la ley No 40, la conciliación es definida el artículo 69 como “ un acto voluntario entre la persona ofendida o su representante y el adolescente”. Esta definición es insuficiente, pues, no refleja todas las connotaciones que tiene este acto jurídico de poner fin al proceso, por lo tanto, creemos necesario tomar como válida, para delimitar conceptualmente este acto, la definición expuesta por la doctrina que nos dice que la conciliación no es más que “un acto efectuado por las partes o presuntas partes con la intervención de un funcionario , en virtud del cual mediante acuerdo total o parcial de lo que se controvierte, se da finalización a un proceso o se evita

uno futuro ” (AZULA CAMACHO, Jaime: Manual de derecho procesal, Tomo I, octava edición, Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 2002, Pág. 398).

La ley No 40 al asumir la conciliación como un medio no judicial de la resolución del conflicto establece ciertos presupuestos que deben concurrir para que la conciliación pueda emplearse. Entre estos hay que distinguir dos grupos:

- Presupuestos relativos al delito: El artículo 70 de la ley No 40 señala taxativamente cuales son los delitos susceptibles de terminación por la vía de conciliación. Estos delitos son todos los procesos, excepto los originados por la comisión de homicidio doloso, violación, secuestro, robo, terrorismo o tráfico de drogas.
- Presupuestos relativos al adolescente Imputado: En el párrafo final del artículo 70 establece que no se podrá autorizar la conciliación cuando en la misma se vulnere el interés superior del adolescente, que nos lleva a determinar que no podrá existir una conciliación cuando se vulneren derechos y garantías y se ponga en peligro el debido proceso.

El procedimiento en la conciliación, según el artículo 71 de la Ley No 40, puede iniciarse en cualquier momento del proceso siempre que no se haya dictado sentencia. El Fiscal puede iniciar en cualquier momento durante la investigación la conciliación y el Juez dentro de los cinco primeros días de presentada la acusación debe convocar a las partes a una audiencia de conciliación.

Además, se le impone el deber al Juez de conceder la realización de una audiencia de conciliación a solicitud de cualquiera de las partes, en cualquier

momento del proceso, siempre y cuando no se haya dictado sentencia. En la audiencia de conciliación debe estar presente las parte incluyendo los padres o representantes del menor de edad y redactarse un acta en la que se recogerán los acuerdos que han llegado, aprobados por la autoridad judicial o bien la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Esta acta deberá estar firmada por las partes y el Fiscal de Adolescentes.

Cabe destacar que en la audiencia oral se discuten y reconstruyen los hechos con los testimonios de ambas partes y, si es necesario, de otras personas. Es decir, interesa sobre todo la reconstrucción de los hechos para la búsqueda de una verdad; el castigo por la falta está en último plano; es más importante volver a relacionar a dos miembros de la comunidad disgustados que castigar a un trasgresor. El papel del Juez en la audiencia de conciliación es de ir orientando la discusión y ejerciendo su capacidad de convencimiento con la finalidad de lograr el acuerdo, procurando que con el mismo no se perjudiquen los derechos fundamentales del acusado. Sin embargo, dependerá de las partes la actitud de armonizar y de ajustar intereses, en lugar de buscar la venganza.

El acuerdo de conciliación alcanzado en la etapa calificatoria suspende el proceso e interrumpe la prescripción penal, así lo determina el artículo 74 de la Ley No 40 y en caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio, el proceso debe continuar como si no hubiese existido conciliación.

Cuando se cumple lo pactado correctamente, el Juez debe comunicar al Fiscal de Adolescentes, quien tendrá a partir de la comunicación un máximo de dos días para oponerse a la aprobación judicial del cumplimiento y en caso de aprobación

del acuerdo se dará por terminado el procedimiento, y se ordenará el archivo de la causa.

2.7 LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS PROCÉSALES DEL ADOLESCENTE INFRACITOR EN LA ETAPA CALIFICATORIA:

Es sabido que en el proceso penal moderno, fruto del Estado de derecho en el ámbito de la sociedad, adquiere una gran relevancia, no sólo porque ocupa la posición de primer nivel en el ordenamiento jurídico de todo Estado, sino porque materialmente en todo proceso penal los derechos en conflictos son fundamentales, de relevancia constitucional, al estar integrados de un lado por el derecho de ejercicio de la acción penal que tiene el Ministerio Público y de otro lado por el derecho a la libertad del adolescente que hace valer la defensa.

Esto hace que se deriven un conjunto de consecuencias del proceso en tanto a los derechos y garantías de los justiciables y en cuanto a los límites de los poderes públicos. Es de recordar que tanto el proceso es una estructura constituida por una serie ordenada de actos que se realizan en el tiempo, y las actuaciones de los sujetos procesales se hayan gobernados por principios que son categorías lógicas jurídicas muchas de las cuales han sido positivizadas en la Constitución y la ley, cuya finalidad es señalar el marco dentro del cual debe desenvolverse la actividad procesal.

La justicia penal de adolescentes actual que adoptó la Naciones Unidas a través de la Doctrina de la Protección Integral, es un sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías a todas las etapas del proceso de los adolescentes, a quienes se acusa de haber participado en la comisión de una

infracción a la ley. Estos derechos y garantías procesales se aplican en armonía con lo que verdaderamente caracteriza al derecho penal de adolescentes como es la finalidad educativa resocializadora y sancionadora de la pena, que en primer lugar permite que en el proceso penal de adolescentes se repare el daño causado en cualquiera fase del procedimiento y, consecuentemente, el archivo de la causa y en segundo lugar aconseja la menor restricción de derechos posibles.

El mandato de la justicia penal de adolescentes es contribuir a que los adolescentes se responsabilicen de sus actos, asegurándoles siempre su bienestar. Para este fin, el Juez tiene que tomar en cuenta en todas las etapas del proceso no sólo la infracción cometida, sino toda una serie de factores psicológicos, familiares y sociales en base a los que se determinan las medidas que mejor incidan en su educación, procurando causarle la menor aflicción y restricción de derechos.

La etapa calificatoria viene a constituirse en la oportunidad procesal propicia para que las finalidades del proceso penal de adolescentes se cumplan, así como también que los derechos y garantías procesales se apliquen correctamente. Esto es sustentado por el artículo 6 de la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 cuando nos dice en su numeral 4 que la ley No 40 tiene dentro de sus objetivos específicos “ reglamentar las etapas y las instituciones del proceso penal de adolescentes”, mientras que el artículo 15 del referido cuerpo legal nos dice “ que durante todas las fases del procedimiento los adolescentes gozarán de todos los derechos y garantías que consagra la Constitución Política y las leyes de la

jurisdicción penal ordinaria” de allí que procedamos analizar concretamente estos derechos y garantías.

En primer lugar, en la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes tal como está estructurada por la normativa vigente cobra vigencia el principio acusatorio que es considerado por la doctrina como “ Aquel que establece que *para que se abra un proceso y se dicte sentencia es preciso que exista una acusación formulada por el ministerio público o por una querella (con base en el derecho a la acción pública otorgada a cualquier ciudadano), en que sean distintas las funciones de acusar y juzgar. Ambas son funciones públicas, pero en virtud del principio acusatorio el Estado no puede acusar y juzgar al mismo tiempo a través de sus órganos y funcionarios* “. Este principio es el punto fundamental sobre el cual gira toda la actividad procesal que se realiza en la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes, pues el artículo 89 de la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 indica que “ si no hay acusación el Juez no puede llamar a juicio”, ya que no puede existir un proceso penal si no existe una acusación formal por parte del Ministerio Público, porque de lo contrario el juez que califica no le queda otra opción que ordenar el archivo del proceso. La caracterización del proceso penal de adolescentes como de corte acusatorio ha sido jurisprudencia reiterada de nuestra máxima corporación de justicia cuando nos dice:

Al enrumbar el planteamiento hacia lo que será la decisión de fondo el Pleno estima necesario recalcar que dentro de un sistema penal acusatorio, como el que caracteriza el régimen penal de adolescentes, cobra especial importancia la figura del juzgador penal (Juez, Tribunal Superior, etc.), como autoridad encargada de asegurar, prioritariamente, la realización de los derechos y las

garantías de los (las) adolescentes, a quienes se les atribuye la comisión de un acto infractor de la ley penal.(Sentencia de 5 de mayo de 2005 dictada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia).

Este principio aplicado a la etapa calificatoria, sin duda alguna representa la superación total de la etapa tutelar que sufrió el proceso penal de adolescentes, porque ya no es permitido que un Juez sea el que investigue y la vez juzgue la comisión de un acto infractor, porque el principio acusatorio establece estrictamente la separación de roles tanto del que investiga como el que juzga para evitar que exista una contaminación en las decisiones adoptadas. Este principio le da derecho al adolescente de contar con un Juez independiente e imparcial que está obligado a decidir la apertura a juicio o no, sobre la base de la acusación formulada por el Ministerio Público que ostenta el ejercicio exclusivo de la acción, lo cual da certeza y seguridad jurídica que los cargos presentados contra el adolescente deben estar sustentados en la normativa penal vigente y que además exista en el proceso una imputación de cargos por un delito específico estableciendo una clara diferencia de los roles de investigar y juzgar, así lo señala FRANCISCO ORTEGA POLANCO cuando nos dice "Este principio tiene un singular interés, puesto que contiene una de las diferencias básicas entre el actual y el anterior proceso penal ... organiza y simplifica el proceso, el juez no es parte, el fiscal si es parte, de modo que el juez juzga, mientras que las partes litigan. Este principio junto al de la igualdad entre las partes indica el giro del sistema procesal penal mixto hacia el sistema acusatorio" (ORTEGA POLANCO, Francisco: Código de procedimiento penal por un juez en ejercicio, Segunda edición, Editorial Corripio, Santo Domingo República Dominicana, 2006, Pág. 455). En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara cuando el

Tribunal superior de Niñez y adolescencia ha señalado lo siguiente:

“La función de administrar justicia corresponde a Magistrados y Jueces como lo señala el artículo 3 del Código Judicial y los agentes del Ministerio Público como lo señala el mismo precepto “participan en la administración de justicia en calidad de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio del la acción penal.” Ello se ha mantenido en la ley de responsabilidad penal para la adolescencia, que también tiene entre sus especialidades, la instrucción sumarial en manos de una dependencia especial para adolescentes adscrita el Ministerio Público, correspondiéndoles a las autoridades judiciales especiales para adolescentes sólo la función de juzgar conforme al procedimiento establecido.....

Si bien es cierto, que los Juzgados de Niñez y Adolescencia venían realizando la fase de investigación, decisión y vigilancia de las sanciones, es necesario que en calidad de juzgador se le coloque en la posición que le corresponde constitucionalmente, la de juzgar con imparcialidad. (Resolución No 7-1-T de 17 septiembre de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.)

Esta decisión, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia da prevalencia al deber insoslayable de separar la función de juzgar con la función de investigar, estableciendo claramente cuales son los roles de los sujetos que participan en el proceso penal de adolescentes. Esto, sin dudas, corresponde a las características fundamentales que tiene todo proceso de corte acusatorio donde todas las actuaciones giran en la necesidad de que exista un acusación por parte del organismo al que le toca el ejercicio de la acción penal. En el caso de Panamá es el Fiscal de Adolescentes y a la vez permite al Juzgador tal como lo señala la jurisprudencia, la libertad de juzgar con imparcialidad la acusación formulada por El Agente de Instrucción ante una eventual solicitud de apertura a juicio.

Otro derecho de suma importancia que se concretiza en la etapa calificatoria es el

derecho al debido proceso, pues por disposición propia en el artículo 17 de la ley No 40 se establece que al adolescente se le debe garantizar un tratamiento justo con las reglas del debido proceso, el cual consiste según la doctrina “ en una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto a las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contra parte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra las resoluciones motivadas y conforme a derecho “ (HOYOS, Arturo: El debido proceso, Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1998, Pág. 54).

Esta conceptualización del debido proceso como una garantía instrumental, permite defender efectivamente una amplia gama de derechos y en la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes, esta garantía instrumental se concretiza en el derecho a la igualdad de partes, el cual le permite al adolescente al momento de celebrarse la audiencia calificatoria poder exponerle a través de su defensa los razonamientos o alegatos en cuanto a la investigación realizada en las mismas condiciones y oportunidades que tiene el Agente de Instrucción.

El debido proceso como garantía instrumental permite la oralidad de la audiencia calificatoria , la cual permite la inmediación, pues permite que el Juez pueda escuchar a las partes, que el juicio sea público y que no se le pueda juzgar en

ausencia al adolescente y en cierta medida el derecho a la contradicción. Esto se desprende del contenido de los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999.

También cabe destacar que en esta etapa se consagra al menos en la calificación, el derecho del adolescente a tener un Juez independiente e imparcial al momento de valorar el mérito legal de la investigación, ya que el Juez calificador no ha tenido ninguna participación en la instrucción del sumario y su valor hasta ese momento sólo se concretiza a determinar si existen los requisitos necesarios para la apertura a juicio como lo son la acreditación de la existencia del hecho punible y la concurrencia de elementos de pruebas lícitas que vinculen al adolescente con la comisión del ilícito investigado. Sobre este punto, en materia de adolescentes y el debido proceso legal, la jurisprudencia nos ha señalado:

“Este Tribunal debe recalcar, conforme a la jurisprudencia nacional, que el requisito constitucional del debido proceso está compuesto por varios elementos concurrentes: autoridad competente, por los trámites legales y por el juzgamiento por una sola vez, en causas penales, policivas o disciplinarias. En este sentido, el debido proceso consiste fundamentalmente en los trámites que hay que adelantar y que fija la ley para todas las causas que a nivel administrativo y judicial se propongan.

En el caso que nos ocupa, es evidente que si el legislador estableció parámetros o limitantes para la participación del ofendido o víctima en el Proceso Penal de adolescentes, lo hizo en atención a las facultades constitucionales que le han sido conferidas en razón del “Principio de Especialidad de la Jurisdicción de Menores”, que en nuestro medio tiene raigambre Constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 59 de nuestra Carta Fundamental:.....

Estima el Pleno, que habría violación al debido proceso en el caso de que el legislador al momento de delimitar un procedimiento judicial, lo haga dejando en la indefensión a alguna de las partes,

situación ésta que a todas luces no presenta la norma demandada de inconstitucional.....

La propia Constitución establece limitaciones a los derechos fundamentales y distinciones en el caso de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal la propia Carta Fundamental consagra la obligación del Estado panameño de otorgar mediante la ley un tratamiento especial a los adolescentes con problemas de conducta juvenil.

Este tratamiento especializado no sólo abarca los derechos sustantivos y procesales de los y las adolescentes infractores, sino que, por disposición Constitucional el mismo debe extenderse a las medidas privativas de la libertad, conforme a lo señalado en el artículo 28 de la Constitución Nacional” (Sentencia de 5 de abril del 2004 dictada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.)

De esta jurisprudencia se observa claramente que el debido proceso es ampliamente reconocido por nuestros Tribunales de justicia y como éste representa una garantía instrumental permite el reconocimiento de los derechos del adolescente en la etapa calificatoria, especialmente la igualdad de partes por ser el adolescente uno de los sujetos procesales en el proceso penal de adolescentes y tener una audiencia pública sólo con las limitantes de la reserva para proteger su intimidad y el derecho a cuestionar el resultado de la investigación adelantado en su contra.

Sobre este último aspecto, cabe destacar que los Jueces Penales de Adolescentes, al calificar, han sido constantes en sus decisiones de decretar la nulidad de toda la investigación para salvaguardar el debido proceso, cuando de alguna manera se han incorporado pruebas que vulneren algún derecho o garantía del adolescente infractor. Este garantismo extremo que llama la doctrina y que estableció el legislador patrio, a nuestro juicio es perjudicial para el mismo proceso penal de adolescentes que tiene Panamá, pues crea una opinión pública

de impunidad e ineficiencia del proceso, cuando en realidad la obtención de una prueba que violenta derechos y garantías debe restarle eficacia o validez es a la prueba obtenida ilegalmente o ilícitamente y no debe ser un sustento legal para anular todo el proceso que se adelanta.

2.7.1 La eficacia y validez de los derechos y las garantías procesales del adolescente infractor en la etapa calificatoria según la ley No 40 de 26 de agosto de 1999.

La eficacia y validez de los derechos y garantías en todo proceso penal están condicionados, por su actividad y firmeza, para la consecución de un proceso garantista que realmente asegure un proceso justo e imparcial. En este orden de ideas tenemos que la etapa calificatoria del proceso penal de adolescentes en Panamá, establece un deber implícito del Juez Penal de Adolescentes de verificar que todo acto procesal se encuentre dentro del marco del debido proceso, pues dentro de las finalidades de esta etapa en el proceso penal de adolescentes, además de la comprobación genérica del delito atribuido y la vinculación del adolescente a la causa investigada bajo la garantía del debido proceso legal, está el deber de una regulación concreta que garantice el respeto a la constitucionalidad de los actos procesales evacuados en especial los que hacen referencia a la adición, modo, práctica y valoración de pruebas y la tipicidad de la conducta atribuida.

Sin embargo, como está regulado la etapa calificatoria en el proceso penal de adolescentes que creó la ley No 40 de 26 de agosto de 1999, esta etapa no resulta garante en toda su extensión del derecho a un Juez Imparcial como ocurre en el sistema anglosajón, pues el Juez de Adolescentes que emite la

apertura a juicio y ha valorado las pruebas aportadas por el Fiscal de Adolescentes es el mismo que enjuiciará en la audiencia de fondo. La probabilidad de encontrar culpable al adolescente es más alta, porque el Juez que califica es el mismo que decide la causa en la audiencia de fondo y puede condenar con las mismas pruebas que ha fundamentado su decisión para llamar a juicio.

También, se observa en esta etapa como está regulada que no existe la práctica de pruebas, lo cual evita una inmediación del Juez, porque éste se ve obligado a calificar con los elementos de pruebas a llegados que fueron recopilados en la etapa sumarial del proceso dificultando su valoración y lo más preocupante es que estos elementos sean tomados en la audiencia plenaria para sustentar una decisión de condena, sin la necesidad de que sean reproducidos en la audiencia plenaria de fondo. Con la ley No 40 de 26 de agosto de 1999 se ha pretendido aplicar un sistema penal acusatorio, pero no se tomó en cuenta este aspecto cuando el sistema de procedimiento penal acusatorio vigente en la mayoría de los países Latinoamericanos al regular la reproducción y valoración de las pruebas, a fin de dar la inmediación al Juez con reproducción y valoración de la prueba ha establecido " La prueba en el proceso penal acusatorio es aquella actividad realizada por la parte que acusa en nombre del Estado, a efecto de desvirtuar la garantía fundamental de presunción de inocencia, respecto al hecho delictuoso que se imputa, y que a la vez, se constituye en el punto de partida de lo que sustentará la apertura del juicio oral bajo los principios de inmediación y contradicción entre otros "(DELGADO PEÑA, Nelson: Principios del sistema acusatorio, Primera edición, Editorial Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá Colombia,

2005, Pág. 117).

En este orden de ideas, consideramos que en la etapa calificatoria también está mediatizado el derecho de contradicción que tiene todo adolescente en el proceso, pues es llamado a juicio con unas pruebas que no han podido ser debatidas en audiencia y no se le ha ofrecido la oportunidad de desvirtuarla. Este aspecto le da una connotación al proceso penal de adolescentes similar al sistema inquisitivo que actualmente cuenta nuestro país para adultos y esto pueda dar lugar a que se caiga en la premisa falsa que el Juez Penal de Adolescentes en la etapa calificatoria sólo está limitado a comprobar la existencia del delito y la vinculación del adolescente, dejando de examinar en esta etapa la forma en que la pruebas fue aducida, el modo que se practicó la prueba, y el valor que se le otorga.

Otro derecho que a nuestro juicio también se ve mediatizado es el derecho a la igualdad de parte, pues en la etapa calificatoria el adolescente a través de su defensa técnica no tiene la posibilidad de proponer pruebas para que sean examinadas por el Juez que califica, porque en esta etapa sólo es permitido después que queda ejecutoriado el auto de enjuiciamiento, la presentación de pruebas por el término de 5 días para que sean evacuadas en la audiencia plenaria. Cabe destacar que la oportunidad de proponer pruebas no está expresamente contemplada en la ley No 40 que regula el proceso penal de adolescentes, sino que ha sido práctica tribunalicia aplicando la normas complementarias del proceso penal de adultos como el artículo 2222 del Código Judicial, el cual permite la posibilidad de aducir pruebas por el término de 5 días

criterio este que ha sido aplicado al proceso penal de adolescentes, pero que no garantiza plenamente el derecho a la igualdad de parte, pues esta oportunidad de aducir pruebas se concretiza realmente es en la audiencia de fondo. Sobre este derecho a la igualdad de parte, el proceso penal acusatorio moderno nos ha señalado claramente “que tanto el Ministerio Público como la defensa actúen en igualdad de condiciones; es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente gozando de los medios de ataque y defensa y de igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba cuya vulneración produce indefensión.”

Por último, encontramos que la oralidad y publicidad son derechos reconocidos a los adolescentes en todo proceso penal; su actividad y firmeza en la etapa calificatoria también se ven afectado, porque en la audiencia calificatoria lo único que realmente es oral son los alegatos de las partes, ya que no existe un escrutinio de las pruebas oral y por ende éstas quedan en las constancias procesales.

CAPÍTULO TERCERO

MARCO METODOLÓGICO

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación es por su naturaleza documental, exploratorio y descriptivo. En este tipo de investigación los hechos ocurren, pero no pueden ser estrictamente controlados por el investigador. Se intenta examinar los problemas actuales mediante una descripción del hecho objeto de estudio y el examen objetivo de las condiciones actuales de la Etapa Calificatoria en el proceso penal de adolescentes, los derechos y garantías procesales del adolescente infractor consignadas en dicha etapa.

3.1 Fuentes de Información

3.1.1 Fuentes Primarias:

Servirán como fuentes de investigación para el presente trabajo investigativo, estudios realizados sobre los derechos y garantías del adolescente infractor en Latinoamérica como en Panamá, la Ley No 40 de agosto de 1999, obras doctrinales de diversos juristas especialistas en la materia y la jurisprudencia.

3.1.2 Fuentes Secundarias:

Se utilizará como fuentes secundarias la aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas a los Abogados Defensores de oficio en procesos penales de adolescentes, Fiscales y Jueces penales de adolescentes y Abogados Litigantes.

3.2 Población y Muestra:

3.2.1 Sujetos:

Los sujetos sobre los cuales recae la investigación lo conforman los Abogados Litigantes, Defensores de Oficio, Fiscales de adolescentes, Jueces penales de adolescentes, Jueces de niñez y de adolescencia de Veraguas y Coclé. Para ello, nuestra población muestra la compondrían 5 Fiscales, 5 Jueces, 5 Defensores de Oficio y 20 Abogados Litigantes.

3.2.2 Muestra:

La muestra de la población recae en treinta y cinco (35) sujetos.

- ◆ Cinco (5) Jueces Penales de Adolescentes y Niñez y Adolescencia 100%

- ◆ Cinco (5) Defensores de Oficio 100%
- ◆ Cinco (5) Fiscales 100%
- ◆ Veinte (20) Abogados Litigantes 15%

3.3 Sistema de Variable

3.3.1 Definición conceptual:

Proceso Penal de Adolescentes: Instrumento que consiste en una serie o sucesión de actos tendientes a la aplicación o realización del derecho en un caso donde aparezca imputado un adolescente.

Calificación del Proceso: Valoración jurídica que realiza el Juez de la investigación realizada por el Ministerio Público para determinar si existen los méritos legales para la apertura de causa criminal contra un adolescente involucrado en un hecho delictivo.

3.3.2 Definición Operacional

VARIABLES	INDICADOR	INSTRUMENTACIÓN
PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES	Conocimiento Competencia Término Derechos y garantías.	Examen de fuentes, documentos, Códigos leyes, expedientes y jurisprudencia
CALIFICACIÓN DEL PROCESO	Conciliación, Inmediación de la prueba Nulidades Sobreseimiento Llamamiento a juicio	Estadísticas de los Juzgados penales de adolescentes Cuestionarios a los Jueces penales de adolescentes, a los Defensores de Oficios, Fiscales y a los Abogados particulares con preguntas cerradas

3.4 Descripción del Instrumento

3.4.1 Cuestionario

Se efectuarán 10 preguntas de tipo cerrada, a fin de que el cuestionado exprese de manera precisa su propio criterio respecto a la interrogante formulada.

CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

La muestra que respondió las preguntas de la encuesta estuvo conformada por cuatro estratos: Fiscales de Circuito, Jueces Penales de Adolescente, Abogados Defensores de Oficio y Abogados Litigantes.

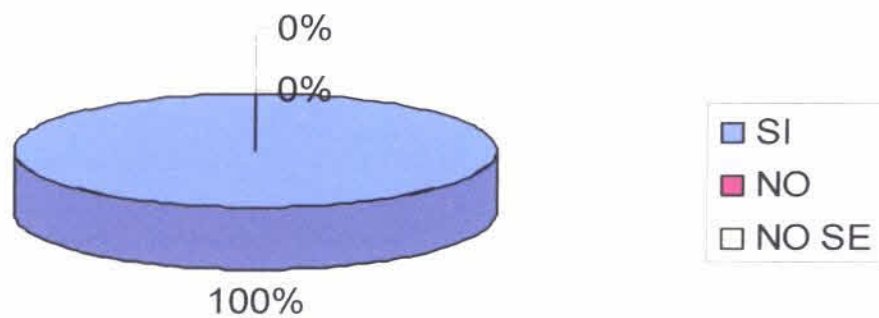
CUADRO No 1

Encuestados	Total	%	¿Conoce usted la ley No 40 de agosto de 1999 que establece el proceso penal de adolescente en Panamá?							
			SI	%	NO	%	NO SÉ	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Jueces penal Adolescencia	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	19	99%	1	1%	-	-	-	-
Total	35	-	34	99%	1	1%	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre el conocimiento del proceso penal de adolescentes el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual los cinco (5) Jueces manifestaron que conocían el proceso penal de adolescentes lo que representa un 100% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual los cinco (5) Fiscales manifestaron que conocían el proceso penal de adolescentes lo que representa un 100% de los encuestados ; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual los cinco (5) Abogados Defensores de Oficio manifestaron que conocían el proceso penal de adolescentes lo que representa un 100% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual diecinueve respondieron que sí conocían el proceso penal de adolescentes lo que representa un 99% de los encuestados y uno respondió que no, lo que representa el 1% de los encuestados .

CONOCIMIENTO DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N°1

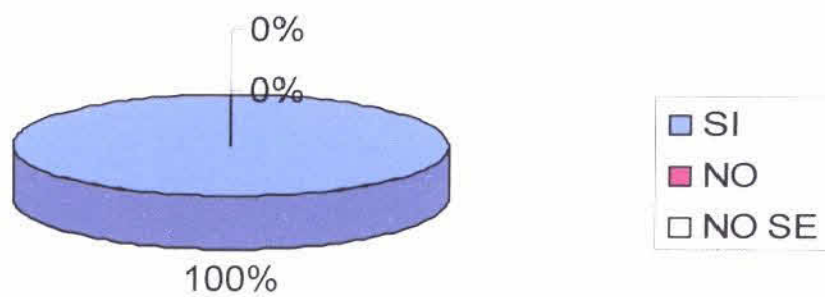


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N°1

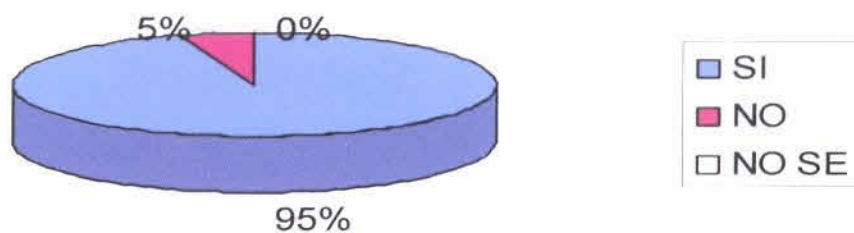


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DEL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N°1



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	19	99
NO	1	1
NO SE	0	0

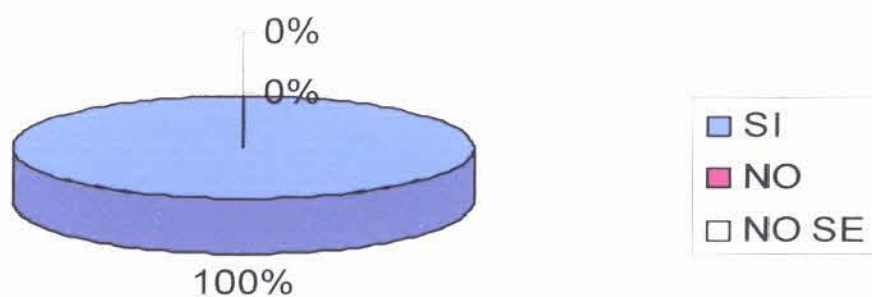
CUADRO No 2

<i>Encuestados</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>¿Le corresponde a los Jueces de adolescencia la competencia de los procesos penales de adolescente según la ley No 40 de 26 agosto de 1999 ?</i>							
			<i>SÍ</i>	<i>%</i>	<i>NO</i>	<i>%</i>	<i>NO SÉ</i>	<i>%</i>	<i>S/R</i>	<i>%</i>
Fiscales de Circuito	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Jueces	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	19	95%	-	-	1	5%	-	-
Total	35	-	34	97.14%	-	-	1	2.86%	-	-

En relación a esta pregunta sobre si la competencia del proceso penal de adolescentes le corresponde a los Jueces Penales de Adolescentes, el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual los cinco (5) Jueces manifestaron que sí tenían conocimiento que el proceso le corresponde a los Jueces Penales de Adolescentes lo que representa un 100% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual los cinco (5) Fiscales manifestaron que sí tenían conocimiento que el proceso le corresponde a los Jueces Penales de Adolescentes lo que representa un 100%; se aplicó a cinco (5) Abogados defensores de oficio, en el cual los cinco (5) Abogados Defensores de Oficio manifestaron que sí tenían conocimiento que el proceso le corresponde a los Jueces Penales de Adolescentes lo que representa un 100%; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual diecinueve respondieron que sí tenían conocimiento que el proceso le corresponde a los Jueces Penales de Adolescentes lo que representa un 95% de los encuestados y uno respondió que no sabía, lo que representa el 5% de los encuestados .

CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 2

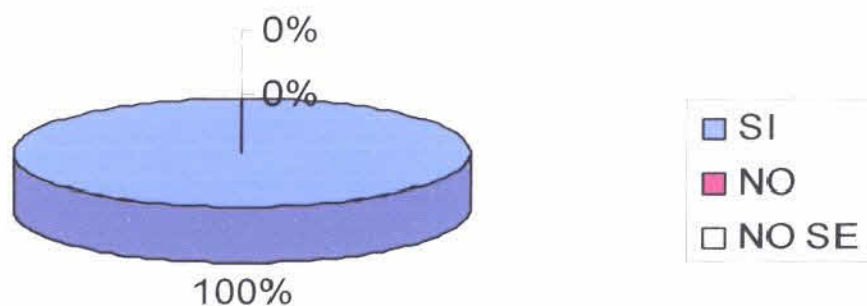


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 2

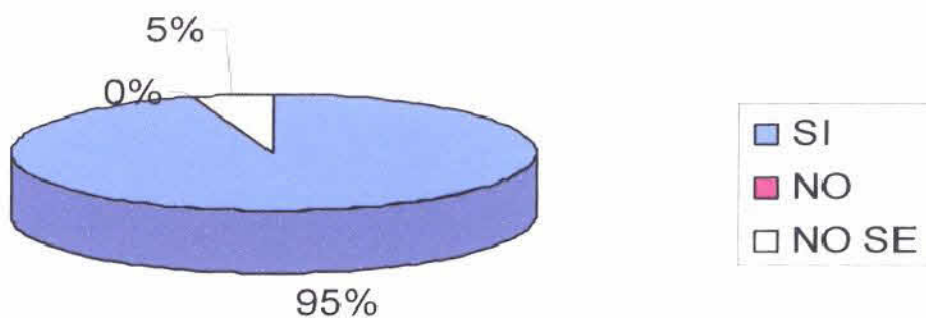


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 2



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	19	99
NO	0	0
NO SE	1	1

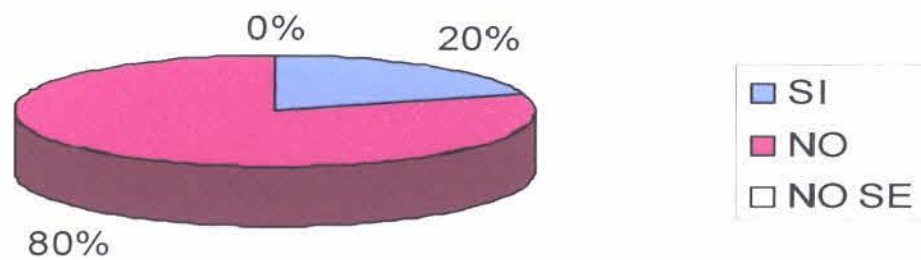
CUADRO No 3

<i>Encuestados</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>¿ Considera usted que es suficiente el termino de tres meses para la instrucción del sumario ?</i>							
			<i>SÍ</i>	<i>%</i>	<i>NO</i>	<i>%</i>	<i>NO SE</i>	<i>%</i>	<i>S/R</i>	<i>%</i>
Fiscales de Circuito	5	100%	1	20%	4	80%	-	-	-	-
Jueces	5	100%	2	40%	3	60%	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	1	20%	4	80%	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	5	25%	15	75%	-	-	-	-
Total	35	-	9	25.72%	26	74.28%	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre el término de tres meses era suficiente para la instrucción del sumario el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual los dos (2) Jueces manifestaron que sí era suficiente el término de 3 meses para la instrucción del sumario lo que representa un 40% de los encuestados, mientras que tres(3) Jueces respondieron que no era suficiente lo que representa el 60% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual los uno (1) respondió que el término de tres meses para la instrucción del sumario era suficiente, lo que representa el 20% de los encuestados y cuatro (4) manifestaron que el término de tres meses no era suficiente lo que representa un 80%; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual un (1) Abogado Defensores de Oficio manifestó que el término de tres meses era suficiente para la instrucción del sumario, lo que representa el 20% de los encuestados y cuatro (4) respondieron que no lo que representa el 80% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual cinco(5) respondieron que el término de tres meses era suficiente para la instrucción del sumario lo que representa 25% de los encuestados y quince respondieron que no, lo que representa el 75% de los encuestados .

ES SUFICIENTE EL TÉRMINO PARA INSTRUIR EL SUMARIO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 3

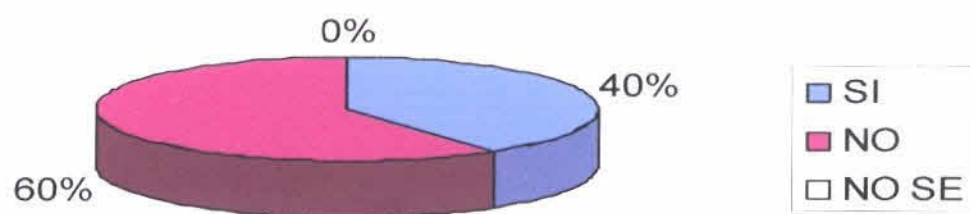


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	1	20
NO	4	80
NO SE	0	0

ES SUFICIENTE EL TÉRMINO PARA INSTRUIR EL SUMARIO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 3

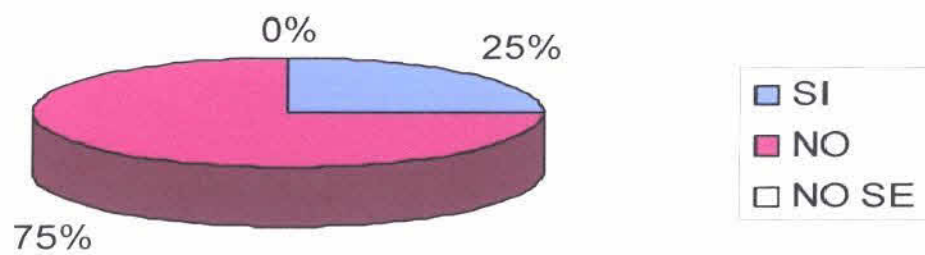


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	2	40
NO	3	60
NO SE	0	0

ES SUFICIENTE EL TÉRMINO PARA INSTRUIR EL SUMARIO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 3



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	25
NO	15	75
NO SE	0	0

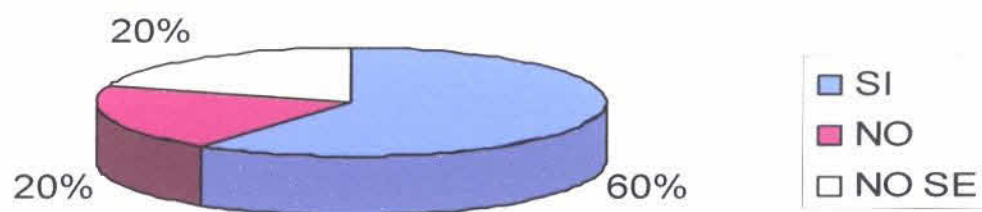
CUADRO No 4

<i>Encuestados</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>¿ Considera usted que se respetan los derechos y garantías procesales de los a adolescentes ?</i>							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	3	60%	1	20%	1	20%	-	-
Jueces	5	100%	4	80%	1	20%	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	2	40%	2	40%	-	-	1	20%
Abogados litigantes	20	15%	15	75%	3	15%	1	5%	1	5%
Total	35	-	24	68.57%	7	20%	2	5.72 %	2	5.72%

En relación a esta pregunta sobre si se consideraba que los derechos y las garantías procesales del adolescente se respetaban, el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual los cuatro (4) Jueces manifestaron que sí se respetaban los derechos y las garantías del adolescente lo que representa un 80% de los encuestados, mientras que un (1) Juez respondió que no lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual tres (3) respondieron que sí se respetan los derechos y las garantías de los adolescentes, lo que representa el 60% de los encuestados y uno (1) manifestó que no, lo que representa un 20% y uno respondió que no sabía lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual dos (2) Abogado Defensores de Oficio manifestaron que sí se le respetan los derechos y las garantías a los adolescentes lo que representa el 40% de los encuestados y dos (2) respondieron que no lo que representa el 40% de los encuestados y uno (1) no respondió, lo que representa el 20% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual quince (15) respondieron que sí se les respeta los derechos y las garantías a los adolescentes lo que representa 75% de los encuestados y tres (3) respondieron que no, lo que representa el 15% de los encuestados, uno (1) respondió que no sabe, lo que representa el 5% de los encuestados y uno (1) no respondió, lo que representa el 5% de los encuestados.

RESPECTO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 4

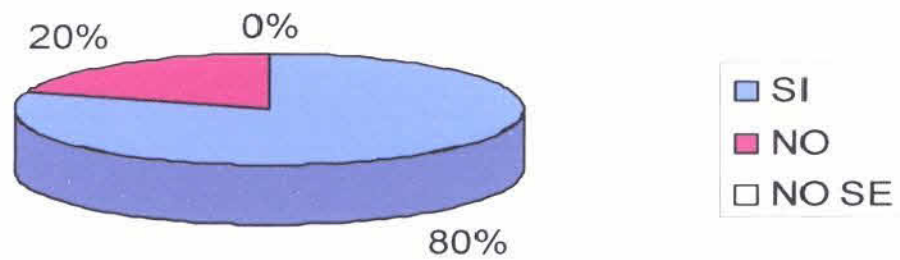


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	3	60
NO	1	20
NO SE	1	20

RESPECTO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 4

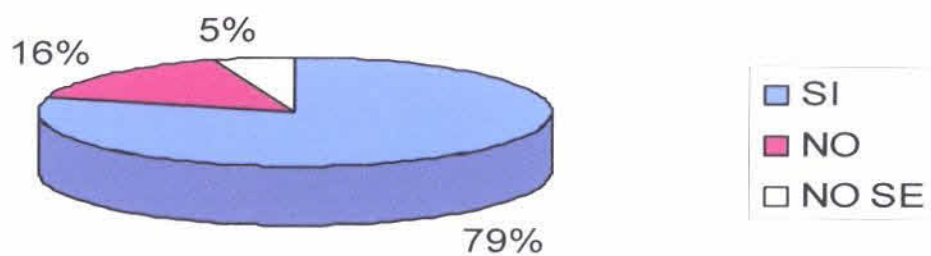


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	4	80
NO	1	20
NO SE	0	0

RESPECTO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 4



Fuente: Instrumento aplicado a Abogado

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	15	75
NO	3	15
NO SE	1	5

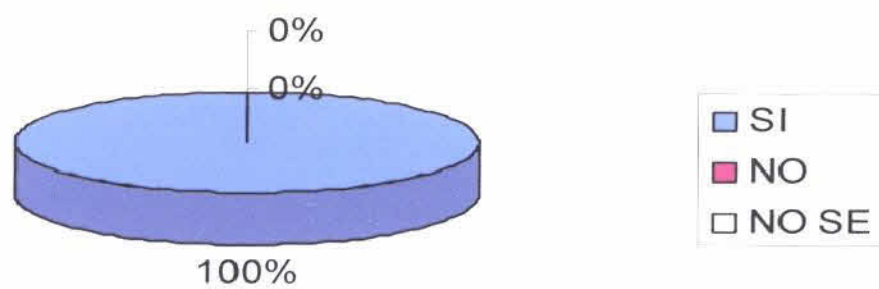
CUADRO No 5

Encuestados	Total	%	¿ Sabe usted cuales son los requisitos indispensables para llamar a juicio a un adolescente en la etapa calificatoria ?							
			SÍ	%	NO	%	NO SÉ	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Jueces	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	5	100%	-	-	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	14	70%	5	25%	1	5%	-	-
Total	35	-	29	82.85%	5	14.28%	1	2.86%	-	-

En relación a esta pregunta sobre si se conoce cuales son los requisitos indispensables para llamar a juicio en la etapa calificatoria, el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual los cinco (5) Jueces manifestaron que sí conocen cuales son los requisitos indispensables para llamar a juicio, lo que representa un 100% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual cinco (5) respondieron que sí conocen cuales son los requisitos indispensables para llamar a juicio, lo que representa el 100% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual cinco (5) Abogado Defensores de Oficio manifestaron que sí conocen cuales son los requisitos indispensables para llamar a juicio lo que representa el 100% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual catorce (14) respondieron que sí conocen cuales son los requisitos indispensables para llamar a juicio lo que representa 70% de los encuestados y cinco (5) respondieron que no, lo que representa el 15% de los encuestados, uno (1) respondió que no sabe, lo que representa el 5% de los encuestados.

CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LLAMAR A JUICIO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 5

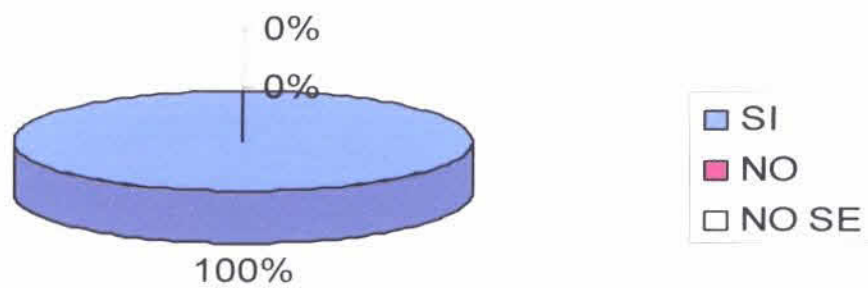


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LLAMAR A JUICIO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 5

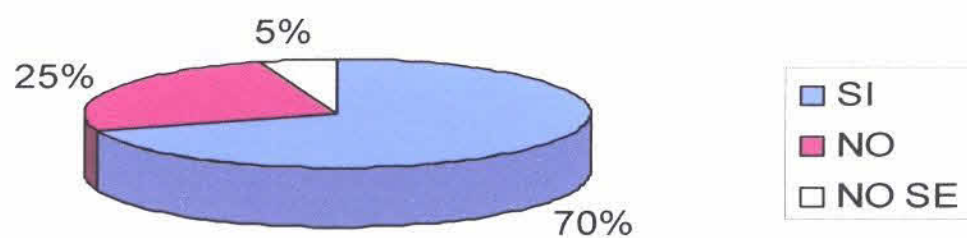


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LLAMAR A JUICIO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 5



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	14	70
NO	5	25
NO SE	1	5

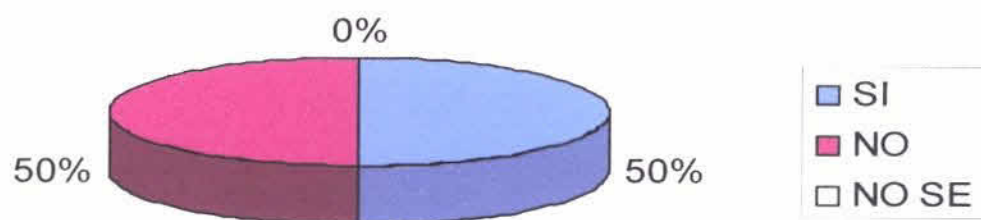
CUADRO No 6

Encuestados	Total	%	¿ Se resuelven los procesos frecuentemente mediante la conciliación en la fase calificatoria ?							
			SÍ	%	NO	%	NO SÉ	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	2	40%	-	-	2	60%	1	20%
Jueces	5	100%	4	80%	-	-	1	20%	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	2	40%	2	40%	1	20%	-	-
Abogados litigantes	20	15%	5	25%	6	30%	9	45%	-	-
Total	35	-	13	37.14%	8	22.85%	13	37.14%	1	2.86%

En relación a esta pregunta sobre si se resuelven los proceso frecuentemente mediante la conciliación en la fase calificatoria, el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual cuatro (4) Jueces manifestaron que sí lo que representa un 80% de los encuestados y uno respondió que no lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual dos (2) respondieron que sí lo que representa el 40% de los encuestados, dos (2) respondieron que no saben lo que representa el 40% de los encuestado y uno (1) no contesto lo que representa el 20 % de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual dos (2) Abogado Defensores de Oficio respondieron que sí lo que representa el 40% de los encuestados, dos respondieron que no lo que representa el 40% de los encuestados, uno (1) respondió que no sabe lo que representa el 20% de los encuestado ; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual cinco (5) respondieron que sí lo que representa 25% de los encuestados y seis (6) respondieron que no, lo que representa el 30% de los encuestados, nueve (9) respondieron que no saben, lo que representa el 45% de los encuestados.

EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 6

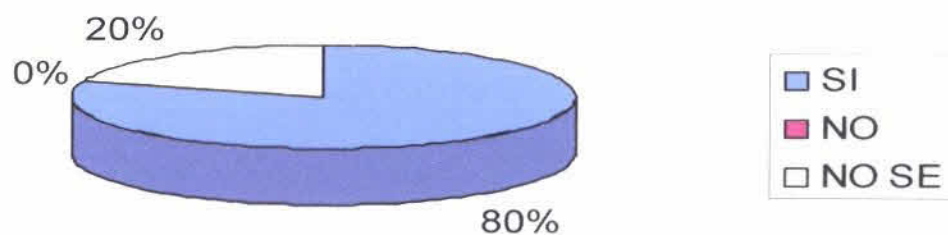


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	2	40
NO	2	40
NO SE	0	0

EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 6

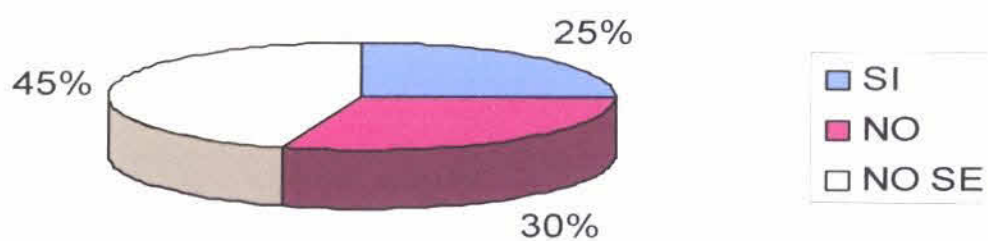


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	4	80
NO	0	0
NO SE	1	20

EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES.

ANEXO A LA PREGUNTA N° 6



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	5	25
NO	6	30
NO SE	9	45

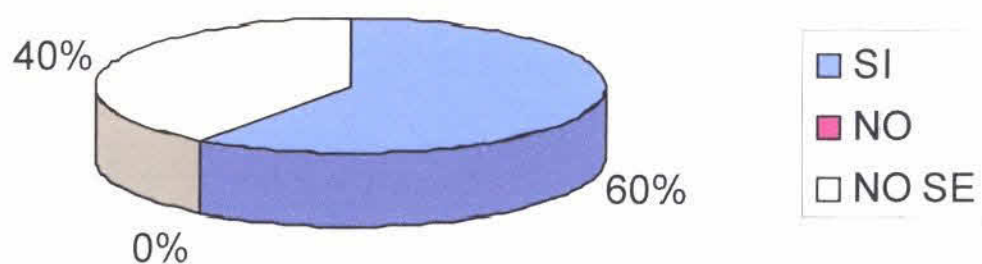
CUADRO No 7

Encuestados	Total	%	¿ Es efectiva la aplicación de las nulidades procesales en la etapa calificatoria para ordenar el archivo del proceso ?							
			SÍ	%	NO	%	NO SÉ	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	3	60%	-	-	2	40%	-	-
Jueces	5	100%	4	80%	1	20%	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	4	80%	1	20%	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	10	50%	2	10%	7	35%	1	5%
Total	35	-	21	60%	4	11.42%	9	25.72%	1	2.86%

En relación a esta pregunta sobre si es efectiva la aplicación de las nulidades procesales en la etapa calificatoria para ordenar el archivo del proceso el instrumento se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual cuatro (4) Jueces manifestaron que sí lo que representa un 80% de los encuestados y uno respondió que no lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual tres (3) respondieron que sí lo que representa el 60% de los encuestados, dos (2) respondieron que no saben lo que representa el 40% de los encuestado; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual cuatro (4) Abogados Defensores de Oficio manifestaron que sí lo que representa un 80% de los encuestados y uno respondió que no lo que representa el 20%; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual diez (10) respondieron que sí lo que representa 50% de los encuestados y dos (2) respondieron que no, lo que representa el 10% de los encuestados, siete (7) respondieron que no sabe, lo que representa el 35% de los encuestados y uno (1) no contestó lo que representa el 5% de lo encuestados.

APLICACIÓN DE LAS NULIDADES PROCESALES EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 7

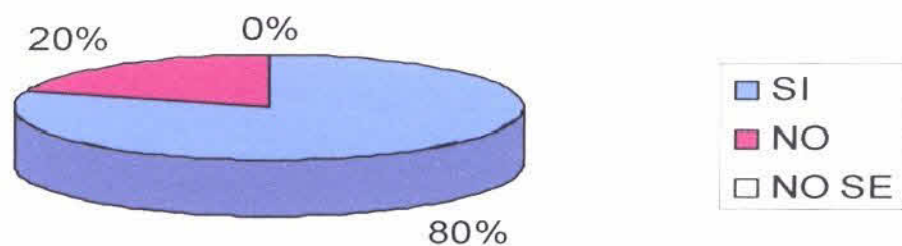


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	3	60
NO	0	0
NO SE	2	40

APLICACIÓN DE LAS NULIDADES PROCESALES EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 7

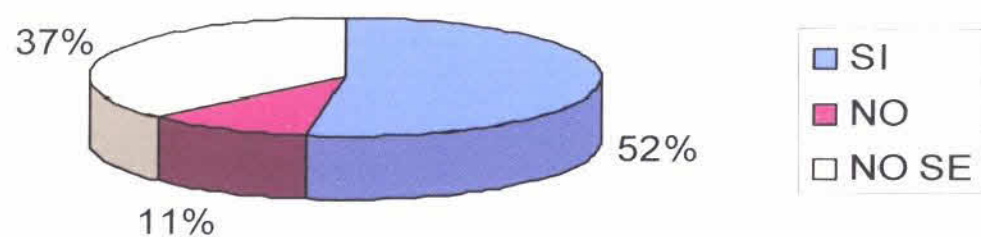


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	4	80
NO	1	20
NO SE	0	0

APLICACIÓN DE LAS NULDADES PROCESALES EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 7



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	10	50
NO	2	10
NO SE	7	35

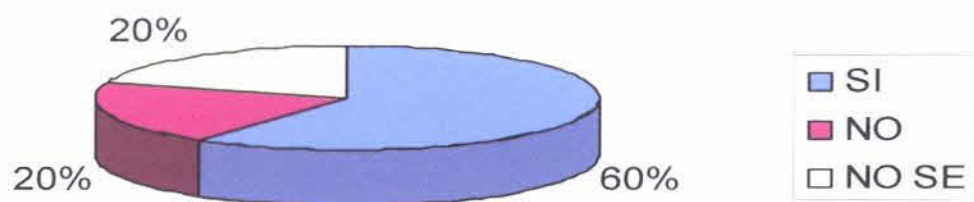
CUADRO No 8

Encuestados	Total	%	¿ Considera usted que es eficaz el derecho de defensa y de inmediación del juez en el proceso penal de adolescente, aunque no exista practica de pruebas en la etapa califiatoria ?							
			Si	%	NO	%	NO SÉ	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	3	60%	1	20%	1	20%	-	-
Jueces	5	100%	4	80%	1	20%	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	3	60%	2	40%	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	17	85%	-	-	2	10%	1	5%
Total	35	-	27	77.14%	4	11.42%	3	8.57%	1	2.86%

En relación a esta pregunta sobre si considera eficaz el derecho de defensa e inmediación del Juez en el proceso penal de adolescentes, aunque no exista práctica de pruebas en la etapa califiatoria se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual cuatro (4) Jueces manifestaron que sí lo que representa un 80% de los encuestados y uno (1) respondió que no lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual tres (3) respondieron que sí lo que representa el 60% de los encuestados, dos (2) respondieron que no saben lo que representa el 40% de los encuestado ; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual tres (3) Abogados Defensores de Oficio manifestaron que sí lo que representa un 60% de los encuestados y dos (2) respondieron que no lo que representa el 40% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual diecisiete (17) respondieron que sí lo que representa 85% de los encuestados y dos (2) respondieron que no saben, lo que representa el 10% de los encuestados, uno (1) no contestó lo que representa el 5% de los encuestados.

EL DERECHO DE DEFENSA E INMEDIACIÓN DEL JUEZ EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 8

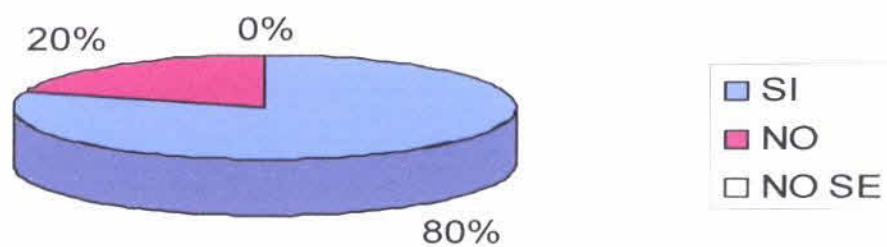


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	3	60
NO	1	20
NO SE	1	20

EL DERECHO DE DEFENSA E INMEDIACIÓN DEL JUEZ EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 8

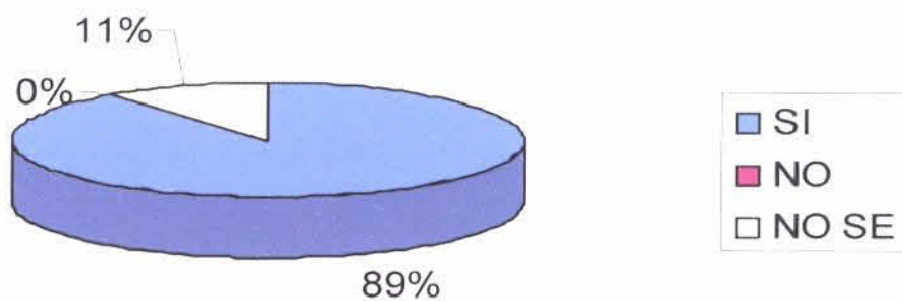


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	4	80
NO	1	20
NO SE	0	0

EL DERECHO DE DEFENSA E INMEDIACIÓN DEL JUEZ EN EL PROCESO PENAL DE ADOLESCENTES

ANEXO A LA PREGUNTA N° 8



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	17	85
NO	0	0
NO SE	2	10

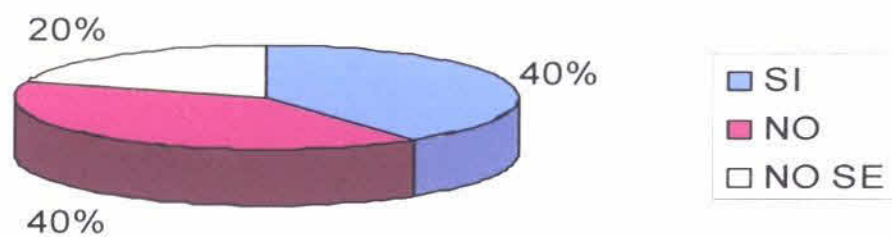
CUADRO No 9

Encuestados	Total	%	¿La solicitud de sobreseimiento permite el archivo del expediente sin la necesidad de acudir el adolescente a la audiencia calificatoria ?							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	2	40%	2	40%	1	20%	-	-
Jueces	5	100%	4	80%	1	20%	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	4	80%	1	20%	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	17	85%	-	-	2	10%	1	5%
Total	35	-	27	77.14%	4	11.42%	3	8.57%	1	2.86%

En relación a esta pregunta sobre si la solicitud de sobreseimiento permite el archivo del expediente sin la necesidad de acudir el adolescente a la audiencia calificatoria, se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual cuatro (4) Jueces manifestaron que sí lo que representa un 80% de los encuestados y uno respondió que no lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual dos (2) respondieron que sí lo que representa el 40% de los encuestados, dos (2) respondieron que no lo que representa el 40% de los encuestados y uno (1) respondió que no sabe lo que representa el 20% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual cuatro (4) Abogados Defensores de Oficio manifestaron que sí lo que representa un 80% de los encuestados y uno respondió que no lo que representa el 20% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual diecisiete (17) respondieron que sí lo que representa el 85% de los encuestados y dos (2) respondieron que no saben, lo que representa el 10% de los encuestados, uno (1) no contestó lo que representa el 5% de los encuestados.

APLICACIÓN DEL SOBRESEIMIENTO SIN NECESIDAD DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN

ANEXO A LA PREGUNTA N° 9

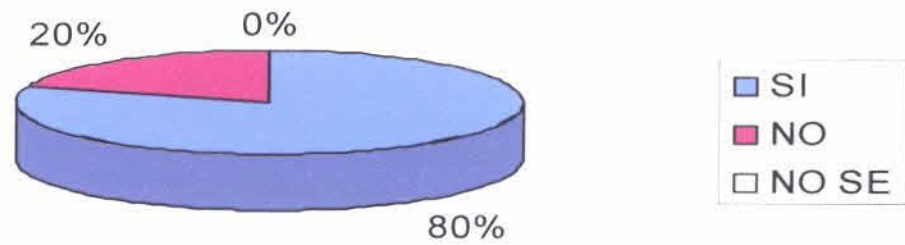


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	2	40
NO	1	20
NO SE	2	40

APLICACIÓN DEL SOBRESEIMIENTO SIN NECESIDAD DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN

ANEXO A LA PREGUNTA N° 9

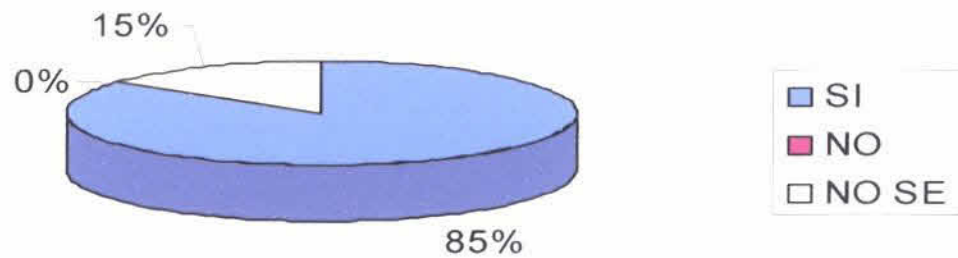


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	4	80
NO	1	20
NO SE	0	0

APLICACIÓN DEL SOBRESEIMIENTO SIN NECESIDAD DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN

ANEXO A LA PREGUNTA N° 9



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	17	85
NO	0	0
NO SE	3	15

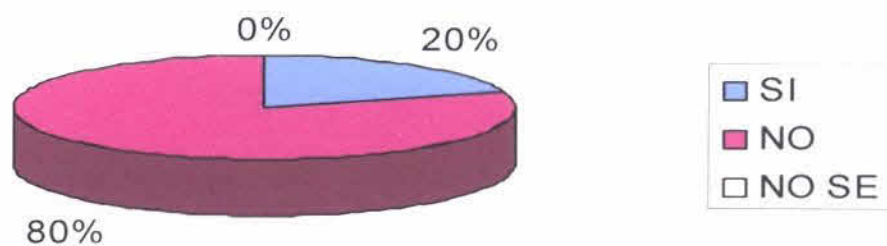
CUADRO No 10

Encuestados	Total	%	¿ Cree usted que el Juez que califica debe ser el mismo que conoce de la causa en la audiencia plenaria ?							
			SÍ	%	NO	%	NO SÉ	%	S/R	%
Fiscales de Circuito	5	100%	1	20%	4	80%	-	-	-	-
Jueces	5	100%	1	20%	4	80%	-	-	-	-
Abogados defensores de oficio	5	100%	-	-	5	100%	-	-	-	-
Abogados litigantes	20	15%	13	65%	7	35%	-	-	-	-
Total	35	-	15	42.85%	20	57.14%	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si cree usted que el Juez que califica debe ser el mismo que conoce de la causa en la audiencia plenaria se aplicó a cinco (5) Jueces de Adolescentes, en el cual uno (1) Juez manifestó que sí lo que representa un 20% de los encuestados y cuatro (4) respondieron que no lo que representa el 80% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Fiscales, en el cual uno (1) Fiscal manifestó que sí lo que representa un 20% de los encuestados y cuatro (4) respondieron que no lo que representa el 80% de los encuestados; se aplicó a cinco (5) Abogados Defensores de Oficio, en el cual cinco (5) Abogados Defensores de Oficio manifestaron que no lo que representa un 100% de los encuestados; también se aplicó a veinte (20) Abogados litigantes, en el cual trece (13) respondieron que sí lo que representa el 65% de los encuestados y siete (7) respondieron que no, lo que representa el 35% de los encuestados.

EL JUEZ QUE CALIFICA DEBE SER EL MISMO QUE CONOCE LA CAUSA EN LA AUDIENCIA DE FONDO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 10

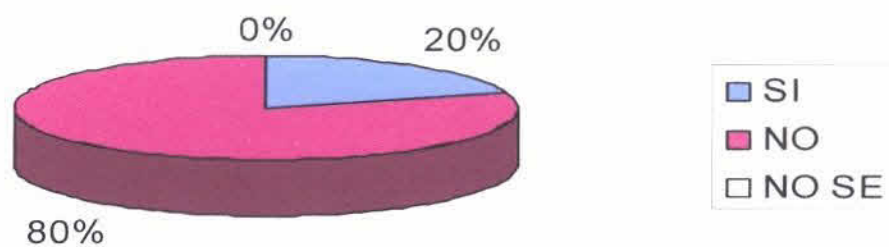


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	1	20
NO	4	80
NO SE	0	0

EL JUEZ QUE CALIFICA DEBE SER EL MISMO QUE CONOCE LA CAUSA EN LA AUDIENCIA DE FONDO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 10

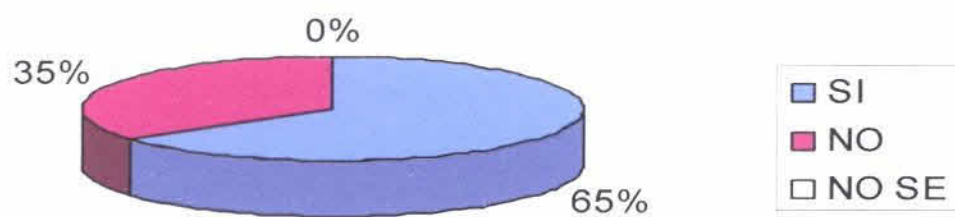


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	1	20
NO	4	80
NO SE	0	0

EL JUEZ QUE CALIFICA DEBE SER EL MISMO QUE CONOCE LA CAUSA EN LA AUDIENCIA DE FONDO

ANEXO A LA PREGUNTA N° 10



Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL
SI	13	65
NO	7	35
NO SE	0	0

CONCLUSIONES

- 1) El proceso penal de adolescentes en Panamá tiene como fundamento la Doctrina de la Protección Integral que estableció la Convención Internacional de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas.
- 2) El adolescente en el nuevo proceso penal que adopta Panamá tiene una categoría jurídica de sujeto pleno de derechos y garantías procesales.
- 3) El interés superior del menor que forma parte de la Doctrina de Protección Integral obliga a un esfuerzo colectivo de la familia, la sociedad y el Estado a fin de hacer efectivo los derechos y las garantías de los adolescentes.
- 4) EL nuevo proceso penal de adolescentes atribuye una responsabilidad al menor de edad con relación a sus actos y fija un nuevo modelo de justicia juvenil reconociéndole al adolescente los derechos y garantías que gozan los adultos en el proceso penal.
- 5) La especialidad de la justicia juvenil tiene un rango Constitucional y la acción penal única y exclusivamente debe ser ejercida por el Fiscal de Adolescentes.
- 6) El proceso penal de adolescentes adoptado por Panamá tiene características de tipo acusatorio y si no existe una acusación formal por parte del Fiscal de Adolescentes no puede existir la apertura a juicio.
- 7) Conforme está estructurado el proceso penal de adolescentes, la etapa calificatoria constituye la etapa procesal oportuna para que un Juez independiente e imparcial examine las nulidades procesales, aplique métodos alternos de solución de conflictos, y cumpla con las finalidades del proceso.
- 8) El Juez Penal de Adolescentes es un funcionario especializado a quien le corresponde el conocimiento de todas las infracciones de la ley penal que cometen las personas mayores de 14 años y menores de 18.
- 9) Todos los actos que se realizan en la audiencia calificatoria tienen que ser orales para que exista inmediación del juez.
- 10) En la etapa calificatoria se aplica el derecho de defensa a través de la intervención de los abogados defensores, el derecho de contradicción y el



RECOMENDACIONES

- 1) Recomendamos que el Estado panameño establezca, a la mayor brevedad posible, en toda la República la jurisdicción penal de adolescentes en todas las provincias, con su respectivos Jueces, Fiscales y Abogados Defensores para que se respete la especialidad de la jurisdicción.
- 2) Que se reforme la Ley No 40 de 26 de agosto de 1999 que crea el proceso penal de adolescentes en Panamá, a fin de que en la audiencia de calificación pueda reproducirse o practicarse pruebas que garanticen el derecho de contradicción e inmediación.
- 3) La modificación de la ley No 40 para que el Juez que califica y dispone de la apertura a juicio no sea el mismo que resuelve sobre la culpabilidad o inocencia del adolescente encausado.
- 4) Que se elimine la facultad del Juez Penal de Adolescentes de practicar pruebas de oficio, porque esta facultad viola el principio de presunción de inocencia, y la imparcialidad del Juez.
- 5) Sugerimos que las pruebas que violenten derechos y garantías del adolescente, porque fueron adquiridas por medios ilícitos y de forma ilegal sólo afecte la validez de la prueba y no anule todo el proceso, pues de esta manera no se crea una impunidad que produce desconfianza de la sociedad en la administración de justicia.

BIBLIOGRAFÍA

- 1- AZULA CAMACHO, Jaime: **Manual de derecho procesal**, Tomo I, 8° edición. Editorial Temis Bogotá Colombia, 2002.
- 2- BARATTA, Alessandro: **La situación de protección del niño en América Latina**, Editorial Eudeba Buenos Aires, 1992.
- 3- BARRIOS GONZÁLEZ, Boris: **Estudios de derecho procesal panameño**, Editorial jurídica Bolivariana, Panamá, 1996.
- 4- CARNELUTTI, Francesco: **Derecho procesal penal**, volumen 2, Editorial Oxford México, 1999.
- 5- DELGADO PEÑA, Nelson: **Principios del Sistema acusatorio**, 1° edición, Editorial Ediciones Nueva jurídica, Colombia, 2005..
- 6- FABREGA, Jorge: **Instituciones de derecho procesal civil**, Editorial jurídica, Panamá, 1998.
- 7- FUENTES RODRÍGUEZ, Armando: **Manual de derecho procesal panameño**, Editorial Portobelo, año 2007.
- 8- GARCÍA MÉNDEZ, Emilio- BELOFF, Mary: **Infancia, ley y democracia en América Latina**, 2° edición, Editorial Temis, Santa Fe Bogotá, 1999.
- 9- HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio: **Programa de derecho procesal penal**, 2° edición, Editorial Temis, Bogotá, año 1993.
- 10- Hoyos, Arturo: **El debido proceso**, Editorial Temis, Bogotá Colombia, 1998.
- 11- LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando: **Tratado de derecho procesal penal**, tomo I, Editorial Temis, Bogotá Colombia, año 1989.
- 12- MONTENEGRO, Marianela: **Fundamentos y Principios del Derecho Penal de Adolescentes**, Panamá, UNICEF, 1999.
- 13- ORTEGA POLANCO, Francisco: **Código de procedimiento penal para un Juez en ejercicio**, 2° edición, Editorial Corriptio Santo Domingo República Dominicana, año 2006.
- 14- SÁNCHEZ, Francisco: **La tramitación de los procesos penales**, Poder Judicial, Escuela Judicial, San José Costa Rica, 2001.
- 15- TIFFER SOTO MAYOR, Carlos: **Justicia juvenil y policía**, Editorial ILANUD, UNICEF, San José Costa Rica, año 2001.
- 16- SÁENZ, Wilfredo: **Las Perspectivas de Actualización de las Fases del**

proceso penal panameño, Editorial El Canal, Panamá, 2002.

LEYES

- 1- Ley No 40 de 26 de agosto de 1999
- 2- Constitución Nacional de la República de Panamá
- 3- Código de la Familia y el Menor
- 4- Ley No 46 del 6 de junio de 2003.
- 5- Ley No 48 del 30 de agosto de 2,004
- 6- Ley No 15 de 22 de mayo de 2007.

CONVENIOS INTERNACIONALES

- 1- La Convención Internacional de los Derechos del Niño
- 2- Las Reglas Mínima de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Regla de Beijing)
- 3- Las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes. Privado de Libertad.
- 4- Las Directivas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (directivas de RIAD).